

**Buenaventura: el orden del caos**  
Dinámicas históricas y territoriales del  
conflicto político, social y armado  
1958-2016

**Equipo de investigación:**

Óscar David Andrade Becerra

Alen Castaño

Lina Díaz

Carlos Duarte

Isabel Giraldo Quijano

Bárbara Lacoste

Hernán Camilo Montenegro Lancheros

Maritza Tangarife

Daniella Trujillo Ospina

**Instituto de Estudios Interculturales**  
**Pontificia Universidad Javeriana Cali**

## Tabla de contenido

<b>1. CONTEXTO TERRITORIAL Y SOCIOECONÓMICO</b>	<b>2</b>
1.1. <i>Descripción biofísica y territorial</i> .....	2
1.2. <i>Principales actividades económicas y conflictos por modelos económicos y productivos</i> .....	3
<b>2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Y SOCIODEMOGRÁFICA</b> .....	<b>6</b>
2.1. <i>Historia del poblamiento</i> .....	6
2.2. <i>Presencia de comunidades étnicas y culturales y procesos organizativos</i> .....	13
<b>3. CRONOLOGÍA Y CONTEXTO DEL CONFLICTO POLÍTICO, SOCIAL Y ARMADO</b>	<b>14</b>
3.1. <i>Presencia y trayectoria de actores armados</i> .....	14
<b>1958-1979: presencia escasa de actores armados</b> .....	15
<b>1980-1999: periodo insurgente</b> .....	18
<b>2000-2004: periodo de control paramilitar</b> .....	28
<b>2005-2011: posdesmovilización de las AUC</b> .....	42
<b>2012-2016: diálogos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP</b> .....	51
3.2. <i>Hechos victimizantes más significativos</i> .....	59
<b>Asesinatos selectivos</b> .....	60
<b>Desaparición forzada</b> .....	63
<b>Secuestro</b> .....	65
<b>Violencia sexual</b> .....	66
<b>Masacres</b> .....	67
<b>Desplazamiento forzado</b> .....	68
3.3. <i>Apuntes finales: hipótesis y proyecciones</i> .....	71
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	75
<b>ANEXOS</b> .....	83

### Índice de mapas

Mapa 1. Procesos productivos en Buenaventura .....	5
Mapa 2. Masacres según presunto responsable en Buenaventura 2000-2004.....	36
Mapa 3. Tasa de víctimas causadas por paramilitares en Buenaventura 1980-2016.....	39
Mapa 4. Tasa de víctimas causadas por las FARC-EP 1980-2016 .....	48
Mapa 5. Presencia de guerrillas y grupos posdesmovilización en la ciudad de Buenaventura 2012-2016. 55	
Mapa 6. Tasa de víctimas causadas por grupos posdesmovilización en Buenaventura 2005-2016.....	56

## Índice de gráficas

Gráfica 1. Hechos victimizantes según víctimas y casos en Buenaventura 1958-2016 .....	59
Gráfica 2. Víctimas de asesinatos selectivos según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016....	60
Gráfica 3. Víctimas de asesinatos selectivos según presunto responsable grupo paramilitar en Buenaventura 1958-2016 .....	62
Gráfica 4. Víctimas de desaparición forzada según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016....	64
Gráfica 5. Víctimas de desaparición forzada según presunto responsable AUC y FARC-EP en Buenaventura 1958-2016 .....	64
Gráfica 6. Víctimas de secuestro según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016.....	65
Gráfica 7. Víctimas de violencia sexual según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016.....	66
Gráfica 8. Víctimas de masacres según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016.....	67
Gráfica 9. Víctimas de desplazamiento forzado para Buenaventura 1984-2016.....	69
Gráfica 10. Principales hechos victimizantes según número de víctimas en Buenaventura 1958-2016.....	71

## Índice de tablas

Tabla 1. Uso del suelo en Buenaventura .....	3
Tabla 2: Distribución del conflicto en el municipio de Buenaventura .....	6
Tabla 3. Promedio de víctimas por año según periodo .....	40
Tabla 4. Promedio de combatientes de guerrillas asesinados por año según periodo .....	42
Tabla 5. Promedio de agentes del Estado y civiles asesinados por año según periodo .....	51

# INTRODUCCIÓN

# 1. CONTEXTO TERRITORIAL Y SOCIOECONÓMICO

## *1.1. Descripción biofísica y territorial*

El municipio de Buenaventura se sitúa entre el océano Pacífico y el oeste de la cordillera occidental, extendiéndose en un territorio de 6.078 km<sup>2</sup> (Alcaldía de Buenaventura, 2019), con 258.445 habitantes (DANE, 2018). Limita al norte con el municipio Litoral del San Juan, límite que es al mismo tiempo la frontera entre los departamentos de Valle del Cauca y Chocó. Hacia el oriente limita con los municipios de Calima, Dagua, Cali y Jamundí; al sur con el departamento de Cauca y al oeste con el océano Pacífico. Geográficamente, Buenaventura puede dividirse en tres zonas: la zona cordillerana, compuesta por el flanco oeste de la cordillera occidental; la zona media, desde el piedemonte hasta la costa; y la zona de llanura costera, donde se conecta el continente con el océano Pacífico. El casco urbano está dividido en 12 comunas, distribuidas entre la zona insular –llamada Isla Cascajal, donde se encuentra el puerto y donde se realiza una gran parte de las actividades económicas– y la zona continental –caracterizada por ser principalmente residencial–. Estas dos zonas se unen por el puente El Piñal. En la zona rural hay 19 corregimientos, 268 veredas y 388 asentamientos de diversos tamaños.

El municipio se caracteriza por un clima cálido muy húmedo, con precipitaciones anuales cercanas a 6.980 mm (IGAC, 1996. Citado por: Pérez, 2007, p. 64). Las principales fuentes hídricas, que juegan un papel fundamental en las dinámicas sociales de la población, son los ríos Naya, Yurumanguí, Timba Grande, Cajambre, Guapi, Mayorquín, Raposo, Anchicayá, Dagua, La Sierpe y Calima (que desemboca en el río San Juan).

Además de los corredores fluviales, a Buenaventura se puede acceder por aire, a través del aeropuerto Gerardo Tovar López, en el que operan las aerolíneas comerciales Aexpa y Satena, y el aeropuerto de la Armada Nacional, ubicado en Ladrilleros. Existe también una vía férrea entre Buenaventura y Cali que se extiende 174 km –casi inactiva desde mayo de 1998– y dos carreteras: la Simón Bolívar –la antigua carretera, que conecta a Buenaventura con Cali con un recorrido de 142 kilómetros– y la Alejandro Cabal Pombo –la nueva carretera, que conecta con Cali, con una extensión de 124 km, y con Buga, con una extensión de 121 km–.

Uno de los elementos más relevantes de Buenaventura es que tiene el puerto de carga marítima de trasbordo más importante en el Pacífico latinoamericano (Alcaldía de Buenaventura, 2019) manejando el 60% de la mercancía que entra y sale de Colombia (El País, 29 de julio de 2018), lo que lo ubica en un lugar central en términos geoestratégicos y económicos. Está constituido por 12 muelles, compartidos por la Armada Nacional y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. En cuanto a la administración, el sector privado participa con el 83% de la actividad económica portuaria y el sector público participa con el 17%, a través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte<sup>1</sup> (Pérez, 2008). En 2007 fue declarado Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, pero solo a partir de 2013 se empezó a implementar el acto administrativo que reglamenta tal condición.

---

<sup>1</sup> Existen tres tipos de muelles en el sistema de transporte marítimo colombiano: los privados, los especializados y las sociedades portuarias regionales. Los privados son principalmente utilizados por particulares para el comercio exterior; los especializados asumen el rol de exportación de productos tradicionales, como banano, carbón y petróleo; los muelles regionales se utilizan para movilizar el resto de los productos, a nivel nacional o internacional.

Buenaventura posee las siguientes áreas protegidas: el territorio colectivo del Consejo Comunitario La Plata, los parques nacionales naturales Los Farallones de Cali y Uramba de Bahía Málaga, el Parque Natural Regional La Sierpe y las reservas forestales protectoras nacionales del Río Anchicayá y la cuenca hidrográfica de los ríos Escalarete y San Cipriano (CIAT, 2015). El uso del suelo en este municipio, como lo muestra la siguiente tabla, está distribuido principalmente en área de conservación y protección ambiental, áreas forestales protectoras y áreas forestales productoras.

**Tabla 1. Uso del suelo en Buenaventura**

Uso potencial	Área (ha)	Porcentaje de extensión (%)
Área para conservación y protección ambiental	266.211,85	42,86
Áreas forestales protectoras	217.476,20	35,01
Áreas forestales productoras	126.648,71	20,39
Áreas con humedales y ríos	8.695,75	1,40
Zona urbana	1.999,98	0,32
Infraestructura	1,13	0,0002
Tierras para cultivos densos	0,48	0,0001
Tierras para cultivos en multiestratos	81,44	0,0131

Fuente: CIAT (2015)

### ***1.2.Principales actividades económicas y conflictos por modelos económicos y productivos***

En Buenaventura las actividades que más aportan a la economía nacional son las relacionadas con el puerto, a través del cual se importa principalmente trigo, maíz, productos químicos inorgánicos, láminas metálicas, soya, acero y otros productos químicos industriales. Estos productos provienen en su mayoría de Argentina, Chile, Perú, Canadá y China, y en conjunto representan el 58% del total de importaciones. Otros países proveedores de mercancías son Ecuador, Japón, México, Venezuela y Panamá. En cuanto a las exportaciones, los principales productos son coque, hulla, azúcar, preparados de azúcar, miel y melaza, con destino a Perú (35% de las exportaciones), Ecuador (10,1%), Chile (8,7%), México (5,4%) y Canadá (5,3%).

Gracias a la presencia del puerto de Buenaventura, el departamento del Valle del Cauca representa a nivel nacional el mayor volumen de comercio exterior (41%), seguido de Cundinamarca (38%) y Antioquia (13%). Los tres departamentos participan con el 91% de la carga total, además de concentrar cerca de tres cuartas partes del PIB nacional y más de la mitad de la población (Pérez, 2008, p. 71).

Los sectores económicos que generan más empleos son los sectores terciario y secundario, es decir, las actividades que ofrecen un servicio a la sociedad y aquellas relacionadas con la transformación de materia prima. Las actividades de transporte y almacenamiento –del sector terciario, que incluyen las actividades portuarias–, representan el 21,9% de los empleos en Buenaventura. Sin embargo, los sectores alternativos al puerto tienen que ver con comercio

(32,7%), educación (9%), alojamiento y servicios (7,4%) e industria (5,6%) (Cámara de Comercio, 2013, p. 210).

En la zona rural y costera las principales actividades correspondientes al sector primario – actividades de extracción de materia prima– son la pesca, la explotación de madera, la agricultura y la minería.

La actividad pesquera ha sido una actividad culturalmente representativa de esta región. En Buenaventura la pesca se practica de forma artesanal –para el consumo propio de las comunidades o para la venta en el mercado local– o de manera industrial –por las grandes empresas y enfocada al mercado internacional–. En 2011 se extrajeron 1’696.801 productos del mar (crustáceos, moluscos y peces) de forma artesanal y 670.552 de forma industrial (Agronet, 2011. Citado por: CIAT, 2015). Pese a ser una de las principales actividades de la región, en las últimas décadas se ha visto un descenso significativo en la producción debido al costo elevado de su operación, además de los problemas de seguridad y otras dificultades para acceder al puerto.

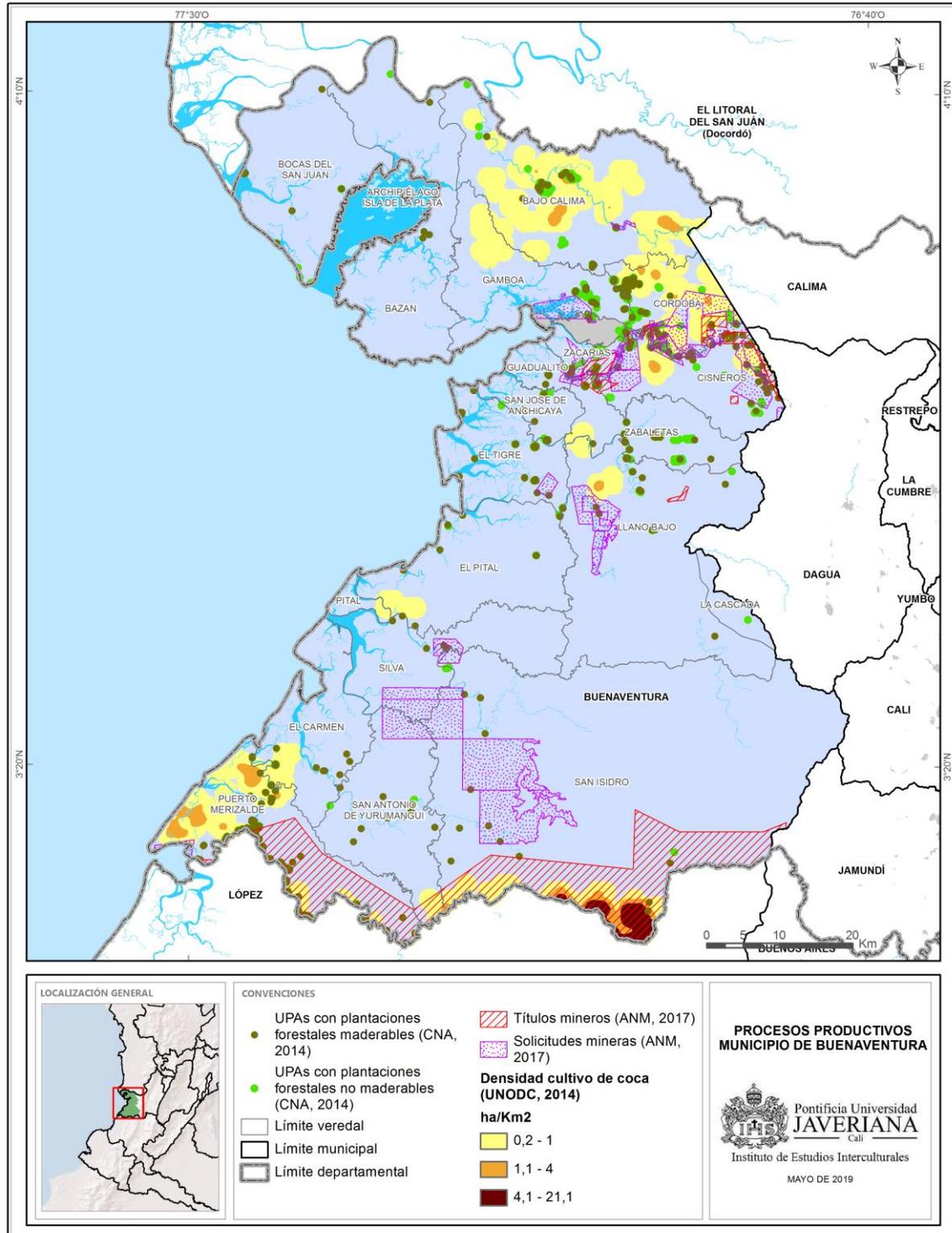
Por su parte, las actividades de explotación de madera han generado grandes recursos para la población de Buenaventura. En las actividades agroforestales se destacan los cultivos de caucho y tagua. No obstante, no existe un programa de reforestación y el manejo inadecuado de la extracción genera un desperdicio del 70% de la madera (Pérez, 2007).

En cuanto a las actividades agrícolas, en el municipio se cultiva principalmente chontaduro, borojó, cítricos, yuca y banano. Sin embargo, los cultivos agrícolas son escasos, dispersos y su desplazamiento constante los hace improductivos. Con base a la información de IGAC, se calcula que la mayor proporción de los suelos de Buenaventura (68,3%) es clasificada como de muy baja fertilidad. En el departamento, por ejemplo, este porcentaje es mucho menor (29,1%), al igual que el promedio nacional (39,9%). Además, si se suma el porcentaje de suelos del municipio con baja y muy baja fertilidad, el resultado es de 97%; por lo tanto el desarrollo de las actividades agrícolas en la región es limitado. En efecto, sólo el 5,74% del territorio se dedica a actividades agrícolas. El uso del suelo en el municipio de Buenaventura tiene más similitudes con el departamento de Chocó que con el resto de su departamento, pues en el Valle del Cauca el 21,5% del territorio tiene características apropiadas para ejercer actividades agrícolas (Pérez, 2007, p. 66).

Por último, el municipio de Buenaventura ha tenido una historia muy relacionada con la extracción minera, actividad que se practica desde la colonización. Se encuentran en la región oro, platino, plata, carbón y materiales de construcción. En las últimas décadas esta actividad se ha practicado principalmente de manera artesanal, sin embargo, han aparecido nuevos actores en el panorama minero. Actualmente existen 17 títulos mineros en la región, equivalentes a 8% del territorio municipal. De estos, 12 están relacionados con explotación de materiales de arrastre y asociados, y se extraen principalmente en la cuenca del río Dagua; las solicitudes para este tipo de explotación se localizan en las cuencas de los ríos Dagua y Calima. Los 5 títulos mineros restantes tienen que ver con cuarzo, manganeso y metales preciosos. Las solicitudes mineras son mayoritariamente para explotación de oro, platino y sus concentrados, y están agrupadas en torno a las cuencas de los ríos Cajambre, Raposo, Yurumanguí y Dagua. Además, se han establecido diez zonas mineras de comunidades negras en el municipio, que suman un área de 32.344 ha y

corresponden al 5% del territorio total (ANM, 2014). También se han ubicado varios focos de minería ilegal en el territorio, junto con actividades relacionadas con cultivos de uso ilícito.

**Mapa 1. Procesos productivos en Buenaventura**



Fuente: elaboración propia IEI (2019)

En el municipio de Buenaventura, la CVC ha identificado conflictos por el uso del suelo que ha clasificado en cuatro categorías, como lo muestra la siguiente tabla. Según esta información, la mayoría de la extensión del territorio no presenta conflictos.

**Tabla 2. Distribución del conflicto en el municipio de Buenaventura**

Conflicto	Área (ha)	Porcentaje en extensión (%)
Alto	8.153,38	1,31
Moderado	15.005,91	2,42
Sin conflicto	595.955,14	95, 95
Zona urbana	1.999,98	0,32
Sin evaluar	1,13	0

Fuente: CVC, 2015 (Citado por: CIAT, 2015)

En contravía con esta información, el acercamiento que el IEI ha tenido en el territorio ha evidenciado la existencia de múltiples conflictos, especialmente por una contraposición muy marcada entre los modelos de desarrollo de las comunidades y de los sectores económicos privados y estatales. Uno de los conflictos más fuertes tiene que ver con un plan proyectado hasta el año 2050 para ejecutar en Buenaventura 12 megaproyectos –de los que solo 2 tienen consulta previa– orientados a la ampliación del puerto. Las comunidades han estado al margen del diseño, implementación y veeduría del plan, que además según la forma como está pensado, implica un desplazamiento masivo en Isla Cascajal y tiene un componente de dragado que impacta directamente la zona rural y por ende otros territorios del Pacífico. En relación con este plan macro se están presentando conflictos que ya están generando el desplazamiento de las y los habitantes de las comunas aledañas al Terminal Logístico de Buenaventura. En las zonas rurales se presentan diferentes conflictos por minería y cultivos de uso ilícito.

## **2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Y SOCIODEMOGRÁFICA**

### ***2.1. Historia del poblamiento***

El legado histórico de las poblaciones asentadas en el territorio ha marcado su evolución, y su llegada empezó mucho antes de la fundación política del municipio de Buenaventura, compuesto actualmente por una población que mayoritariamente se reconoce como afrodescendiente (88,7% en la cabecera y 84,2% en el resto) (DANE, 2005), descendiente de personas esclavizadas. Se pueden identificar cuatro etapas en el proceso de poblamiento en la región.

#### ***Etapas precolonial***

Antes de la llegada de los españoles, en el Pacífico centro habitaban varias comunidades indígenas provenientes de la cultura chibcha. Estas comunidades eran de densidad poblacional baja y estaban dispersas en toda la región. Actualmente, los descendientes de esta cultura que aún viven en Buenaventura se identifican como waunanas, emberas y cunas, y se concentran en el norte del río San Juan, hacía Chocó (Vargas, 1993. Citado por Valencia, 2014).

### *Modelo insular español*

La historia colonial de Buenaventura comenzó con la llegada de Vasco Nuñez de Balboa en 1515 por el “mar del sur” o “mar del Pacífico” (nombre que él mismo le concedió). En esa época, el único interés que tenían los colonos en esa región era tener acceso al interior del continente, no pretendían convertirlo en un asentamiento definitivo (Pérez, 2007). Luego, la fundación de Cali (1536) y su desarrollo económico incitaron la exploración de tierras en sus alrededores, con un especial interés por acceder al mar y mejorar la conexión con Panamá y los países y ciudades conquistados en el Caribe. Estas exploraciones dieron inicio a la primera ocupación de estas tierras por parte de europeos (Valencia, 2014, p. 224).

En 1539 llegó a la región el conquistador Juan Ladrillero, quién siguió las rutas de comercio de sal establecidas por las comunidades indígenas. Durante su expedición, Ladrillero no pudo fundar una población definitiva debido a la resistencia de los nativos, la selva contundente, la humedad, la temperatura excesivamente alta y las condiciones geográficas que impedían establecer un centro de operaciones para los conquistadores en la región (Gärtner, 2005; Aprile-Gnisset, 2002). Luego gobernó el conquistador Pascual de Andagoya, quien fundó varias ciudades a partir de 1540, por orientación de la corona española. Su gobierno cubría gran parte del territorio que hace parte ahora del Pacífico centro y sur.

El conjunto de estas exploraciones y ocupaciones llevaron a la dominación de la población indígena y a la imposición sobre ésta de un modelo socioespacial diferente al propio, llamado “insular español” por Aprile-Gnisset y Mosquera (2006), que se concentró en las zonas enclave de la minería esclavista de aluviones. Las comunidades indígenas que se ubicaban en la cordillera, llamados “indios de la montaña”, fueron inicialmente explotados por los españoles para el comercio de sal que se daba desde Buenaventura hacia Cali. La utilización de los indígenas como “tamemes” (cargueros), además de las enfermedades que surgieron del contacto con los europeos, menguaron considerablemente la población indígena.

Bajo el gobierno del conquistador Andagoya (mitad de siglo XVI), se intentó fundar la primera población, conocida como Buenaventura. El puerto fluvial en el río San Juan de Micay fue nombrado como ciudad y ahí se instalaron varias familias españolas, entre ellas la del gobernador. En el marco de un maltrato generalizado en su contra, hacia 1541 la población indígena que habitaba la región donde se estableció el puerto adelantó un proceso de resistencia que logró expulsar a los colonizadores europeos, marcando el fin de Buenaventura como capital de la gobernación de San Juan (el puerto fue reconstruido poco después) (Valencia, 2014).

Esta resistencia duró varias décadas, manteniendo el impedimento de una instalación definitiva por parte de los españoles. En 1601 los indios chilomas, unidos a los chancos y naonamáes, decidieron atacar el puerto y quemarlo, incendio que dejó consecuencias considerables y marcó el fin de la gobernación de Nueva Castilla adjudicada a Andagoya. Desde entonces, el futuro del puerto dependió del desarrollo de la ciudad de Cali, que mantuvo un control sobre el comercio de Buenaventura. A pesar de la resistencia de la población indígena, algunos fueron explotados como cargueros de las mercancías provenientes de Cali, que se vendían a Europa y Asia a través de Buenaventura (Valencia, 2014).

La explotación minera en esta parte de la región del Pacífico empezó con el descubrimiento de yacimientos auríferos en 1579 en las montañas de Raposo (entre Cali y Buenaventura). Desde

entonces, el actual municipio de Buenaventura adquirió un mayor valor económico y se instalaron los primeros “entables de minas”, considerados como ocupaciones precarias nómadas que seguían el flujo de la explotación minera.

Los indígenas que habitaban las cordilleras occidental y de los Andes fueron obligados a trabajar como mano de obra en las minas. Esto produjo una crisis demográfica que, sumada a la resistencia indígena, llevó a que se remplazara la mano de obra por africanos esclavizados, quienes, desde el inicio de la colonización habían llegado al puerto directamente desde sus países de origen. Se estima que entre 1541 y 1568 se introdujeron a Cali más de 400 personas esclavizadas por mineros y terratenientes, un número que se incrementó considerablemente hasta llegar a ser la mano de obra predominante en las dinámicas mineras y agropecuarias de la región (Valencia, 2014).

Pese al traslado del comercio de población esclavizada a otros puertos (como el de Cartagena), su inmigración siguió siendo significativa. Una parte era vendida con destino al Chocó y otra era utilizada para trabajos en el distrito minero de Buenaventura, ubicado en los ríos Calima, Dagua y Raposo (Valencia, 2014). Con la introducción de esta mano de obra se produjo una cierta estabilización de la economía minera, que hacia la segunda mitad del siglo XVII seguía en expansión, llegando a lugares selváticos y alejados de lo que en ese entonces era el centro, como Raposo, Barbacoas y territorios del Chocó (Lane, 2007, p. 285).

Cabe señalar que en esa época la ocupación socioespacial se concentraba principalmente alrededor de los ríos –en oposición al modelo clásico de la colonización española– y obedecía en gran parte a las tradiciones africanas (Valencia, 2014). Existían varios tipos de poblaciones, entre ellas los campamentos mineros, integrados por un conjunto de cabañas temporales que servían de alojamiento a los trabajadores. El tamaño del campamento variaba según el volumen de la fuerza de trabajo –la mayoría oscilaban entre 20 y 25 habitantes, pocos tenían más de 150– e incluía también la zona de trabajo en las corrientes, los bosques vecinos y la tierra agrícola adyacente; la extensión dependía de la concesión adjudicada según las leyes de vigencia (IEI, 2016).

Tras el establecimiento de enclaves mineros se evidencian los movimientos de población durante el periodo de la Colonia. Estos movimientos estaban fuertemente marcados por una dependencia de la economía de los ríos, que brindaban las condiciones de acceso y transporte de recursos y mercancías. Por un lado, a pesar de ser previstos como asentamientos temporales, en algunos casos quedaban poblados pequeños que se establecieron de manera permanente. Esta dinámica dio origen a un tipo de poblamiento común en el Pacífico (IEI, 2016).

La “empresa campesina”, constituida por hábitats conyugales unifamiliares del mismo bloque parental, variaba su producción según la demanda desde Europa de materias primas y productos naturales como látex de níspero, tagua, lana natural, cacao silvestre, nato y corteza de mangle, entre otros. Este modelo organizativo, específico de la colonización, se caracterizó por ser una sucesión de fincas de parejas de colonos y viviendas ubicadas en los tramos de los ríos, que crearon vecindarios parentales cohesionados y con una alta concentración espacial. Se expandieron en el territorio gracias al incremento de las fuerzas productivas y de los medios naturales de producción (Aprile-Gnisset y Mosquera, 2006, p. 64).

Por otro lado, surgieron otro tipo de asentamientos más específicos de las familias esclavizadas, principalmente en las provincias de Raposo, Micay y Barbacoas, auspiciadas por empresarios de Cali, Popayán y Pasto. Dado que Buenaventura hacía parte del dominio y control de la ciudad de Cali, durante el periodo de colonización fueron los miembros de la élite de esta ciudad los propietarios de los recursos bonaverenses. La dominación en la región por parte de familias caleñas era más específica en Buenaventura, donde la familia Caicedo ejercía un control a través de su red social. El control empezó con las guerras y enfrentamientos en los siglos XVI y XVII entre los conquistadores y la población indígena, que causaron una crisis económica regional, pero también facilitaron que algunas familias –entre ellas la familia Caicedo– se enriquecieran con la explotación de indios para carga de mercancías y con el manejo de una parte importante del negocio minero.

A partir de denuncias que surgieron contra las administraciones de los superintendentes por sus acciones de contrabando, dichas administraciones fueron eliminadas, con excepción de El Raposo (que incluía Buenaventura). El Raposo – la zona minera que más enriqueció a Cali, con un total de 72 minas (Aprile-Gnisset, 1993, p.51) – permaneció bajo el control de esta ciudad hasta la independencia del país (Valencia, 2014). Manteniendo una relación constante con la entonces provincia de Micay por la influencia de las familias esclavistas de Popayán, la provincia del Raposo se extendía desde el litoral norte del río Naya hasta la bahía de Buenaventura, lo que hoy corresponde a la costa Pacífica vallecaucana. Estaba conformada por los curatos de Dagua, Calima, Raposo y Yurumanguí (Almario, 2009, p. 91).

El proceso de consolidación del sistema esclavista desde el siglo XVII al XVIII estuvo sustentado con fuerza en el empleo en actividades mineras de población afrodescendiente esclavizada. Dado que la gran mayoría de asentamientos que se presentaron en el Pacífico centro y sur estaban relacionados con la actividad minera, hay una presencia casi nula de palenques antes de la abolición legal de la esclavitud (1851). Además, la creación de palenques en esa región no fue una alternativa común para las comunidades negras ya que existían mecanismos más frecuentes como la manumisión (compra de libertad). Los poblamientos dedicados a la extracción minera eran de carácter móvil, ya que permanecían en los lugares dependiendo de la disponibilidad de minerales y recursos para el mantenimiento de las cuadrillas de esclavizados y porque las condiciones geográficas de la zona obstruían el establecimiento de asentamientos definitivos.

Sin embargo, también hubo un poblamiento de “libres” afrodescendientes, indígenas o mestizos que aseguraban una producción agrícola mínima de tabaco, caña de azúcar y ganadería para el aprovisionamiento de las minas, así como actividades anexas, principalmente transporte y comercio (Hoffmann, 2007, p.54). Estos poblamientos, que se basaban en actividades agrícolas, se presentaban en los cursos bajos de los ríos, cerca de la costa y en sitios dispersos de difícil acceso. De esta manera, a finales del siglo XVIII se destacan tres procesos en la región: un proceso de poblamiento lento, una economía extractiva consolidada y basada en la mano de obra negra esclavizada y un poblamiento disperso (Almario, 2009, p.95).

#### *Modelo agrario de libertos y manumisos*

En el siglo XIX, el tránsito de la Colonia a la República a partir de las guerras de independencia, junto con la abolición legal de la esclavitud en 1851, condujeron al quiebre de la economía minera, que perdió su rentabilidad y se volvió insustentable. Así, la recuperación de la libertad de los esclavizados significó la construcción de espacios fuertemente relacionados con las

actividades de los ríos, lo que se convertiría en una característica de tipo cultural de las comunidades afrodescendientes de la región. Este nuevo modelo sería el modelo agrario de libertos y manumisos descrito por Aprile-Gnisset y Mosquera (2006).

Por otra parte, la independencia del país fue una transición que repercutió en la organización socioespacial de la región. Surgieron varios cambios en las divisiones político-administrativas, que eran un intento de democratizar el país a través de leyes que reorganizaban el territorio. Por ejemplo, se fundó oficialmente el Puerto de Buenaventura en Isla Cascajal a través del decreto 389 del 26 de julio de 1827 y fueron otorgados derechos de propiedad de tierras a personas que habitaban la isla (Cámara de Comercio, 2012). Por otra parte, la Ley Fundamental Orgánica dictada el 17 de noviembre de 1831, que dispuso la división del país en provincias, dio origen a nuevas configuraciones territoriales en las que el orden administrativo quedó establecido por dos provincias: Buenaventura y Barbacoas; la provincia de Buenaventura quedó con los cantones de Cali, Roldanillo y Raposo (Barona, 2002, p.42).

Desde mediados del siglo XIX, en toda la zona del Pacífico centro y sur los procesos de migración de comunidades negras se intensificaron, presentando movimientos desde las zonas mineras coloniales hacia las regiones costeras, en un intento por consolidar nuevas formas de producción desligadas de la economía minera de enclave, aunque en algunos casos continuó la dinámica del lavado de oro sobre las márgenes de los ríos. Las poblaciones que estaban situadas en la región del Raposo se dirigieron hacia las tierras agrícolas próximas a los humedales de agua dulce que estaban cerca de la costa e incluso se presentaron migraciones desde la región del río Naya hacia los márgenes del río Yurumangüí (IEI, 2016).

La ciudad de Buenaventura tomó importancia a finales del siglo XIX, en el momento en que aumentaron las exportaciones. El puerto Cascajal, hasta el año 1850, tenía una dinámica ligada al pasado hispánico por ser un puerto negrero. Sin embargo, la abolición legal de la esclavitud llevó a que los negreros se convirtieran en negociantes adheridos al ciclo libre de cambio comercial. Alimentados por el desarrollo de la industria cafetera y azucarera, se presentaron procesos migratorios importantes desde y hacia el puerto. Buenaventura se proyectaba como una ciudad próspera, con un gran potencial portuario. No obstante, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ocurrieron varios hechos en Isla Cascajal que afectaron tal potencial: la fiebre amarilla y la viruela acabaron con cerca de la quinta parte de la población; varios incendios acabaron con las pocas construcciones que se habían logrado en la isla y en 1906 el terremoto cerca de Tumaco dejó graves consecuencias. Las obras para recuperar la ciudad y el aumento de las actividades comerciales generaron la llegada de numerosos obreros (Pérez, 2008, p. 60).

Así pues, en la zona rural el quiebre de la economía minera y la dispersión de la población afrodescendiente ayudó a la consolidación de asentamientos donde, en algunos casos, se establecieron relaciones de productividad ligadas a la industria, como se verá a continuación. Es así como desde la época colonial se constituyó un proceso de poblamiento ligado, en un principio, a la riqueza aurífera de los ríos. Luego de la esclavitud, se presentaron importantes migraciones de población negra que contribuyeron a poblar las riberas de los ríos y a consolidar formas propias de producción como la pesca y la caza. Sin embargo, algunas de estas formas de producción fueron interrumpidas por el auge comercial de la explotación masiva de recursos naturales a mediados del siglo XX (IEI, 2016).

### *La fase moderna*

Este periodo se distingue por la “nuclearización en aldeas campesinas o pesqueras, fluviales o costeras, dinamizadas por la urbanización nacional y las demandas exógenas de ciudades y metrópolis” (Aprile-Gnisset y Mosquera, 2006). A partir del siglo XX se instauró un modelo socioespacial distinto a los anteriores, debido a varios factores. Por un lado, la nueva organización territorial por departamentos (reforma de 1904) crea nuevas relaciones respecto a los intereses políticos y económicos y se generan migraciones importantes hacia las zonas de industria y el puerto de Buenaventura. Segundo, el quiebre de la economía minera colonial de finales del siglo XIX no significó el fin de la extracción minera, ya que se establecieron varias empresas locales e internacionales extractivas en la región y las comunidades empezaron la extracción de manera artesanal.

En el departamento del Valle, los procesos de industrialización se presentaron sobre todo en las cercanías de la ciudad de Cali, considerada como una ciudad industrial, y en algunos lugares cerca de Buenaventura. En el municipio de Buenaventura, se implementaron actividades de extracción de madera o de pulpa para la producción de cartón y papel. Sin embargo, a inicios del siglo XX la industria maderera tenía una importancia relativamente menor, ya que se dedicaba a satisfacer el mercado local. Aun así, Buenaventura, convirtiéndose en un pequeño centro de comercio de las industrias madereras, atraía a jóvenes descendientes de población esclavizada en el interior y fuera de la región, con la pretensión de vincularse a las empresas dedicadas a la extracción (IEI, 2016).

En el siglo XX llegaron nuevas empresas multinacionales de extracción de recursos naturales, lo que incidió en la consolidación de Buenaventura como puerto marítimo de comercio exterior. Asimismo, a comienzos de este siglo el Gobierno de Colombia tenía un interés significativo en adecuar el puerto de Buenaventura ante la necesidad de sustituir el istmo de Panamá, además de responder con la creciente producción de café y de azúcar. De hecho, en 1903 el puerto se volvió oficialmente el puerto sustituto de Panamá. Luego, entre 1918 y 1930 se realizaron varias obras de acondicionamiento portuario y urbano que hicieron que, hacia 1925, pasara por el puerto la quinta parte del comercio exterior del país y cerca del 15% de las exportaciones de café (Pérez, 2008, p. 60). Las obras en el puerto, pese a hacer rendir el comercio regional, estuvieron también ligadas a las primeras protestas de los obreros braceros, portuarios y ferroviarios por mejores condiciones (Moreno y Rodríguez, 2014, p. 81).

Años más tarde, en 1931, sucedió un gran incendio que tuvo peores consecuencias que los anteriores, ya que en los alrededores se encontraban las edificaciones más importantes: la oficina del ferrocarril, la aduana, la capitanía de puerto, los consulados, algunos bancos, hoteles y la casa del comercio, entre otras (Gärtner, 2005, p. 31). La recuperación de la ciudad no se cumplió según lo prometido, lo que empezó a causar un gran contraste entre la riqueza del puerto y la pobreza e infraestructura precaria de la ciudad.

Para comienzos del siglo XX, algunas familias procedentes de los ríos Sipí, Noanamá, Ijuá, Calima y de las costas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, huían de sus tierras por la violencia o porque querían mejorar sus condiciones económicas (Banco de Medios, 2001).

A inicios de la República se mantenía una débil estructura urbana y una concentración de asentamientos rurales sobre los ríos. La ciudad de Buenaventura tenía un lento crecimiento demográfico, ya que los suelos y las condiciones geográficas no permitían establecer una economía sólida. Sin embargo, a pesar de esas difíciles condiciones, las industrias extractivas (más precisamente de café y azúcar) aumentaron su exportación a través del puerto, motivando la construcción de una infraestructura portuaria. Las primeras obras para esta construcción generaron migraciones desde varias regiones del Pacífico para responder a la alta demanda laboral del proyecto. Junto con la construcción del puerto, se desarrolló también la construcción de la vía ferroviaria que conectaría por vía terrestre a Buenaventura con el resto del país.

Las migraciones generadas por estos megaproyectos, por las industrias extractivas y por las inversiones del extranjero, transformaron el espacio del municipio convirtiéndolo en un modelo socioespacial urbano (Aprile-Gnisset y Mosquera, 2006). Este modelo subentiende una jerarquización entre los asentamientos más cercanos a la ciudad de Buenaventura y los más lejanos. Por lo tanto, los pueblos crearon una identidad territorial de manera diversificada según su posición –a lo largo de las carreteras, en las zonas costeras o en los corredores fluviales– con un modelo de asentamientos y una fisonomía correspondiente. Se distinguen diferentes categorías aldeanas con trayectorias, morfologías y esquemas económicos particulares: las aldeas agrícolas fluviales, las aldeas marítimas pesqueras, pueblos marismeños y recolectores de moluscos, aldeas de los corredores de comunicaciones, pueblos de resguardos, pueblos de aserríos, satélites de la metrópoli y “metástasis” (Aprile-Gnisset y Mosquera, 2006).

Actualmente, las aldeas fluviales se identifican por el río que las conecta entre sí. A pesar de tener una identidad territorial y un sistema organizacional parecido, las aldeas que se encuentran más cerca del mar están mejor equipadas, tienen una mayor influencia en el municipio y sirven de “puente” entre las zonas rurales más lejanas y la cabecera del municipio.

El creciente poblamiento costero y la ocupación de los deltas surgieron en respuesta a la alta demanda urbana en víveres. Los inmigrantes que fundaron estos pueblos marismeños antes se dedicaban principalmente a una economía primaria, es decir, a la pesca tradicional y a la captura de moluscos. Estos pueblos costeros sufren actualmente de condiciones de habitabilidad precarias y carecen de suelo, lo que les impide cultivar.

Los pueblos aserríos se desarrollaron en el país en respuesta a las primeras plantas eléctricas que necesitaban su puesta en operación. En la zona urbana de Buenaventura –en Cascajal– surgió el primer aserrío para acompañar el proyecto portuario, las obras del muelle y del ferrocarril (hacia 1920).

En ese sentido, la jerarquía entre asentamientos y aldeas según su posición territorial en el municipio también se relaciona con su vulnerabilidad frente a la violencia en el conflicto armado desde la década del sesenta, como se verá más adelante.

## ***2.2. Presencia de comunidades étnicas y culturales y procesos organizativos***

Desde la aplicación de las disposiciones legales de los años noventa hasta el día de hoy, las comunidades negras de Buenaventura han logrado la titulación de 38 consejos comunitarios en el municipio, que agrupan un total de 6.918 familias (ver Anexo 1). También existen otros procesos organizativos que aún no tienen titulación colectiva o está en trámite (INCODER, 2015). Vale resaltar el importante papel que cumplieron diferentes líderes y lideresas de Buenaventura en el proceso que dio origen al artículo transitorio 55 de la Constitución Política y posterior puesta en marcha de la Ley 70 de 1993.

La distribución del área titulada se concentra en el norte y centro de Buenaventura, ya que la parte sur, que colinda con el departamento del Cauca, está en proceso de solicitud de titulación para 12 consejos comunitarios. Los consejos con mayor área son Río Cajambre (75.716 ha), Río Calima (66.724 ha), Río Yurumanguí (54.776 ha) y Bahía Málaga (38.038 ha) (INCODER, 2014). La mayoría de los consejos comunitarios se concentran en áreas de difícil acceso, afectadas recurrentemente por la ausencia del Estado y la presencia de actores armados ilegales (IEI, 2016).

En Buenaventura los procesos organizativos de las comunidades son al mismo tiempo expresiones de resistencia y en su historia pueden identificarse tres etapas. La primera, entre 1950 y 1999, estuvo caracterizada por una lucha en torno al reconocimiento étnico y de derechos colectivos; la segunda, entre 2000 y 2004 giró en torno a la defensa de los derechos humanos, en un contexto de agudización del conflicto armado; la tercera, entre 2005 y 2014, se caracterizó por el surgimiento de una nueva dinámica organizativa en la que las mujeres, los jóvenes y la iglesia adquirieron un papel protagónico, en relación con la lucha frente a los efectos del desarrollo de megaproyectos portuarios y turísticos. En el centro pasó a ubicarse “la defensa de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria para la dignificación de las personas asesinadas o desaparecidas y la apropiación del discurso de defensa del territorio desde una dimensión urbana” (CNMH, 2015, p. 372), y todo acompañado de la construcción de lenguajes alternativos de resistencia desde el arte y la cultura.

Actualmente existen más de 200 organizaciones que tienen trabajo enfocado en jóvenes, mujeres, víctimas, pesca artesanal, cultura, saberes tradicionales, etcétera<sup>2</sup>. Se han consolidado espacios de articulación de organizaciones –como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y otros–, procesos territoriales de resistencia frente al modelo de desarrollo impuesto –como el de territorios ganados al mar– y se han desarrollado importantes procesos de movilización y actos de desobediencia civil, como la conmemoración del 9 de abril de 2013, la Marcha del 19 de febrero de 2013, la constitución de la Zona Humanitaria del Puente Nayero y el Paro Cívico de 2016 (CNMH, 2015).

En cuanto a la población indígena, desde los años ochenta se han titulado diez resguardos indígenas en Buenaventura, pertenecientes a los grupos étnicos wounaan, eperara siapidara, embera, embera chamí y wounaan nonam. En el conjunto de resguardos se recogen 378 familias, en una área total titulada de 17'236.622 ha (ver Anexo 2) (INCODER, 2016). **Estas comunidades**

---

<sup>2</sup> Hay una base de datos al respecto disponible en: <https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/ORGANIZACIONES-TNICAS-VALLE-DEL-CAUCA-A-O-2017/sst6-8wjp>.

indígenas se articulan a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico (ACIVA-RP). La primera se creó en 1989 con la presencia de comunidades Embera, Nasa, Wounaan y Eperara Siapidara; estas dos últimas del litoral pacífico de Buenaventura (ORIVAC, 2016). La segunda asociación surgió en 1997 para visibilizar y reclamar los derechos de las comunidades indígenas de 9 resguardos y 15 cabildos ubicados entre los municipios de Dagua y Buenaventura (ACIVA-RP, S.F).

### **3. CRONOLOGÍA Y CONTEXTO DEL CONFLICTO POLÍTICO, SOCIAL Y ARMADO**

Según Flórez y Ruiz (2018), durante el periodo del conflicto armado en Buenaventura la violencia se ha presentado en tres escenarios. El primero es el escenario de violencia pública, es decir, acciones u omisiones por parte del Estado que violan los derechos de las comunidades tradicionales de la región. En este caso, la violencia se relaciona con: i) la poca inversión en el desarrollo social; ii) la complicidad y permisividad en la implementación de megaproyectos; y iii) la nula respuesta frente a la situación humanitaria de las víctimas. El segundo escenario tiene que ver con la violencia política causada por la presencia de actores armados a la región. Estos utilizaron diferentes modalidades de violencia en contra de la población civil, afectando con fuerza a las comunidades.

Finalmente, está el escenario de violencia causada por delincuencia común organizada, que surge de la degradación del conflicto y como herencia de los grupos armados. Se configuró un contexto propicio para la llegada de múltiples actores que han producido una violencia difundida, afectando la vida y la seguridad ciudadana en varios sectores de la ciudad. Esta violencia se incrementa con la implementación de megaproyectos, la modernización del puerto y la grave situación socioeconómica de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo analiza en un primer momento, la presencia y trayectoria de los actores armados y a partir de esto propone una periodización del conflicto en cinco etapas que abarcan desde finales de los cincuenta hasta el momento en que se firma el Acuerdo Final entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Posteriormente se hace un análisis de los hechos victimizantes más recurrentes de acuerdo a datos estadísticos.

#### ***3.1. Presencia y trayectoria de actores armados***

El conflicto armado en Colombia ha tenido grandes repercusiones en el Pacífico centro, tanto a nivel territorial como poblacional, ubicando a la región en el foco de las confrontaciones entre múltiples actores armados legales e ilegales. Una de las principales razones que ha suscitado el interés por controlar la región es su posición estratégica para el mercado de las drogas. Buenaventura, por tener uno de los puertos más importantes de Colombia y una escasa presencia del Estado, ha representado un escenario ideal para la producción y exportación de cocaína.

Teniendo en cuenta los elementos generales de contexto, las dinámicas del conflicto armado en el Pacífico centro pueden analizarse en cinco momentos comprendidos en el periodo 1958-2016. El

primero, entre 1958 y 1979, evidencia la presencia escasa de actores armados y la violencia extraparlamentaria que predominaba en la región. Los años entre 1980 y 1999 son el momento en que las guerrillas se establecieron en el territorio y consiguieron mantener un control contundente. El tercero, entre 2000 y 2004, es el periodo paramilitar, durante el cual las AUC marcaron una presencia activa y creciente en el municipio de Buenaventura a través de una estrategia para sembrar el terror. Los años 2005 a 2011 marcan el momento posterior a la desmovilización de las AUC y el surgimiento de nuevos actores neoparamilitares. Finalmente, entre 2012 y 2016 se da el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP, acompañado de un reacomodamiento de los actores armados en la región.

### **1958-1979: presencia escasa de actores armados**

A finales del siglo XX Colombia estaba influenciada por la dinámica mundial de expansión del neoliberalismo y de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La cercana relación entre los gobiernos de Colombia y EEUU se presentó a través de acuerdos militares y de cooperación internacional. Los acuerdos de apoyo económico, como el convenio firmado en 1962, permitieron el desarrollo de las zonas industriales de Buenaventura, de la ganadería extensiva y de actividades extractivas mineras y madereras (Pérez, 2007; Villamizar, 2017, p. 46). Así, mientras se consolidaba el Estado-nación, se instauró un sistema de intensificación de la producción y exportación de materias primas que hizo que varias empresas multinacionales extractivas se establecieran en el país y en el litoral del Pacífico. En este contexto, el Gobierno de Colombia concentró sus esfuerzos en adecuar el puerto de Buenaventura para responder a la creciente demanda internacional de productos colombianos, principalmente de café y azúcar.

En la década del sesenta se expandieron las industrias extractivas de madera, café y azúcar en el litoral Pacífico. La zona urbana del municipio de Buenaventura, sobre todo el puerto, obtuvo un rol comercial importante debido a las salidas de mercancías y la concentración de oportunidades de trabajo era atrayente para los jóvenes de asentamientos rurales. A partir de 1959, la gestión del puerto de Buenaventura –y de los principales terminales portuarios de Colombia– estaba a cargo del Estado mediante la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), lo que permitía al Estado tener un monopolio de la gestión del sector portuario a fin de seguir el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, asumiendo una lógica de Estado empresarial.

Antes de ser gestionados por Colpuertos, los puertos fluviales y marítimos eran administrados primero por empresarios privados y luego por Ferrocarriles Nacionales. Con la creación de la empresa, las condiciones de trabajo mejoraron en alguna medida. Los trabajadores de los terminales de Colpuertos consiguieron fundar ocho sindicatos de base, dispersos en los cinco terminales marítimos<sup>3</sup>, que se agruparon en la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fedepuertos) (Jiménez y Delgado, 2008, p.11).

De la mano del desarrollo económico, en el marco de la implementación del nuevo modelo económico también se producía una dinámica fuerte de desplazamiento de las comunidades rurales hacia el casco urbano. Esta población empezó a ocupar de manera progresiva y colectiva

---

<sup>3</sup> Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A (TCBUEN), Grupo Portuario S.A, Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas S.A (CEMAS) y LIZCAMAR LTDA (Díaz Vargas, 2015).

los barrios de bajamar, usando escombros y basura para rellenar las partes inundables por la marea. Se construyeron casas palafíticas con madera extraída de los manglares, comunicadas entre sí mediante una red de puentes (CODHES, 2013, p.47).

El municipio de Buenaventura contaba en 1964 con una población de 96.708 habitantes, de los cuales 72,5% vivía en zona urbana y 27,5% en zona rural (DANE, 1964). El hecho de ser un municipio con una población urbana importante y en plena expansión económica, podría explicar por qué el nivel de alfabetismo era más elevado que el promedio nacional: 62,2% en Buenaventura<sup>4</sup> frente a 50,35% en el país. Entre las décadas del sesenta y setenta, el municipio de Buenaventura vivió un acelerado proceso de urbanización. En 1973 había en el municipio 128.064 habitantes, de los cuales el 80,95% vivía en la cabecera (8,45% más que en 1965) (DANE, 1973).

A partir de mediados de los setenta, en un contexto globalizado de crisis del Estado de Bienestar, se establecieron políticas económicas neoliberales en Colombia y el Estado empezó a compartir su rol de financiación y prestación de bienes y servicios públicos con el sector privado, asumiendo funciones de “Estado mínimo” o regulador (Jiménez y Delgado, 2008). Esto impactó negativamente las condiciones de vida en Buenaventura, lo que puede ilustrarse, por ejemplo, examinando los índices de acceso de la población a servicios públicos. Para 1973, en el municipio existían 21.927 viviendas habitadas, de las cuales 32,4% tenían conexión de acueducto, alcantarillado y energía; 17,95% tenían dos conexiones<sup>5</sup>; 22,17% una sola<sup>6</sup>; y 27% ninguna. Esto indica que cerca del 70% de las viviendas no tenían acceso a la totalidad de servicios públicos básicos. Para el mismo año, 63% de la población en edad escolar no asistía a ninguna institución y la tasa de analfabetismo era de 28,7% (DANE, 1973).

En este contexto también se fortalecieron las dinámicas de resistencia de los trabajadores, haciendo de Fedepuertos –agrupada en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) – una de las principales organizaciones sindicales del país (Jiménez y Delgado, 2008). Durante los setenta, Fedepuertos tuvo una influencia significativa en las políticas administrativas de la empresa Colpuertos, favorables para los trabajadores respecto a los salarios, el número de trabajadores, los horarios de trabajo, auxilios educativos, entre otros. A partir de 1974, la empresa cambió de un estatus de Instituto Descentralizado a Empresa Comercial del Estado, lo que permitió una cierta autonomía financiera, administrativa y operacional e hizo que la mayor parte de los trabajadores pasaran a ser funcionarios públicos a término indefinido. Esto generó un fortalecimiento de la organización sindical y de su poder de negociación frente a la junta directiva. Finalmente, todos los trabajadores consiguieron ser laboralmente protegidos por las convenciones colectivas de trabajo (Jiménez y Delgado, 2008).

Un contexto de desigualdad y exclusión fue configurando el escenario perfecto para que el conflicto armado tomara fuerza poco a poco en las siguientes décadas.

---

<sup>4</sup> Valores de alfabetismo: 24.344 hombres y 22.455 mujeres; valores de analfabetismo: 11.853 y 16.614 mujeres.

<sup>5</sup> 0,45% (99) con acueducto y alcantarillado; 15% (3.295) con acueducto y energía; 2,5% (542) con alcantarillado y energía.

<sup>6</sup> 2,3% (652) con acueducto únicamente; 0,33% (72) con alcantarillado únicamente; 19,45% (4265) con energía eléctrica únicamente.

A modo de contexto general, cabe señalar que en la época de violencia bipartidista (1948-1953) surgieron en el Valle del Cauca los primeros escenarios de violencia política, a través de enfrentamientos entre conservadores y liberales, que generaron importantes consecuencias en Buenaventura, por ser un pueblo mayoritariamente liberal. En un principio los grupos conservadores llamados “Pájaros” establecieron su dominio en el centro y norte del departamento del Valle perpetrando masacres, homicidios y expropiaciones de tierras. El propósito principal de estas acciones violentas era expulsar a las poblaciones liberales de la región. En reacción, surgieron las primeras guerrillas liberales del departamento, en torno a la cordillera central (municipios El Dovio, Riofrío y zonas aledañas a Tuluá<sup>7</sup>). Las luchas entre conservadores y liberales representaban una disputa territorial entre los campesinos minifundistas de la región (liberales) y los grandes terratenientes (conservadores) de la zona. Estos últimos pretendían desalojar a los primeros de sus predios. Pese a que, posteriormente, el General Rojas Pinilla le haya otorgado una amnistía a las primeras guerrillas surgidas en esa época, el Valle del Cauca continuó siendo uno de los principales escenarios del “bandolerismo” hasta la aparición de nuevas guerrillas en las siguientes décadas (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 19), aunque no de la misma forma para la zona de cordillera y la costa.

Los años sesenta y setenta marcan el inicio de las primeras guerrillas modernas en el país. Las organizaciones guerrilleras de primera generación –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) – nacieron a principios de los años sesenta. Luego, a partir de los años setenta, comenzaron a emerger las guerrillas de segunda generación: el Movimiento 19 de Abril (M-19), Quintín Lame, Patria Libre, El Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), entre otros (Echandía, 2015).

Las tres guerrillas de primera generación se diferenciaban entre ellas por sus perspectivas ideológicas y territoriales. En un principio, las FARC siguieron un modelo de guerrilla de partido, relacionado con el Partido Comunista (PC). Sus zonas originarias y de principal expansión se concentraban en el suroriente (Valles de los ríos Ariari, Guayabero, Duda, Caguán, y en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare), en el centro (Magdalena medio) y en el noroccidente (Urabá antioqueño). El ELN, nacido en el Magdalena Medio de Santander, Simacota, San Vicente y El Carmen de Chucurí, buscaba por su parte una separación con el Partido Comunista y aspiraba a crear una nueva estructura político-militar a nivel nacional, con una perspectiva de liberación nacional. El EPL nació en la parte alta de los valles del Sinú y el San Jorge (Córdoba) y en el Urabá antioqueño. Su lucha estaba fuertemente influenciada por el concepto maoísta de guerra popular prolongada, focalizándose en las zonas rurales para buscar apoyo de las comunidades campesinas (Echandía, 2015).

El Valle del Cauca y principalmente Cali, hacían parte de las zonas atractivas para las guerrillas. En efecto, durante los años sesenta, el movimiento guerrillero M-19 tuvo una importante presencia en el departamento gracias a sus estructuras urbanas. Sin embargo, dichas estructuras fueron golpeadas entre 1979 y 1981, dejando sin éxito el intento de llevar la guerra a las ciudades.

---

<sup>7</sup> Una de estas guerrillas fue comandada por Pedro Antonio Marín, *Tirofijo*, quién después se convirtió en uno de los principales comandantes de las FARC-EP.

Como puede notarse, antes de los años ochenta las guerrillas se concentraron en conservar su fuerza y mantener un control territorial en sus zonas originarias, por lo tanto, aún no habían tenido una presencia activa en el Pacífico centro. Habían empezado un proceso de expansión únicamente hacia las regiones más ricas con el objetivo de incrementar sus posibilidades de financiación por medio de la tributación a la producción económica local y por los recursos provenientes del narcotráfico (Flórez y Ruiz, 2018, p.542).

La base de datos del CNMH registra un secuestro en 1972 que tuvo como presunto responsable al ELN y un asesinato efectuado en 1979 por un grupo paramilitar no identificado. Este es el periodo con el menor promedio de víctimas por año (0,41); el hecho victimizante que predominó fueron los asesinatos selectivos y el presunto responsable mayoritario fue un agente del Estado, aunque cabe resaltar que la cantidad de registros que contiene la base de datos es muy escasa.

### **1980-1999: periodo insurgente**

#### *Década del ochenta*

En 1985 Buenaventura contaba con 193.185 habitantes (65.121 más que la década anterior), de los cuales 83% vivía en la cabecera (DANE, 1985), motivados principalmente por nuevas oportunidades económicas. En tal año Buenaventura ocupó la posición 19 entre las ciudades de Colombia con mayor población en el casco urbano. El acceso a los servicios públicos seguía siendo limitado: del total de viviendas particulares habitadas (36.778 viviendas) el 37,4% tenían todos los servicios; 42% tenían energía, 30,8% tenían acueducto, 1,3% tenían alcantarillado y 17,5% de las viviendas no tenían ningún servicio<sup>8</sup>. La tasa de alfabetismo fue de 82,07%, con un total de 91.110 personas alfabetas (DANE, 1985). Estas cifras indican una mejoría respecto a la década anterior, a pesar del alza considerable de la población. Pese al mejoramiento de algunas infraestructuras, siguió existiendo una extrema desigualdad entre el acceso a los servicios en la cabecera y en el resto del municipio, lo que entraría a explicar también el desplazamiento masivo hacia el casco urbano.

La década del ochenta estuvo atravesada por dinámicas en torno al contrabando, que condujeron a lógicas de violencia, inicialmente entre la Armada y los actores que participaban en el negocio. A mediados de los ochenta empezaron a llegar al municipio actores foráneos con el objetivo de tener el control de los principales centros de contrabando, lo que se acompañó de un proceso sangriento de exterminio y de violencia selectiva –muchas veces presentada como “limpieza social”– que afectó principalmente a transportadores, vendedores, y quienes sacaban la mercancía ilegalmente del puerto.

La Fuerza Pública no tuvo un rol menor en el incremento de la violencia, pues su cuerpo de inteligencia o Fuerza Dos (F2) desarrollaba acciones de “limpieza social” o la acción de la “escoba”, que incluían torturas, desapariciones y asesinatos contra quienes consideraban delincuentes o ladrones<sup>9</sup>. Un caso conocido fue el de *Carlos el fusilero*, policía activo que entraba a los barrios más pobres de Buenaventura (El Lleras, Viento Libre, Muro Yusti, San José) en una camioneta de la institución disparando indiscriminadamente (CNMH, 2015).

---

<sup>8</sup> Cabecera 1,10% y resto 0,18%.

<sup>9</sup> Sin embargo, este comportamiento no se ve reflejado en los registros de la base de datos del CNMH (ver Gráfica 2).

Además del comercio de contrabando, en esa época se extendió en el suroccidente del país el comercio de drogas ilícitas; en Buenaventura aparecieron actores ligados a los carteles del narcotráfico, sus ejércitos privados y actores armados ilegales que se disputaban el control económico y social. Con el transcurrir de los años, la violencia fue incrementándose, principalmente los hurtos, atracos con armas, amenazas, asesinatos y extorsiones (Flórez y Ruiz, 2018, p.545).

Por otro lado, todavía en los años ochenta, el puerto, por causa del desgüeño en la gestión administrativa, financiera y laboral de Colpuertos, entró en una profunda crisis. Dicha empresa reportó un balance financiero con pérdidas significativas, lo que obligó a la empresa a reestructurarse (Jiménez y Delgado, 2008).

Las explotaciones intensivas de los recursos naturales en la región, e incluso en las tierras ocupadas por los afrodescendientes, además de aumentar la migración hacia la ciudad, intensificaron las luchas de las comunidades negras. En la década del ochenta, con una influencia marcada del movimiento negro de Estados Unidos, empezó a organizarse el movimiento social de la población afrodescendiente del Pacífico, por la defensa del derecho a la tierra y a la propiedad.

A partir de los años ochenta, las guerrillas fortalecieron su presencia en el suroccidente colombiano. Varias de ellas fueron atraídas –cada una con su propia estrategia y ocupación territorial– por el crecimiento de la actividad del narcotráfico, la aparición de carteles y las riquezas que estos generaban.

Tras la celebración de la Séptima Conferencia en 1982, las FARC decidieron desdoblar su presencia militar con el objetivo de implementar un frente por cada departamento del país y mantener una presencia militar activa en los alrededores de Bogotá. A mediados de esta década y a partir del desdoblamiento del Frente 6, se creó el Frente 30 –comandado por Jorge Neftalí Umenza, *Mincho*– que posteriormente ganó influencia en la zona rural de Buenaventura, principalmente en Dagua y Calima. Sin embargo, a pesar de la aparición de este frente, las FARC mantenían una actividad armada baja en el departamento del Valle del Cauca (Defensoría del Pueblo, 2011).

Junto con el desdoblamiento de sus frentes, utilizaron los recursos provenientes de la coca para responder a los altos gastos de su nueva estrategia de expansión. Además, aprovecharon el cese del fuego acordado con el gobierno de Betancur (1982-1986) para expandirse territorialmente, aumentar su fuerza militar y diversificar sus finanzas (Echandía, 2015). El interés de las FARC-EP en el Pacífico centro radicaba en su importancia económica y geoestratégica.

Por otro lado, el M-19 reforzó su presencia en el sur del Valle del Cauca, principalmente en la cordillera occidental (cerca de Cali y Yumbo) y en la cordillera central (en los municipios de Florida, Pradera y Palmira), durante la década del ochenta. Los años 1985 y 1986 estuvieron marcados por numerosos enfrentamientos con la Fuerza Pública en esas regiones. Sin embargo, este esfuerzo bélico significó una disminución en la fuerza de las tropas de la guerrilla, hasta que en 1986 fueron desarticuladas sus estructuras urbanas. En consecuencia, el M-19 decidió replegarse en las montañas del Cauca (Defensoría del Pueblo, 2011).

La expansión en el suroccidente del ELN se debe a la Reunión Nacional Héroes y Mártires de Anorí en 1983, en la cual surgió su estrategia de desdoblar sus frentes existentes en las regiones con importantes riquezas mineras y en las zonas de explotación petrolera (CNMH, 2017, p.124). Al igual que para el M-19, Buenaventura nunca ha sido uno de los focos de actuación principales de esta guerrilla. Se asentaron en el departamento del Valle en 1984 a través del Frente Luis Carlos Cárdenas, principalmente en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo (Defensoría del Pueblo, 2011). Sus otras zonas de acción más cercanas al Pacífico centro se ubicaban en los municipios del sur del departamento del Cauca y hacia el norte, en el departamento de Chocó. La entrada al territorio de Buenaventura, pese a ser de menor fuerza militar, se hacía principalmente por los ríos Calima y San Juan (Molano, 2017; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH).

Por último, el EPL también amplió su presencia activa en el país durante este periodo. No obstante, este crecimiento se concentró principalmente en las zonas de desarrollo agroindustrial, en lugares de colonización y de expansión de nuevos grupos de terratenientes y en el Eje Cafetero (Echandía, 2015). De los tres departamentos donde incursionaba el Comando Conjunto Occidental de las FARC-EP, el EPL marcó presencia únicamente en el Valle del Cauca – específicamente en Cali– a través del Frente Ricardo Torres (Peña, 2011, p. 223). Pese a la cercanía con Buenaventura, no hubo ninguna presencia de esta guerrilla en el Pacífico centro.

Así pues, la insurgencia con mayor presencia en la región durante los ochenta eran las FARC-EP, pero se concentraban únicamente en las zonas rurales. De forma paralela, en la ciudad y alrededores llegaron individuos relacionados con el Cartel de Cali, interesados en controlar los afluentes hídricos –bajamares y esteros– y el puerto marítimo de Buenaventura con el fin de consolidar rutas para la exportación de la cocaína. De a poco el negocio se volvió local, implicando cada vez más de manera directa a la población. Los narcotraficantes consiguieron ejercer el control total del casco urbano, influenciando varios sectores de la ciudad e incluso instituciones públicas (Flórez y Ruiz, 2018, p.540).

Mientras tanto, comenzaron a presentarse en el Valle del Cauca altos niveles de violencia causada por la expansión del accionar de los carteles de drogas. Estos conformaron sus ejércitos ilegales – en el marco de una dinámica paramilitar– para protegerse de los secuestros de las guerrillas y defender sus intereses económicos. Entre 1983 y 1987 surgieron en el Valle grupos criminales como Cali Limpia, Amor a Cali y Palmira Eficiente, que perpetuaban masacres y homicidios selectivos en contra de homosexuales, drogadictos, delincuentes, habitantes de calle, políticos de izquierda y sindicalistas (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 19).

La presencia de actores armados ilegales, de ejércitos privados de los carteles y de otras organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico de drogas –que tenían un impacto en Buenaventura– estableció un escenario de fuerte violencia e inseguridad en la región. En este contexto ocurrió la masacre de Trujillo (Valle del Cauca), un conjunto de masacres sucedidas en diferentes momentos en el municipio que obedecían a una estrategia general orquestada con la participación de la Policía y el Batallón Palacé de Buga y que abrieron la puerta para la entrada al Valle del Bloque Calima. Todo esto en medio de fuertes conflictos agrarios motivados por el latifundio y las explotaciones mineras y madereras (Peña, 2011, p.220), que animaban al mismo tiempo la movilización del campesinado en demanda de programas de desarrollo rural y medidas para el acceso a la educación, salud e infraestructura. Los actores de este movimiento agrario coexistían

en el territorio con las FARC-EP y ELN, lo que fue aprovechado por la Fuerza Pública, las élites y los narcotraficantes para señalar una asociación entre unos y otros y desencadenar una gran persecución caracterizada por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas ejecutadas por la Fuerza Pública y por grupos de seguridad privada de *Don Diego* y *El Alacrán* (CNMH, 2018, p. 107).

La presencia de las estructuras criminales al servicio del narcotráfico en los municipios del norte del Valle generó el debilitamiento del posicionamiento que el ELN había logrado en la región. Tras numerosas acciones bélicas, el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez tuvo la obligación de replegarse hacia las ciudades, especialmente Cali y sus alrededores. Asimismo, implementó una estrategia de expansión urbana de la que surgieron estructuras como el Frente José María Becerra (Echandía, 2013).

En los años ochenta, en el municipio de Buenaventura aún no ocurrían los hechos victimizantes perpetrados en otras partes del departamento dado que no era aún una zona disputada militarmente y porque la región estaba principalmente destinada al suministro de armas, la movilización de personas y el tráfico de drogas. Las FARC-EP, en ese momento la guerrilla más influyente del municipio, se posicionaba en las zonas rurales únicamente para buscar un lugar de refugio y descanso, y no desde un escenario de combate. Incluso era común que establecieran relaciones de confianza con las comunidades de la región (Restrepo y Rojas, 2004, p.19). Es importante señalar que las FARC-EP aún no marcaban una presencia activa en el casco urbano de Buenaventura.

En un principio, los actores que ejercían un gran control de la ciudad eran jefes y capos involucrados en el contrabando, luego empezaron a aparecer grandes capos relacionados con el narcotráfico, a quienes se les llamaba “caballos”. Estos, a su vez, necesitaban la presencia de actores armados ilegales para proteger las zonas de almacenamiento de la droga, cuidar las rutas de salida y para controlar el territorio (Flórez y Ruiz, 2018, p.545). Como lo afirma el CNMH, “desde mediados de los ochenta hasta 1999, las confrontaciones armadas con las fuerzas militares fueron poco frecuentes y los niveles de victimización de la población civil muy reducidos, en tanto la modalidad de violencia que más utilizó la guerrilla fueron los ataques a bienes civiles y el sabotaje –especialmente en las carreteras conducentes a Buenaventura–” (CNMH, 2015, p.162).

Entre 1980 y 1988 hay registros recurrentes de desaparición forzada que tiene como presuntos responsables al Ejército y a la Policía. Entre 1986 y 1988 se registran desapariciones y asesinatos selectivos ejecutados por paramilitares no identificados. Entre 1982 hasta finales de la década se registran asesinatos selectivos, daño a bienes y violencia sexual efectuados por guerrillas; en 1982 se registra el primer hecho que tiene como presunto responsable al M-19 y en 1987 uno que vincula a las FARC-EP (CNMH, 2019).

### *Década del noventa*

Con la Ley 01 de 1991, comienza el proceso de liquidación de Colpuertos a raíz de la crisis financiera en la que se encontraba. Los puertos antiguamente manejados por el Estado fueron entregados en concesión a las Sociedades Portuarias Regionales (SPR) y a los operadores portuarios. Estas transformaciones tuvieron consecuencias a nivel económico y social, puesto que fueron establecidas medidas de reducción de tarifas, de mejoramiento de la eficiencia y modernización del servicio portuario (Pérez, 2007). La reforma en la empresa repercutió en el posterior desarrollo de nuevos megaproyectos de infraestructura y de ampliación del puerto, tales

como la construcción del Terminal de Contenedores TCBUEN, la ampliación de la calzada Buga-Loboguerrero-Buenaventura, la modernización del Ferrocarril del Pacífico y del aeropuerto Gerardo Tobar López, entre otros (Varela, Martínez, Delgado, 2009).

El modelo de gestión del sector portuario –al hacerse privado con el argumento de que así sería más eficiente, competitivo y aportaría más a la economía colombiana– estableció medidas de flexibilización del mercado de trabajo, buscando reducir costos de producción y aumentar las ofertas de empleo. El proceso de reconfiguración del trabajo, acompañado de un reglamento propicio a ese cambio –la Ley 50 de 1990– hizo que la tecnología sustituyera algunas actividades y generó una disminución de la demanda de mano de obra no calificada. Finalmente, los trabajadores portuarios pasaron de ser 10.000 en 1990 a 4.200 en 1996<sup>10</sup>.

Siguiendo esa lógica, también se implementó una medida de subcontratación para las actividades operativas de los terminales y de las actividades de soporte técnico, lo que implicó una nueva forma de contratación laboral a través de empresas intermediarias y una responsabilidad diversa respecto a la garantía de los derechos laborales. Las condiciones de trabajo se vieron degradadas, las remuneraciones empeoradas –el promedio salarial disminuyó 3,5 veces<sup>11</sup>– y las contrataciones se volvieron temporales para trabajos esenciales de la actividad portuaria (Jiménez y Delgado, 2008). Además, sabiendo que Colpuertos era la principal fuente de empleo en la ciudad de Buenaventura, el fin de su liquidación en 1993 y la creación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura generaron un aumento de la tasa de desempleo y por ende en las condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad<sup>12</sup>.

Frente a las reformas laborales que se establecieron en la empresa Colpuertos, los trabajadores organizaron varios paros a fin de negociar y encontrar acuerdos con los Operadores Portuarios, las entidades estatales correspondientes y las empresas que ofrecían mano de obra. Finalmente, los acuerdos que se hicieron no fueron cumplidos y el movimiento sindical perdió fuerza (Jiménez y Delgado, 2007).

En la década del noventa la población de Buenaventura, que dependía mayoritariamente del puerto y de las actividades desarrolladas en el casco urbano, siguió concentrándose en éste. En 1993 se registraron 227.478 habitantes en el municipio, de los cuales 85,6% vivía en la cabecera y 14,4 % en el resto del municipio (DANE, 1993).

Durante los años noventa las decisiones legales y políticas del Estado respecto a los derechos de las comunidades afrodescendientes influenciaron significativamente la organización social del territorio, lo que llevó a que las mismas dieran un giro a los objetivos de sus dinámicas organizativas, vinculándolas directamente con la demanda por el mismo, la identidad y la cultura. El artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la posterior Ley 70 de 1993 para las comunidades negras fueron cruciales para la creación de consejos comunitarios como autoridad territorial. Obtener una titulación colectiva a través de los consejos comunitarios

---

<sup>10</sup> Fuente: Proyecciones “Plan Pacífico” (El País, 10 de noviembre de 1996, p. 10. En: Jiménez y Delgado, 2007).

<sup>11</sup> Fuente: Planeación y sistemas de la empresa Puertos de Colombia. Cálculos de acuerdo al SMVM 2002. Entrevista con los directivos de las Empresas de Servicios Temporales y de las Cooperativas Portuarias. Buenaventura, mayo de 2002 (En: Jiménez y Delgado, 2007).

<sup>12</sup> La documentación estadística de Buenaventura en esa época es demasiado escasa para ilustrar el desempleo y demás consecuencias sociales.

significó un cambio en relación con la autoridad, que pasó de ser tradicional y dispersa a legal y organizada. Previamente, como en todo el país, las comunidades negras se organizaban a través de Juntas de Acción Comunal, teniendo un radio de acción limitado.

En cuanto al conflicto armado, a partir de los años noventa se presentaron sustanciales transformaciones. Según Beltrán (2011) la dinámica del conflicto empezó a girar en torno a un aumento de enfrentamientos entre los actores armados y las instituciones, la disputa por el control territorial y poblacional, una mayor participación del narcotráfico en el desarrollo de la guerra y la colaboración entre actores ilegales en el campo institucional, económico y político. A partir de este nuevo panorama de la dinámica global del conflicto pueden entenderse las repercusiones específicas en el Pacífico centro.

Varios factores explican las transformaciones del conflicto en la región durante la década del noventa, entre ellos las crecientes incursiones de las guerrillas y enfrentamientos entre los actores armados ilegales y legales, motivadas por la nueva estrategia militar de las FARC-EP y su mayor implicación en el comercio de la droga, además de la disputa territorial entre las nuevas élites del narcotráfico en el Valle del Cauca y grupos armados ilegales.

i) Estrategia militar de las FARC-EP

Cuando fracasaron las negociaciones de paz en Venezuela y México –durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994)– las FARC-EP celebraron su Octava Conferencia (1993) en la cual elaboraron su nuevo plan estratégico, que en lo militar implicaba reagrupar sus frentes en siete bloques y dirigir sus ataques contra la Fuerza Pública (Echandía, 2015). El objetivo de los bloques era principalmente aproximarse a los centros urbanos, garantizando una organización de masas y una presencia miliciana en las zonas estratégicas. En los espacios donde aún no se podían crear bloques por falta de condiciones, se establecería un comando conjunto<sup>13</sup>, que evolucionaría hasta convertirse en un bloque (Peña, 2011, p. 215). Para lograr una mejor coordinación, las FARC-EP se aseguraron de que un integrante del secretariado estuviera presente en cada bloque o comando conjunto con el fin de esclarecer el plan estratégico a los diferentes frentes. En el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, funcionaba el Comando Conjunto Occidental (CCO), que tenía como representante del secretariado a Guillermo León Sáenz, *Alfonso Cano*, quien llegó a ser remplazado tras su asesinato en 2011 por Jorge Torres Victoria, *Pablo Catatumbo* (Peña, 2011, p. 215).

Los frentes se fortalecieron y se crearon nuevas formas operativas. Una de ellas fueron las columnas móviles, que tenían como propósito desplazarse por diferentes zonas con una cierta autonomía respecto a sus acciones armadas. El CCO estaba estructurado en siete columnas móviles: Jacobo Arenas, Miller Perdomo, Gabriel Galvis, Daniel Aldana, Mariscal Sucre, Alirio Torres y Libardo García, siendo la última la que llegó a tener mayor presencia en el municipio de Buenaventura (CERAC, 2015, p.3). Junto con las columnas móviles, incursionaban en el Valle del Cauca las compañías Víctor Saavedra y Alonso Cortés (Verdad Abierta, 4 de marzo de 2015). El poderío militar de las FARC-EP se empezó a notar en el departamento del Valle a comienzos

---

<sup>13</sup> Los Comandos Conjuntos se definen como estructuras de coordinación que orientan las acciones militares de los frentes y columnas presentes en un determinado territorio, y que aún no están agrupados en un Bloque.

de los noventa, tras los eventos en Casa Verde (1990) y las incursiones de esta guerrilla en 1991 y 1992, principalmente en la carretera Buenaventura-Cali<sup>14</sup> (Defensoría del Pueblo, 2011, p.20).

A través de esta nueva estructura militar, las FARC-EP mantuvieron una presencia activa en cercanía con las comunidades negras, en las zonas rurales de Buenaventura. En ese momento las comunidades afrodescendientes eran fuertemente victimizadas por la utilización de sus tierras para la minería ilegal y la violencia que esto generaba. Por lo tanto, en un principio las FARC-EP lograron implementar una relación de asistencia con algunas comunidades, básicamente otorgando un apoyo en sus demandas de mejores servicios de salud. Sin embargo, esta relación no fue duradera ya que hubo discordias y enfrentamientos entre los movimientos sociales, generando una fractura ideológica entre estos y la organización guerrillera (Flórez y Ruiz, 2018, p.550).

La victimización de las comunidades negras en esa época generó grandes desplazamientos, siendo Buenaventura uno de los principales destinos. Las comunidades afectadas por la minería ilegal provenían principalmente del Naya, Timbiquí y del norte del río San Juan. Más al norte, los cultivos de palma en el medio Atrato y los aserríos de madera promovidos por Cartón Colombia en las selvas del Chocó –más precisamente en el río Calima– también generaron desplazamientos. A partir de esto se crearon y se poblaron los barrios de bajamar, ubicados en Isla Cascajal de Buenaventura, al costado del puerto, hoy considerados como los barrios más pobres y vulnerables frente al conflicto armado en la ciudad (Molano, 2017, p. 124).

Finalmente, con la llegada del ELN y demás frentes de las FARC-EP desde zonas rurales a urbanas, lo que era antes una lucha solo del campo se trasladó a la ciudad. El Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las FARC-EP por ejemplo, comandado por Milton Sierra Gómez, alias *JJ*, inicialmente se estableció para operar en Cali (CNMH, 2017), pero luego amplió su influencia hacia los ríos Raposo, Mayorquín, Naya, Cajambre, y empezó a manejar milicias en los barrios de Buenaventura hacia 1993 (El País, 21 de febrero de 2010).

#### ii) Disputa entre actores del narcotráfico

Los años noventa también estuvieron marcados por una transformación en el control del comercio de cocaína, estableciendo transformaciones en las dinámicas del conflicto. Entre 1993 y 1996 se dieron muertes y capturas de varios capos de los carteles de Cali y Medellín, lo que ocasionó el debilitamiento de estas estructuras y posteriormente la rendición frente a las autoridades. El declive del Cartel de Cali dejó un vacío de poder y produjo la llegada de nuevos actores del narcotráfico y el fortalecimiento de otros (Flórez y Ruiz, 2018, p.550).

Por un lado, las FARC-EP buscaron financiar su expansión militar con una mayor participación en el narcotráfico suroccidental. Las guerrillas ya incursionaban en contra del Cartel de Cali a través de secuestros a los jefes, capos y sus familiares: el año 1992 por ejemplo, estuvo marcado por una “guerra de secuestros” entre aquel cartel y el Frente 6 de las FARC-EP (El Tiempo, 20 de noviembre de 1992). Sin embargo, decidieron dedicarse también a la producción de droga: establecieron sus propios laboratorios (cristalizadores) y comenzaron a usar el narcotráfico como una de sus principales fuentes de ingresos (CNMH, 2017, p. 124).

---

<sup>14</sup> Los registros de la base de datos del CNMH no dan cuenta de estos hechos (ver Gráfica 6).

Por otro lado, a partir del debilitamiento del cartel de Cali se consolidó el cartel del Norte del Valle (CNDV), marcando el comienzo de una nueva disputa territorial entre los nuevos capos<sup>15</sup> de esta estructura y los mandos medios del antiguo cartel de Cali a fin de adquirir el control de las rutas, de las tierras y de los mercados dedicados al comercio de drogas. Para formar el CNDV llegaron los narcotraficantes *Don Diego*, *El Alacrán* y *Bananas*, entre otros. Algunos eran originarios del Valle del Cauca, pero se habían enriquecido con el tráfico de drogas en el Putumayo, y otros se trasladaron a Cali por estar perseguidos en otras regiones de Colombia. Este nuevo cartel llegó a ser, en la década del noventa, el más importante de Colombia. El FBI estimaba que era responsable del 60% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. El *modus operandi* del cartel era llevar cargamentos de cocaína desde la costa Pacífica a México, a la Organización Beltrán Leyva (antiguo brazo del Cartel Sinaloa), quien la trasladaba a Estados Unidos (Insight Crime, 2014).

Los capos de este cartel empezaron a comprar tierras en el departamento del Valle. La ampliación de su territorio se debía a la necesidad de blanquear y acumular capitales ilícitos, obtener más áreas de seguridad y de refugio y tener espacios para sus laboratorios y pistas de aterrizajes. En suma, las tierras agrícolas se convirtieron en tierras destinadas al narcotráfico, a la ganadería extensiva o de uso recreacional. Comprar tierras en el centro del Valle también era una forma de adquirir más poder en la región: los narcos se convertían en terratenientes, lo que implicaba tener más poder político e influencia social, además de un poder económico importante. El desplazamiento de la población rural en el Valle del Cauca causado por las incursiones de actores armados y de la crisis cafetera de la primera mitad de los noventa, había creado un contexto favorable para la expansión territorial de los narcotraficantes: una vez que los campesinos fueran despojados, los narcos conseguían comprar sus tierras a un precio muy bajo (CNMH, 2018, p.115)

No obstante, al tener más cercanía con el sector ganadero y un mayor poder económico en la región, les era necesario invertir en una mejor protección frente a los hurtos, extorsiones y secuestros de las guerrillas. Efectivamente, en ese momento las guerrillas –principalmente las FARC-EP y el ELN– continuaban con las extorsiones a los narcotraficantes de la zona, asaltaban sus propiedades y secuestraban a sus familiares (CNMH, 2018, p. 106). En cuanto a las FARC-EP, también les era crucial defender su territorio y mantener un control en las zonas estratégicas para lograr sus objetivos de expansión territorial y de diversificación de formas de financiación definidos en la séptima y octava conferencia. Las zonas más estratégicas en el Pacífico centro eran el puerto de Buenaventura, los corredores fluviales y las vías de comunicación entre Buenaventura y Cali.

Desde que las FARC-EP entraron en la ciudad con las milicias que se conformaron, se concentraron en mantener el control del puerto de Buenaventura y de los barrios estratégicos de la ciudad, cobrando impuestos por la salida de narcóticos en el puerto, extorsionando a empresarios, haciendo sabotajes, retenciones, quema de tractomulas y secuestros masivos en la vía Buenaventura-Cali (CNMH, 2015; 2018). Cabe recordar que la liquidación de Colpuertos generó un contexto de alto desempleo que facilitó el ingreso de los grupos insurgentes a las

---

<sup>15</sup> Entre los nuevos capos se encuentran: Efraín Hernández, *Don Efra*, Hernando Gómez, *Rasguño*, los hermanos Fernando, Orlando, Arcángel y Lorena Henao, Juan Carlos Ramírez (*Chupeta*) Wilber Varela (*Jabón*) y Diego León Montoya (*Don Diego*) (SAT, 2011. En: CODHES, 2013).

comunas del casco urbano de Buenaventura, donde se encontraban las bandas delincuenciales, para ofrecer oportunidades de trabajo y responder a las demandas sociales con la propuesta de unirse a la lucha armada (CNMH, 2015).

Las FARC-EP también buscaban controlar las vías de comunicación entre Buenaventura y el resto del departamento –el corredor del Naya y de la carretera Cabal Pombo– y de los corredores fluviales que desembocaban en el océano Pacífico. Asimismo, obtenían un mayor control de la zona y del flujo de los narcóticos. A partir de la mitad de los noventa, la creciente amenaza de los controles aéreos del Ejército hizo que los narcotraficantes utilizaran con mayor frecuencia los corredores fluviales, generando un mayor interés para las FARC-EP de controlar esas vías, principalmente la vía hídrica del río San Juan que conduce al Chocó y al Darién (CNMH, 2018; 2017).

Para esa época Buenaventura aún no era uno de los focos de atención del ELN, por lo tanto, las incursiones de este grupo en la zona eran menores a las de las FARC-EP. Sus tropas mostraban una presencia en el sur del municipio –principalmente en los entornos de la cuenca del río Naya– y en la región alta de Los Farallones. Las estructuras que incursionaban en las regiones vecinas y que tenían una influencia en la región eran la columna Milton Hernández, en el Pacífico caucano, y el frente Luis Carlos Cárdenas, situado en la cordillera occidental, en los alrededores de Cali (Defensoría del Pueblo, 2016a; FIP, 2014). El ELN también contaba con frentes urbanos: el frente Omaira Montoya y el José María Becerra (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 20).

A diferencia de las FARC-EP, el ELN en esa época evitaba involucrarse directamente con la producción de coca: gran parte de sus recursos financieros provenían de la minería y la extracción de petróleo. Utilizaban técnicas de sabotaje o toma de rehenes civiles, a diferencia de las FARC-EP que privilegiaba la confrontación con la Fuerza Pública. Sin embargo, el propósito de la expansión militar del ELN hacia el suroccidente –y principalmente la expansión hacia el Valle del Cauca– también era acompañar el proceso de fortalecimiento de las facciones narcotraficantes en esta región (CNMH, 2015).

Hacia la mitad de los noventa, el ELN entró en un proceso de debilitamiento causado por la incursión de los grupos paramilitares en sus zonas de influencia del norte del país. Los frecuentes enfrentamientos con otros grupos armados, además de los problemas de división interna, desarticulación de las estructuras urbanas en el Valle del Cauca y en la costa y de algunos de sus frentes en el Urabá y en Magdalena, hizo que la organización guerrillera entrara en una crisis profunda. De forma paralela, los paramilitares empezaron a cultivar coca en las regiones donde antes hacía presencia el ELN, aumentando su vulnerabilidad. La decisión fue responder con un aumento de secuestros masivos en las zonas donde los paramilitares pretendían expandirse, en vez de incursionar con asesinatos selectivos como lo hacían antiguamente. Según la FIP (2013) la intención del ELN a través de estos secuestros era hacer presión para negociar con la administración del entonces presidente Andrés Pastrana.

En 1998, al empezar el proceso de paz con Pastrana, las FARC-EP habían alcanzado varias de las metas planteadas en su última conferencia: se habían expandido hacia zonas estratégicas, habían crecido militarmente hasta tener cerca de 70 frentes ubicados en la casi totalidad de los departamentos y en total sumaban cerca de 15.000 combatientes. El plan estratégico que habían

aplicado a principios de los noventa había funcionado: tenían previsto hacer un salto hacia la guerra de movimientos y luego a la guerra de posiciones (Pataquiva, 2009).

Durante estas negociaciones de paz en el Caguán, las FARC-EP aprovecharon para avanzar militarmente hacia el Pacífico con la intención de aumentar su protagonismo armado (Pataquiva, 2009). Asimismo, ampliaron su presencia en las comunas más pobres del casco urbano de Buenaventura gracias al apoyo del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas (Verdad Abierta, 4 de marzo de 2015; FIP, 2012).

Pese a algunos hechos victimizantes contra de la población, la principal modalidad de violencia practicada por las guerrillas en esta década eran ataques a bienes civiles, sin afectar necesariamente la integridad de la población (CNMH, 2018). Hasta esa fecha, habían ocurrido sólo algunos enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército; sin embargo, a finales de los noventa, las FARC-EP tenían como prioridad atacar a entes del Estado del orden local, usando como métodos la toma de cabeceras municipales, presionando la renuncia de alcaldes, fiscales y jueces, destruyendo puestos de policía y declarando el sabotaje de las elecciones de 1997. Estos hechos se presentaron con mayor frecuencia en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, más precisamente en las zonas montañosas de la cordillera central (CNMH, 2018, p. 127).

Junto con las incursiones contra las instituciones del Estado, las tomas en la carretera Cabal Pombo se hicieron más frecuentes. En respuesta a esto, el Estado aumentó sus enfrentamientos con el CCO intentando disolver su estructura a través de constantes acciones bélicas.

El Ejército Nacional realizó un sorpresivo ataque en marzo 1999 donde fueron abatidos 50 guerrilleros en medio de un bombardeo. El 31 de agosto del mismo año, día de paro nacional citado por las centrales obreras, las FARC-EP se tomaron la Hidroeléctrica de Anchicayá, reteniendo por unas horas a más de cien trabajadores; el 21 de octubre de tal año se registraron ametrallamientos y bombardeos cerca al estero Aguacate, lo que generó un desplazamiento masivo.

En medio de la confrontación con las FARC-EP, el 30 de mayo 1999 el Frente José María Becerra del ELN incursionó en la región con el secuestro masivo de 180 personas en la iglesia La María en Cali. El día del secuestro, los guerrilleros abandonaron la iglesia con sus rehenes y se direccionaron hacia el sur, por la vía Jamundí, para luego desviarse hacia Los Farallones. En el camino, detonaron artefactos y se enfrentaron con unidades del Ejército (CNMH, 2015). Según algunas versiones, el ELN utilizó el área del Naya como una ruta de escape y un lugar para esconder las víctimas de sus secuestros masivos, entre ellos, los secuestrados en la iglesia La María y en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura (Cifuentes, 2001, p.7; Echandía, 2004, p. 84)<sup>16</sup>.

En este contexto se generó un alza en los niveles de desplazamiento forzado (ver Gráfica 9), que dejó 636 víctimas en 1999, algunas hacia afuera de Buenaventura y otras desde las zonas rurales a la zona urbana. Mientras tanto, los municipios cercanos del Chocó recibían a las víctimas que huían de otras regiones de este departamento o de Buenaventura.

---

<sup>16</sup> Los datos del CNMH dejan ver un pico para el hecho victimizante de secuestro en el año 1999. Sin embargo las cifras no registran estos secuestros masivos por la ubicación geográfica donde tuvieron lugar (ver Gráfica 6).

Los desplazamientos fueron vividos con aguda violencia para las comunidades negras e indígenas, quienes luchaban por un reconocimiento de sus tierras. Desde los finales de la década del noventa, la incursión de los actores armados en los territorios colectivos del municipio de Buenaventura generó el desplazamiento de cerca del 79% de la población asentada en esos territorios, lo que obligó a las comunidades a extender sus procesos organizativos hacia la zona urbana.

De acuerdo a los registros, este periodo tuvo un promedio de 33,95 víctimas por año y el hecho victimizante que predominó fue el asesinato selectivo (64,65% de las víctimas); en el 40,21% de los casos se desconoce el presunto responsable y a las guerrillas se les atribuyó el 21,06%. Se registra una masacre de cuatro personas en el barrio Gran Colombia en mayo de 1993 cometida por un grupo armado no identificado y una de cinco personas en Sabaletas, vereda Aguaclara, ejecutada por las FARC-EP el 12 de noviembre de 1995. Se registra un hecho atribuido a la disidencia del EPL en diciembre de 1996 en el barrio Kennedy (CNMH, 2019).

Si bien los paramilitares no hacían aun presencia oficial en el territorio, se registra un periodo de asesinatos selectivos en la cabecera municipal durante 1991; una masacre de seis personas en el barrio La Inmaculada en diciembre 26 de 1994; y diferentes asesinatos selectivos entre finales de 1996 y principios de 1997 en los barrios Pueblo Nuevo, Lleras, Bellavista y Calle Larga, todo atribuido a un grupo paramilitar no identificado. También se registran altos niveles de desplazamiento forzado por estos hechos (CNMH, 2019).

#### **2000-2004: periodo de control paramilitar**

La primera década del siglo XXI está marcada por cambios estructurales en las dinámicas del conflicto a nivel nacional y regional. En primer lugar, entre 2000 y 2004 incursionan con fuerza estructuras paramilitares en el Pacífico centro, y especialmente en Buenaventura. En segundo lugar, a partir del año 2001, el Gobierno (bajo la presidencia de Pastrana y Uribe) decide optar por una estrategia político-militar de reapropiación del monopolio legítimo de la violencia. Finalmente, frente a esas nuevas amenazas, las guerrillas –que habían alcanzado un fuerte control territorial durante la década del noventa– fueron obligadas a replegarse a las zonas rurales del municipio.

Desde finales de los noventa, se incrementa la violencia en el departamento del Chocó y de Valle del Cauca con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde el Urabá. El conflicto armado se extendió en todo el departamento del Chocó, incrementando las zonas de cultivos de uso ilícito e impidiendo a las comunidades indígenas y afrodescendientes practicar sus actividades económicas tradicionales, lo que generó una profunda crisis alimentaria (Banco de Medios, 2001).

Las AUC ingresaron al departamento del Valle después del secuestro masivo que efectuó el ELN en la iglesia La María. Según relatos de desmovilizados, después de este acontecimiento, grupos de comerciantes, empresarios, ganaderos y agricultores se reunieron para comprometerse a financiar el grupo armado. Argumentando estar cansados de secuestros, extorsiones y asesinatos, llamaron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño para que enviaran sus hombres a combatir las

guerrillas. Sin embargo, según el CNMH (2018, p. 143) dicho el secuestro se usó como pretexto por la comandancia de las AUC para entrar oficialmente en la región. Esta estructura federal de paramilitares ya había empezado a ocupar regiones que aún no controlaban, enviando pequeños grupos de hombres entrenados en sus escuelas en Urabá con el objetivo de apropiarse de nuevos territorios y reclutar más personas. De esta manera, consiguieron tomar gran parte de los Llanos Orientales con el Bloque Centauros y el norte de Santander con el Bloque Catatumbo (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011).

De hecho, Tribunal Superior del Distrito en Medellín (TSDJM) en su sentencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias *Monoleche*, rechazó la hipótesis de que el Bloque Calima ingresara en esta región como respuesta al secuestro masivo de La María. Según el Tribunal, no hubiera sido posible organizar una operación de tal magnitud en tan poco tiempo. En realidad la operación implicó y contó con la decisión, participación y concertación previas de los empresarios del Valle del Cauca y los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y pasó necesariamente por la definición, reunión y aporte de los recursos para su aprestamiento y operación, la selección, entrenamiento y preparación de las tropas y sus mandos, el conocimiento del terreno, la planeación de su ingreso y sus zonas de ubicación y operación y la implementación de su traslado y la logística que implicaba su llegada a combatir en la zona (Pinilla, 2014, p. 213). Por ello, la contrainsurgencia no puede constituir la única hipótesis para explicar la llegada del Bloque Calima al territorio del Valle del Cauca y Cauca, y más particularmente, a Buenaventura. Se han de destacar otros factores que determinan la importancia fundamental del control de este territorio para los grupos armados ilegales, entre ellos la condición de Buenaventura como principal puerto del Pacífico – vital para el tráfico de productos lícitos e ilícitos– y la existencia de corredores y rutas clave para el narcotráfico.

Así pues, el apoyo de los narcotraficantes y de los militares de la región no fue de menor importancia para la llegada del Bloque Calima (BC). A los narcotraficantes les convenía tener una estructura criminal más organizada para defenderse de las guerrillas, en vez de sus propios ejércitos privados. El narcotraficante Diego Montoya, *Don Diego*, fue responsable de reunir con distintos sectores los recursos necesarios para la financiación del Bloque (CNMH, 2018, p. 142). La antigua y cercana relación que tenían los narcotraficantes con los paramilitares se pudo observar en la definición de objetivos de este grupo armado.

En el mismo sentido, como lo había evidenciado la masacre de Trujillo, existía una alianza entre agentes del Estado y los actores locales y regionales respecto a la supuesta lucha antisubversiva. La relación entre la Fuerza Pública y los actores criminales se basaba en un alto grado de corrupción y una suma considerable de beneficios económicos (CNMH, 2018, p.138). Cabe resaltar que el año de la llegada de los paramilitares en la región coincidió con el periodo de militarización de la zona (CNMH, 2018, p. 138). Asimismo, investigaciones han identificado que militares (activos, retirados o de reserva) habrían colaborado con distintos grupos paramilitares mediante el suministro de información de inteligencia, armas y cubriendo sus primeras actividades ligadas al narcotráfico (HRW, 2000; CNMH, 2018).

Además del apoyo de narcotraficantes y de la Fuerza Pública, el Bloque Calima también recibió el apoyo de terratenientes, políticos del establecimiento, militares y otros grupos de interés. Más adelante, en el año 2000, Ever Veloza, alias *HH* –comandante del BC en ese momento– buscó

recursos económicos para expandir el bloque. Se reunió con empresarios –principalmente ganaderos y gerentes de ingenios– quienes acordaron entregar 250 millones de pesos a Byron Alfredo Jiménez Castañeda, *Gordo Pepe*, exsecretario de Vicente Castaño (CNMH, 2018, p.182).

#### *Entrada oficial Bloque Calima*

El 22 de julio de 1999 las ACCU –más tarde AUC– enviaron un comunicado a los medios de comunicación y repartieron panfletos indicando que a partir de esa fecha ingresaban al Valle del Cauca. En el comunicado también afirmaron que criticaban las negociaciones de paz con las FARC-EP dirigidas por el gobierno de Pastrana y que habían llegado como consecuencia del clamor de algunas personas de la región pero que se expandirían en todo el suroccidente del país (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011).

En 1999 los hermanos Castaño enviaron 50 hombres al mando de Rafael Antonio Londoño Jaramillo, *Rafa Putumayo*<sup>17</sup>, representando el Bloque Calima, quienes en un inicio se asentaron en una finca en el municipio de Zarzal. Los Castaño mandaban hombres únicamente de Urabá, lo que era una supuesta medida de seguridad para evitar infiltraciones por parte de las guerrillas y al mismo tiempo reflejaba el prejuicio que tenía la casa Castaño con los pobladores del suroccidente del país, a quienes calificaban de guerrilleros o simpatizantes de la insurgencia (CNMH, 2018, p.149).

Mientras el Bloque Calima aumentaba sus integrantes, decidieron desplazarse a una base en la vereda Pardo Alto de Tuluá, el lugar donde sus hombres se mantenían concentrados y salían a incursionar en el centro y oriente del departamento. Las primeras semanas salieron a reconocer la zona y a recolectar información sobre sus objetivos militares con la ayuda de agentes de Estado. Después ejecutaron varias masacres<sup>18</sup>, que en un mes dejaron 37 personas asesinadas y 730 personas desplazadas (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011).

A finales de agosto *Rafa* cedió el mando general a David Hernández Rojas, alias *José* o *39*, y partió hacia el sur del país. El resto de la línea de mando se mantuvo: Nolberto Hernández Caballero, alias *Román*, era el coordinador o comandante militar y Roberto Vargas Gutiérrez, alias *Marcos* o *Gavilán* era su segundo al mando, mientras que Elkin Casarrubia Posada, alias *El Cura* o *Mario*, fue nombrado comandante de contraguerrilla. *Sisas* (Jair Alexander Muñoz Borja), *Catori*, *Clavijo*, *Perea* o *Percherón*, *El Negro*, *Nechí* (Eduardo Antonio Salgado), entre otros, quedaron a cargo de las escuadras del grupo armado. Miguel Enrique Mejía, alias *Santos* o *Chiquito Político*, era el encargado de los asuntos políticos y la comunicación (CNMH, 2018, p. 151). A mediados de 2000 cambió la línea de mando del Bloque Calima: tras el asesinato de *Román* en Tuluá, alias *Luis* (Freddy Antonio Cadavid Acevedo) y *Daniel*, fueron nombrados como segundo y tercero al mando.

---

<sup>17</sup> “Rafa Putumayo al parecer fue el encargado de la creación del Bloque Sur Putumayo, antes de ser enviado por los hermanos Castaño a apoyar la consolidación del Bloque Calima de las AUC y posteriormente retornar a comandar los paramilitares de Putumayo. Sobre el particular, es plausible que Rafa Putumayo participara en la creación y comandancia de los dos Bloques paramilitares, en tanto su cercanía a narcotraficantes permitió la consolidación de alianzas entre las ACCU de los Castaño y los carteles que buscaban disputar el territorio y las finanzas de las guerrillas” (CNMH, 2018, 54-55).

<sup>18</sup> Algunas de ellas en las veredas de Chorreras, El Placer y San Lorenzo (Sentencia condenatoria contra el senador Juan Carlos Martínez, única instancia 30.097, 8 de junio de 2011).

Cabe señalar que *Román, Luis* y *Daniel* eran antiguos militares del Ejército, quienes alcanzaron el grado de sargento, teniente y cabo, respectivamente. Ingresaron al grupo armado paramilitar a través de Carlos Mauricio García Fernández, *Doble Cero* o *Rodrigo*, quien también era militar y, posteriormente, uno de los personajes más importantes de las ACCU y las AUC (CNMH, 2018, p. 180). Una gran parte de los comandantes y efectivos paramilitares provenían de la Fuerza Pública y otra pequeña parte de las guerrillas. El interés de reclutar exguerrilleros y militares era aprovechar su entrenamiento militar previo para así ahorrar tiempo. Además, al reclutar guerrilleros, los paramilitares tenían una ventaja en asuntos de inteligencia; de hecho, algunos de los exguerrilleros fueron designados como comandantes sin un entrenamiento previo (CNMH, 2018).

Poco tiempo después, hacia julio de 2000, alias *HH* asumió la comandancia general del Bloque Calima. *El Cura* fue nombrado comandante militar y segundo al mando. El manejo financiero se entregó a Juan Mauricio Aristizábal Ramírez (*El Fino*), seguido por Javier Mondragón González, (*Erick*), Luis Horacio Martínez (*Tocayo*), Ubernis Alberto Areiza Fernández (*Andrés*) y Omar de Jesús Ojeda (*Fabián*). Estos hombres tenían la responsabilidad de pagar la nómina y entregar el dinero a los comandantes de los grupos para comprar armas, sobornar funcionarios y pagar los abogados de los paramilitares que fueran capturados (CNMH, 2018, p. 181-184).

Es importante explicar en qué contexto fue creado el Bloque Calima. En primer lugar, como ya se mencionó, en la década del noventa el narcotráfico se había expandido en el suroccidente del país, permitiendo el fortalecimiento económico de varias estructuras guerrilleras y de las élites relacionadas con el narcotráfico. Esta expansión se volvió a desarrollar en la primera década del siglo XXI. En segundo lugar, los narcotraficantes adquirían las tierras de campesinos debilitados por la crisis agraria del noventa, obteniendo más poder político y económico. Por lo tanto, las amenazas, extorsiones y secuestros por parte de las FARC-EP se hacían de manera más frecuente. Tercero, para defenderse de las FARC-EP, los narcotraficantes –principalmente *Don Diego*– estaban muy interesados en llevar paramilitares de Urabá. Finalmente, había un interés explícito de las AUC por expandirse en el suroccidente: empezaron en Tuluá, luego en el sur del Valle hasta llegar al norte del Cauca (CNMH, 2018).

Con la implementación del Plan Colombia en 1999 –un acuerdo bilateral político, económico y militar con EEUU a fin de establecer la paz con un enfoque antinarcótico– Buenaventura se convirtió en el refugio de los cultivadores de coca afectados por las fumigaciones aéreas en las otras zonas del país. Las FARC-EP, quienes tenían el mayor control territorial en el Pacífico centro, ofrecían lugares seguros donde cultivar la coca a cambio de dinero. Las AUC llegaron al territorio intentando reemplazar el rol de las FARC-EP y atraer más actores narcotraficantes a la región (CNMH, 2018, p. 148). Por lo tanto, varias comunidades provenientes de las cuencas de los ríos Calima, Anchicayá, Raposo y Naya vivieron la llegada de los cultivos de uso ilícito a sus territorios (IEI-SIGPE, 2019).

### *Entrada del Frente Pacífico*

De acuerdo al CNMH, la idea inicial de las AUC era conformar en Buenaventura un grupo paramilitar distinto al Bloque Calima. Antes de que *HH* se convirtiera en el máximo comandante le fueron encargados los preparativos de lo que sería el Bloque Pacífico. Con ese objetivo hizo

acercamientos con Danilo González<sup>19</sup> para que le ayudara a entablar contactos con integrantes de la Fuerza Pública y jefes de bandas delincuenciales en Buenaventura. Sin embargo, el proyecto de un bloque diferenciado no se concretó y el grupo que operó en el Pacífico -denominado Frente Pacífico por la Fiscalía General de la Nación- estuvo adscrito al Bloque Calima (CNMH, 2018, p. 215).

*HH* aprovechó los contactos que le facilitó González y se acercó a alias *Julio* –identidad real desconocida–, quien a su vez tenía vínculos con los líderes de las bandas de delincuencia común: alias *Freezer*, *Fabio*, *Ramón*, *Maquia*, entre otros, quienes entregaron información sobre el municipio y sobre integrantes de la Fuerza Pública que estarían dispuestos a colaborar con paramilitares. Sobre esa base, *HH* ordenó a *El Fino*, *Chamarra* y *Chori* que recurrieran a dichos contactos para recabar información sobre la guerrilla (CNMH, 2018, p. 216). Esas labores permitieron identificar varios integrantes del Frente 30 de las FARC que operaban en el casco urbano de Buenaventura y sus alrededores, incluyendo varios de sus jefes: Wílber Valencia, alias *Félix*, comandante de las milicias urbanas; Carlos Efrén Guevara Cano, jefe político; *Ángel*, jefe financiero; y *Colé*, quien dirigía un grupo en el kilómetro 23 en la vía al mar. Algunos fueron asesinados (por ejemplo, *Ángel*) y otros fueron persuadidos para ingresar al grupo paramilitar a cambio de remuneración mensual (CNMH, 2018, p. 221). Guevara Cano se convirtió en jefe político bajo el alias de *Fernando Político* y *Félix* se pasó al BC con 20 hombres y su respectivo armamento, donde posteriormente sería nombrado uno de los comandantes urbanos en Buenaventura.

La incursión del Bloque Calima en Buenaventura inició con la masacre de Sabaletas el 11 de mayo de 2000, en la que 10 civiles<sup>20</sup> fueron asesinados y otros tres desaparecidos por ser supuestos colaboradores de la guerrilla (CNMH, 2018, p. 174). Según algunos desmovilizados, en su camino hacia Sabaletas, los camiones de *El Cura* fueron detenidos en un retén del Ejército, pero *Luis* (excapitán del Ejército) logró que los dejaran pasar sin registrarlos. Después de la masacre, *El Cura* y sus hombres continuaron hasta el corregimiento El Queremal, en Dagua, y *Luis* regresó con los camiones (Verdad Abierta, 8 de febrero de 2011). Ese grupo, al mando de *El Cura*, conformó el Frente Farallones y empezó a incursionar en el norte del Cauca desde Jamundí. El mismo mes (mayo 2000) se expandió el terror paramilitar en Buenaventura con dos masacres más, acompañadas de violencia sexual, desplazamiento y desapariciones forzadas: el 21 de mayo en el corregimiento de Dagua (canal de Medellín), en la vereda Campo Hermoso y en el barrio La Playita; el 29 del mismo mes en el barrio Cascajal, lo que abrió la incursión del Bloque Calima en el casco urbano del municipio (CNMH, 2018, p. 174).

Desde la entrada del Frente Pacífico en el municipio de Buenaventura, las cifras de hechos victimizantes alcanzaron los niveles más altos de su historia. Según el RUV, en 1999 hubo 1.249 víctimas en el municipio y en 2000 se registraron 5.500 víctimas (RUV, 2018). Esta alza de hechos victimizantes perduró mientras los paramilitares estaban en la región. Su llegada

---

<sup>19</sup> Coronel retirado de la Policía que formó parte del Bloque de Búsqueda en contra de Pablo Escobar. Tuvo gran cercanía con los hermanos Castaño durante la existencia de Los Pepes y posteriormente trabajó como jefe de seguridad de Wílber Varela, alias *Jabón* (CNMH, 2018, p. 215).

<sup>20</sup> La base de datos del CNMH (2019) registra 4 víctimas por este hecho.

transformó por completo la dinámica del conflicto en el Pacífico centro, particularmente en Buenaventura: aumentaron las zonas de cultivos de uso ilícito, la violencia en el territorio, los desplazamientos y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y legales.

El objetivo de las AUC con la fundación del Bloque Calima –además de la supuesta lucha antiterrorista– era incrementar su control territorial para controlar más fuentes de financiación (especialmente el narcotráfico), las captaciones de rentas ilegales y legales y obtener una serie de intereses económicos (CNMH, 2018, p. 148), algunos de los cuales coinciden con la implementación de megaproyectos en tierras de comunidades negras, campesinas e indígenas. Uno de los objetivos de los paramilitares –y luego de los grupos posdesmovilización– era desalojar a la población a través de masacres, homicidios y desapariciones forzadas, a fin de implementar megaproyectos en los territorios considerados después como “desocupados” (Espinoza, 2011).

El Frente Pacífico, al controlar una zona donde se recolectaban los mayores ingresos económicos –gracias al cobro de gramaje a los narcotraficantes por la salida y entrada de drogas y armas por las costas del Pacífico– terminó quedando a cargo del área financiera del Bloque Calima (CNMH, 2015, p. 87). Los encargados de suministrar los medios de transporte a los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle y del resto del país para sacar la droga por el puerto de Buenaventura eran los hermanos González y Olmes Durán Ibarquén. Por cada kilo de droga exportada, los narcotraficantes tenían que pagar un impuesto a las AUC. Estaban obligados a pagarles, ya que las alternativas al puerto, como los corredores fluviales, estaban controlados por las mismas AUC (como lo hacían las FARC-EP precedentemente) (Sentencia 30097 de 2011).

El grupo que operó en Buenaventura, los municipios aledaños del Valle del Cauca y los tres municipios costeros del Cauca (López de Micay, Timbiquí y Guapi) estuvo conformado por 150 personas 100 de ellas se desempeñaron como urbanos y el resto operó en zona rural de los municipios costeros de Valle del Cauca y Cauca. El Bloque Calima en esta zona tuvo dos comandantes principales: *El Fino*, quien se desempeñó como comandante financiero del todo el Bloque y John Henry Jaramillo Henao, alias *El Mocho*, comandante militar de la zona. El área urbana estuvo comandada, desde mayo de 2001, por Yesid Enrique Pacheco Sarmiento, alias *El Cabo*, quien a su vez tuvo a cargo comandantes de zonas o barrios en el casco urbano de Buenaventura y dirigió el grupo de 50 patrulleros que operaron en zonas rurales sobre la costa del Pacífico. Aproximadamente 20 integrantes del grupo provenían del Frente 30 de las FARC –entre ellos Wílber Valencia, alias *Félix*–.

#### *Estrategia de sembrar el terror del Bloque Calima (2000-2001)*

La prioridad de *HH* al inicio de su comandancia del Bloque Calima era ampliar los sectores financiadores del bloque y exigir un monto más elevado a las élites legales e ilegales que aportaban con el objetivo de expandir esta estructura paramilitar. Con los recursos obtenidos de los empresarios, narcotraficantes y otros actores (varios eran víctimas de extorsión por parte de las guerrillas) incrementó el número de integrantes del bloque –provenientes de Urabá– y expandió el control territorial a nuevas zonas (Verdad Abierta, 6 de noviembre de 2012).

El 2000 –llamado el “el año de los mil muertos”– estuvo marcado por una estrategia del Bloque Calima de sembrar el terror a través de masacres y asesinatos selectivos. Luego, en 2001, se estableció una estrategia de consolidación territorial siguiendo tres modalidades: i) el

reclutamiento de colaboradores, milicianos y guerrilleros del Frente 30 de las FARC-EP; ii) el exterminio de todas las personas sospechosas de tener un vínculo con las FARC-EP; y iii) el bloqueo de alimentos y remesas con el fin de cortar los suministros a las guerrillas. Gracias a esta estrategia, los paramilitares obtuvieron un control creciente del territorio entre 2001 y 2004, especialmente en el casco urbano y luego hacia las zonas rurales (CNMH, 2018).

En sus versiones libres, *HH* enumeró las diferentes zonas controladas por el Frente Pacífico, entre ellas: Calima-Darién, Restrepo, Loboguerrero, Puente Tierra, Río Bravo, Los Tubos, La Primavera, Bajo Calima<sup>21</sup>, Cisneros, Ladrilleros (CNMH, 2015, p.95). *HH* mantenía presencia en Calima-Darién, ingresando temporalmente a municipios costeros del Cauca con 20 hombres liderados por *El Cabo* (Verdad Abierta, 8 de febrero de 2011).

El mapa 2 muestra las masacres ejecutadas por paramilitares reportadas por el CNMH (2015) entre 2000 y 2004, que dejaron un total de 164 víctimas, como parte de la estrategia de controlar la población a través del terror, especialmente en las zonas estratégicas del municipio de Buenaventura. Estas masacres, además de presentar un alto grado de sevicia, estuvieron acompañadas de otros hechos victimizantes como violencia sexual, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado, entre otros, y todo ello en el marco de una estrategia de tierra arrasada<sup>22</sup> (CNMH, 2015).

Como se puede observar, las masacres ocurrieron en los barrios del casco urbano cercanos al puerto –principalmente en las comunas 11, 4, 12 y 3– y en las vías principales, en la actual carretera Buenaventura-Cali y en la antigua vía al mar; “en la memoria de la gente las masacres en la zona urbana estaban relacionadas con persecución de los paramilitares a las personas que venían desplazadas de la zona rural” (CNMH, 2015, p.171). En suma, las masacres se ubicaron en vías, corredores fluviales y zonas urbanas estratégicas para el narcotráfico en Buenaventura. En este periodo también se registran dos masacres cometidas por las FARC-EP, el 16 de junio de 2000 en el barrio Viento Libre y el 29 de junio de 2003 en los barrios La Campiña y La Dignidad.

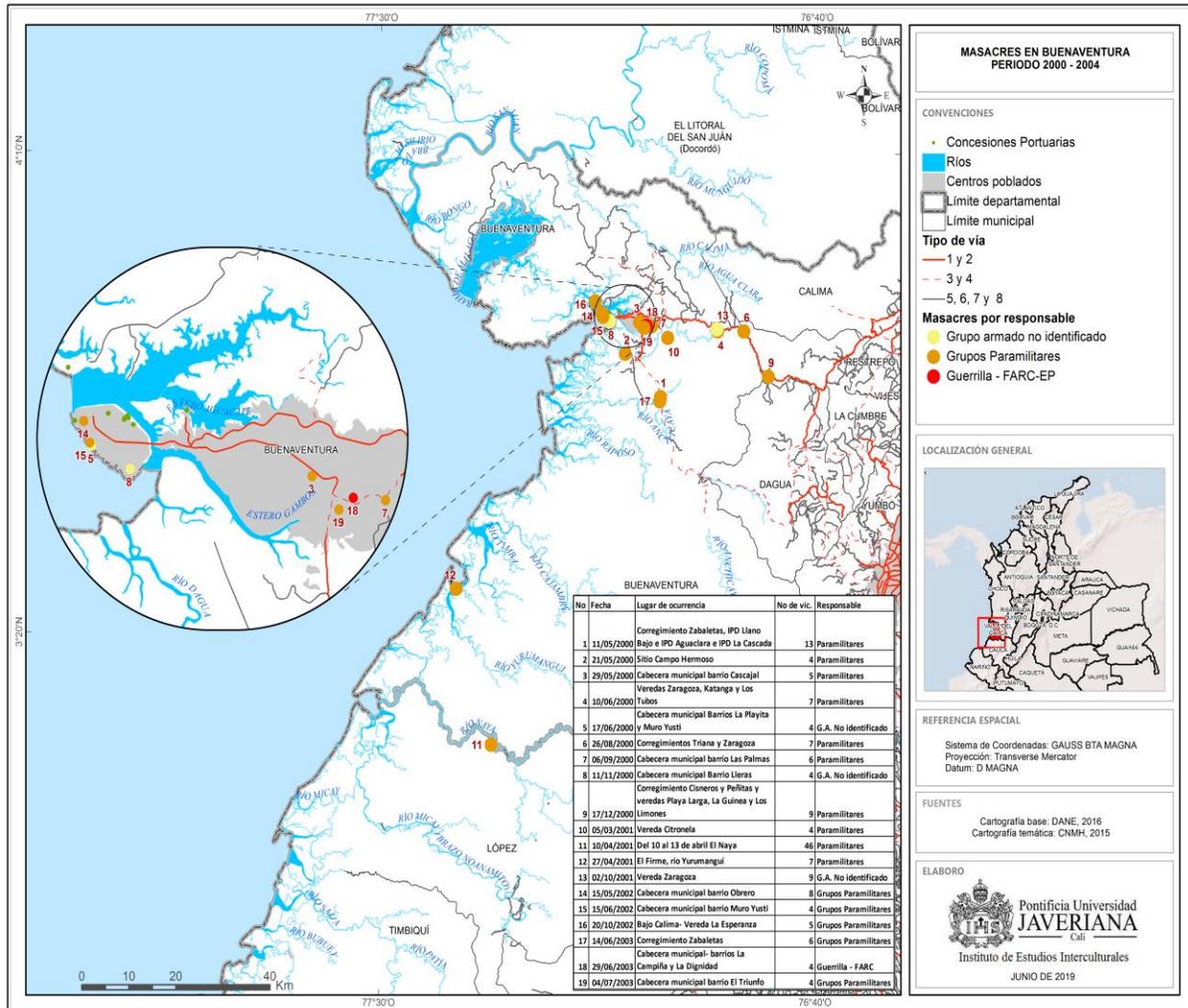
---

<sup>21</sup> Bajo Calima es una región de importante valor estratégico, pues ahí se encuentran varios corredores fluviales conectados a la vía Buenaventura-Cali, y tiene una salida al océano Pacífico (pasando por el Bajo San Juan).

<sup>22</sup> “La estrategia de tierra arrasada consiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila a las personas sino que destruye el entorno material y simbólico de las víctimas. De esta manera, el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, página 39).



**Mapa 2. Masacres según presunto responsable en Buenaventura 2000-2004**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2015)

Un caso revelador de la estrategia de *HH* y la cercanía que tenían los paramilitares con la Fuerza Pública se ilustra a través de la masacre del Naya y posteriormente la masacre en El Firme, en el río Yurumanguí, en el año 2001. Entre el 10 y 13 de abril, un grupo de 102 paramilitares del Frente Farallones del BC recorrieron los territorios aldeanos al río Naya –que marca el límite entre el departamento del Cauca y del Valle– pasando por las veredas de Timba hasta San Antonio y Puerto Merizalde. Durante esta incursión asesinaron al menos a 27 personas<sup>23</sup>, provocando el desplazamiento forzado de al menos 3.000 personas. Los días siguientes a la masacre se enfrentaron con núcleos guerrilleros de las FARC-EP y el ELN.

<sup>23</sup> Por las condiciones de la zona no se logró establecer exactamente el número de víctimas. Algunos testimonios afirman que más de 100 personas fueron asesinadas (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011).

El grupo de paramilitares provenía del municipio de Tuluá y llegó al municipio de Buenos Aires (Cauca) sin ser detectado por los diferentes puestos de seguridad en las carreteras. *El Cura*, uno de los responsables de la masacre, afirmó que los jefes paramilitares tuvieron contacto con las autoridades para llegar al corregimiento de Munchique. Ahí se reunieron 220 paramilitares de Cauca y Valle del Cauca para preparar la incursión en el Naya. El propósito de esta incursión, según *El Cura*, era que los 102 paramilitares provenientes del Valle del Cauca se asentaran en el litoral del Pacífico caucano para fortalecer el Bloque Pacífico (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011).

A partir de la masacre de El Naya se efectuaron varias capturas de paramilitares por parte de la Infantería de Marina. Según testimonios de desmovilizados, un coronel de la Armada de apellido Moreno le aconsejó al jefe paramilitar alias *El Fino* que hicieran otra masacre para distraer a las autoridades y así frenar la persecución. Así, bajo el mando de *El Cabo*, los paramilitares quemaron caseríos y asesinaron a varias personas en el corregimiento de Yurumanguí a nombre del Frente 30 de las FARC-EP, con el objetivo de confundir a la Fuerza Pública y detener la captura de los paramilitares perseguidos en el bajo Naya (Verdad Abierta, 30 de marzo de 2011; El País, 28 de abril de 2016; CNMH, 2015).

En 2002, los enfrentamientos entre las AUC y la guerrilla se concentraban principalmente en el Pacífico y en la cordillera occidental, en particular en zonas como el alto Anchicayá y Queremal, en los municipios de Dagua y Buenaventura. Sin embargo, pese a las numerosas acciones bélicas en la cordillera occidental –especialmente entre febrero y marzo de ese año– las FARC-EP lograron mantener el control en esa zona (Defensoría del Pueblo, 2011, p.23).

#### *Superioridad de las Fuerzas Militares (2002)*

En 2001 el Frente José María Becerra del ELN, responsable del secuestro en la iglesia La María de Cali y en el kilómetro 18, fue debilitado por el Ejército. Posteriormente, sus territorios fueron apropiados por las FARC-EP, quienes ocupaban la zona de Los Farallones a fin de expandir su influencia hacia el sur de la cordillera occidental. En ese momento, las FARC-EP también fortalecieron su presencia en el litoral del Pacífico.

A principios de 2002, las FARC-EP actuaban a través de ataques a bases militares de la Armada Nacional (como Cerro Tokio en Queremal) y a estaciones de policía en el departamento. La Fuerza Pública, tras estas acciones, tuvo que retirar los puestos de policía en varios corregimientos, especialmente en las zonas montañosas, lo cual permitió a las FARC-EP acentuar su control en las zonas rurales del territorio (Defensoría del Pueblo, 2011, p.23).

Las FARC-EP seguían el modelo de guerra popular prolongada, una teoría que pretendía una evolución de la ofensiva guerrillera en tres etapas: i) la guerra de guerrillas; ii) la guerra de movimientos; y iii) la guerra de posiciones. En el momento en que la guerrilla empezaba a tener suficientes elementos para entrar en la tercera fase, el Gobierno decidió establecer una nueva estrategia de desarticulación de las guerrillas a través de ataques a sus zonas de influencia (Echandía, 2015). En el segundo semestre de 2002, las Fuerzas Especiales del Ejército ingresaron al Valle del Cauca, lo cual debilitó el dominio de las FARC-EP en el departamento, especialmente en la parte alta de Tuluá y la cordillera central (Defensoría del Pueblo, 2011, p.23).

Esta nueva amenaza se implementó a finales del gobierno de Pastrana y se fortaleció durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Con la bandera “mano firme, corazón grande”, se instauró una política de seguridad caracterizada por una acción militar importante, intentando mantener un diálogo abierto con los grupos armados que quisieran desmovilizarse. Aumentaron las financiaciones en la Fuerza Pública, gracias a la ayuda de Estados Unidos, a fin de reforzar las operaciones que pudieran ejercer un mejor control territorial. En otras palabras, se pretendía –a través de planes, programas y operaciones– derrotar el dominio de los actores armados ilegales y recuperar el monopolio de la violencia legítima (Rodríguez, 2012, p.42).

Dentro de este objetivo el Gobierno operó el Plan de Guerra, con tres modalidades: i) contribuir con el control territorial; ii) establecer un fortalecimiento institucional a través de la fuerza y de la cooperación internacional; y iii) apoyar en la cooperación y el desarrollo. Siguiendo estos objetivos, el Gobierno instauró el Plan Colombia (2000-2005), patrocinado por EEUU, supuestamente para fortalecer una política anti-narcóticos y de mantener la seguridad (Rodríguez, 2012, p.42), unificando la guerra contrainsurgente y la lucha contra el narcotráfico.

Además, a fin de retomar el control de las zonas disputadas por los grupos criminales del narcotráfico y para dismantelar el Cartel del Norte del Valle, se creó el Bloque de Búsqueda de la Policía en 2004. En ese momento, controlar el narcotráfico en el Valle del Cauca era uno de los retos más consecuentes del Gobierno ya que en un principio el negocio se había desarrollado por el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle, pero después involucró un número indeterminado de micro-carteles (Defensoría del Pueblo, 2011, p.24).

Cabe señalar que a partir de las condiciones del conflicto en los años noventa –en las que las FARC-EP tenían un control territorial predominante– las operaciones militares se vieron obligadas a desarrollar otras capacidades específicas, junto con las Fuerzas Militares estadounidenses y de sus países aliados, a fin de incursionar en contextos irregulares propios de las guerrillas. Luego, siguiendo la lógica de la Seguridad Democrática y en el marco de la agenda de seguridad global, el fin de la Fuerza Pública se orientó hacia lograr una victoria militar a través de un modelo que combinaba las formas convencionales de confrontación militar con otras formas irregulares e híbridas, encaminadas a destruir o desarticular las estructuras guerrilleras (Beltrán, 2011, p.34).

En el suroccidente colombiano las acciones militares de la Fuerza Pública son coordinadas por el Comando Conjunto del Pacífico, el cual representa la suma de la Tercera División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate N°.3. Este Comando estaba al mando del general Justo Eliseo Peña Sánchez (Peña, 2011, p.226).

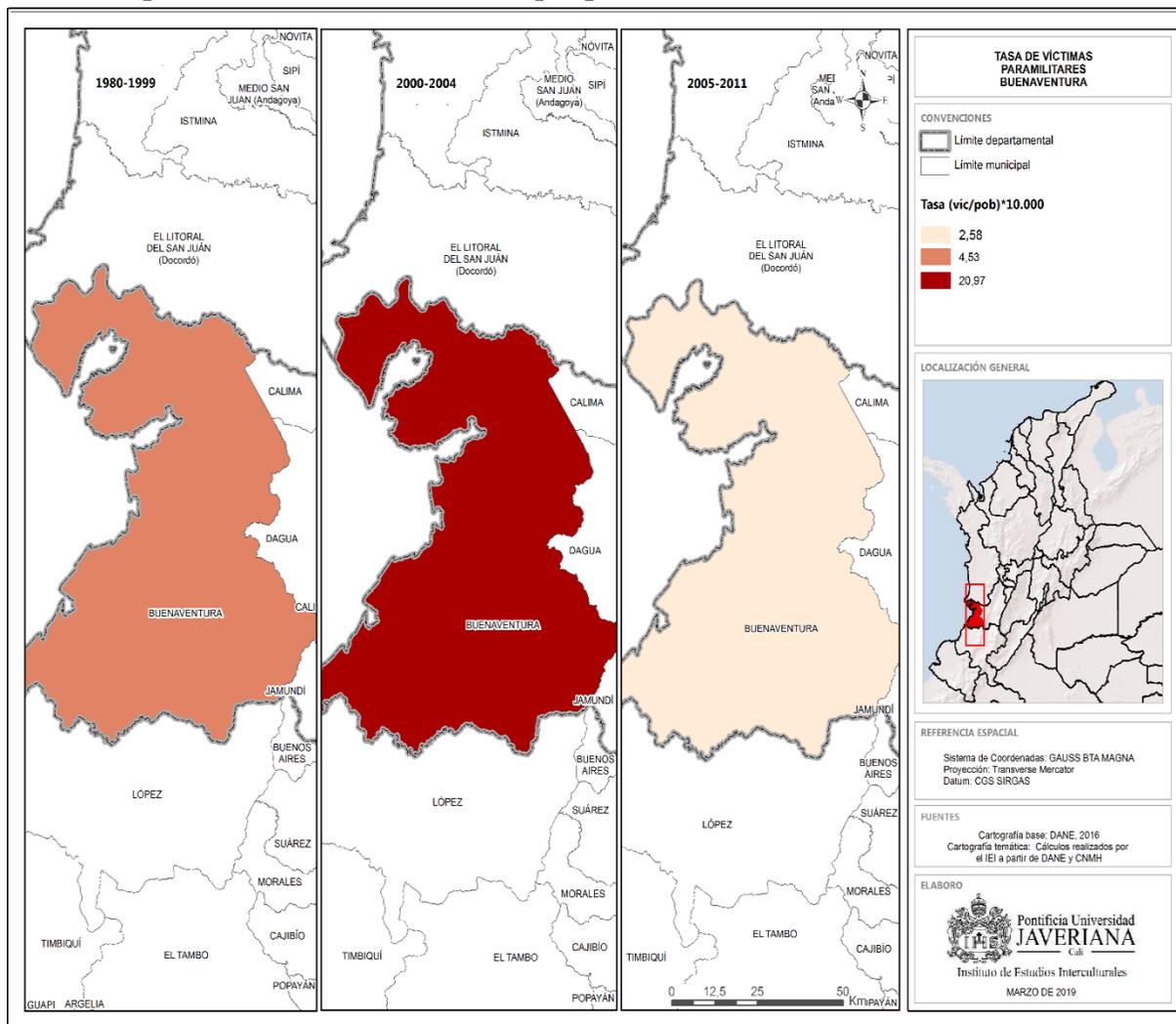
Finalmente, desde el primer gobierno de Uribe, el Estado logró implementar una superioridad militar, impidiendo a las FARC-EP cumplir con su plan estratégico acordado en los años ochenta. La antigua fortaleza de despliegue y dispersión territorial de las FARC-EP se convirtió en su mayor debilidad debido a la pérdida de comando, control y comunicaciones (Echandía, 2015, p.8). Según A. Beltrán,

La guerrilla y el establecimiento se cruzaron en el camino, la primera tomó la decisión de marchar hacia la guerra de movimientos y hacia la construcción de ejército, la segunda, tomó la decisión de marchar hacia la irregularización de la guerra y la conformación de unidades de combate en red con

blancos definidos de alto impacto, soportadas en recursos tecnológicos de punta y apoyados por fuerzas convencionales de combate (Beltrán, 2011, p. 38).

Durante todo el periodo paramilitar (2000-2004), la tasa de víctimas ha sido la más elevada del conflicto en Buenaventura (20,97 por 10.000 habitantes), como lo indica el Mapa 3.

**Mapa 3. Tasa de víctimas causadas por paramilitares en Buenaventura 1980-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

En el mismo sentido, este periodo presentó un promedio de 245 víctimas por año y los grupos paramilitares fueron los presuntos responsables del 52,82% del total de víctimas.

**Tabla 3. Promedio de víctimas por año en Buenaventura según periodo**

Periodo	Cantidad de años	Cantidad de víctimas	Promedio víctimas por año
1958-1979	22	9	0,41
1980-1999	20	679	33,95
2000-2004	5	1225	245,00
2005-2011	7	1082	154,57
2012-2016	5	338	67,60

Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

#### *Repliegue de las guerrillas (2000-2005)*

Como se mencionó, a partir de la Octava Conferencia las FARC-EP se habían concentrado en adquirir un mayor poder político-militar en casi la totalidad de los departamentos del país, luchando contra las instituciones del Gobierno, principalmente contra el Ejército. Asimismo, durante la década del noventa consiguieron obtener una serie de éxitos de guerra y un poder creciente gracias a sus ofensivas a puestos de policía, secuestros de alcaldes, asesinatos de combatientes, empoderamientos de guarniciones militares y haciendo prisioneros a cientos de soldados y policías. Tras la incursión de los paramilitares en la región y la ofensiva militar de la Fuerza Pública, las FARC-EP decidieron optar por una estrategia de repliegue táctico para mantener su sobrevivencia, lo que implicó trasladar las unidades armadas a las zonas rurales y fortalecer sus milicias en las ciudades importantes.

En esa época, el Frente 30 –comandado por *Mincho*<sup>24</sup> – representaba una importante fuente de ingresos para la organización guerrillera (Semana, 20 de octubre de 2011). En los años 2000, atraídos por las actividades ilícitas que se ejercían en Buenaventura, se había establecido otra estructura de las FARC-EP en Buenaventura y sus alrededores: el Bloque Móvil Arturo Ruiz (NIR, ANDI, FIP, 2011). Sin embargo, pese a accionar en una región con fuertes ingresos, las FARC-EP tuvieron que aplicar el principio de economía de fuerza para disminuir al máximo las bajas en sus filas y los costos de operación. De forma paralela, las Fuerzas Militares decidieron incrementar su financiación y esfuerzos militares para llevar a cabo ataques en todo el país.

En resumen, las FARC-EP optaron por retomar los comportamientos propios de la “guerra de guerrillas”, disminuyendo las incursiones a nivel nacional y concentrando sus fuerzas en las zonas rurales. Siguiendo esta lógica, se daba prioridad al control de corredores estratégicos, áreas con altos recursos económicos y zonas de frontera con los países vecinos (Echandía, 2015). En el caso de Buenaventura, en 2003, mientras los paramilitares se apoderaban de gran parte del casco urbano, de las carreteras Cali-Buenaventura y de algunos municipios vecinos (Dagua y Calima-Darién), las FARC-EP fortalecieron su poder en la zona rural del litoral y en la zona selvática de la cordillera occidental. También se concentraron en mantener una fuerte presencia en la cordillera central y en Los Farallones de Cali; el secuestro de doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en Cali (2002)<sup>25</sup> confirma la presencia de las FARC-EP en

<sup>24</sup> Para ese entonces *Mincho* también lideraba varias estructuras articuladas al Frente 30, como el Frente Manuel Cepeda Vargas y el Bloque Móvil Arturo Ruiz.

<sup>25</sup> Este secuestro lo cometieron las FARC-EP el 11 de abril de 2002 en Cali, con el fin de presionar un acuerdo humanitario con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Los rehenes fueron llevados hacia la zona rural de

las zonas rurales de Buenaventura, ya que ahí fueron conducidos los rehenes (Flórez y Ruiz, 2018, p.558).

Para el casco urbano, su estrategia se resumía en aplicar una resistencia activa que permitiera desgastar a las Fuerzas Militares, promoviendo el Bloque móvil Arturo Ruiz (creado en 1998) y el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas en el Cauca y en el Valle del Cauca (FIP, 2012, 37). En 2004, en Buenaventura los barrios Punta del Este, La Independencia, 6 de Enero, Oriente, Gamboa y Vista Hermosa se encontraban bajo el control de las FARC-EP; y los barrios Juan XXIII, Las Palmas, El Triunfo, Nuevo Amanecer, El Cristal, El Olímpico y Alberto Lleras se encontraban bajo el mando de los paramilitares (Defensoría del Pueblo, en CODHES, 2013).

En cuanto al ELN, antes de optar por un repliegue de sobrevivencia, en 2001 desarrolló el mayor número de acciones armadas en toda su historia. A través de sabotajes buscaban ejercer presión para obtener la desmilitarización de una zona en el sur de Bolívar, a fin de establecer un “convenio nacional” y comenzar un proceso de paz con el Gobierno. Esta propuesta generó mucha polémica a nivel de la sociedad civil, por miedo a que el ELN incursionara en las regiones donde los paramilitares los habían expulsado anteriormente. En conclusión, varios actores sociales lograron impedir la implementación de esta convención nacional, dejando sin éxito el acercamiento entre el Gobierno y el ELN. Sin embargo, mientras avanzaban las conversaciones, el ELN aprovechó para fortalecer su relación con los países vecinos, principalmente Venezuela (FIP, 2013).

Tras la ofensiva militar del ELN a nivel nacional, se nota una disminución de las acciones de esta guerrilla a partir de 2002, causada por la estrategia de los gobiernos de Pastrana y Uribe para desarticular las guerrillas a través de ataques a las zonas vitales de su financiación. La pérdida de control de las zonas de alto valor estratégico (desde los años 2000) y la creciente capacidad de combate de las FF.MM contra los grupos insurgentes (a partir de 2003), hicieron que las estructuras del ELN que lograron sobrevivir se replegaran y buscaran apoyo en otros grupos. Por último, para no seguir perdiendo poder militar, las FARC-EP y el ELN deciden poner fin a sus enfrentamientos entre ellos mismos. Sin que fuera contradictorio con el acuerdo que tenía con las FARC-EP, el ELN decidió mantener una relación con las bandas asociadas al narcotráfico del Chocó, permitiéndoles utilizar los corredores y participar en otras actividades ilegales generadoras de recursos (FIP, 2013).

En relación con lo mencionado acerca de los ataques de paramilitares contra las guerrillas y la estrategia de la Fuerza Pública para menguar su capacidad, el periodo 2000-2004 es el que presenta el promedio más alto de combatientes de guerrillas asesinados por año, como lo muestra la tabla 4.

---

Buenaventura. En 2007 se enunció en un comunicado que once de ellos habían muerto en un enfrentamiento entre las FARC-EP y un grupo armado no identificado.

**Tabla 4. Promedio de combatientes de guerrillas asesinados en Buenaventura por año según periodo**

<b>Periodo</b>	<b>Promedio</b>
1958-1979	0
1980-1999	0,40
2000-2004	2,40
2005-2011	1,29
2012-2016	1,00

Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos de CNMH (2019)

#### *Desmovilización del Bloque Calima (2004)*

Después de un periodo de violencia difundida en el municipio, se inició un proceso de desmovilización de los diferentes bloques de las AUC. Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron en 2002 y la desmovilización inició en 2004 hasta desaparecer como grupo armado en 2005. La desmovilización del Bloque Calima aconteció el 18 de diciembre de 2004 en el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), donde 564 personas comandadas por *HH* se unieron al proceso de Justicia y Paz. De estos, 80 regresaron a Buenaventura (CNMH, 2015, p.89-96). Sin embargo, dado que la cifra de desmovilizados del Bloque Calima no coincidía con la suma de los integrantes del Bloque, se constató que varios se desmovilizaron con otras estructuras –por ejemplo, el Héroes del Chocó– y que algunos nunca lo hicieron (CNMH, 2018, p. 453).

Según algunos desmovilizados, el proceso de desmovilización de los paramilitares se hizo a través de negociaciones con el Estado Mayor de las AUC y el Gobierno nacional, sin consultar previamente a los combatientes si estaban de acuerdo con esta decisión (CNMH, 2018, 454). Por lo tanto, gran parte de los desmovilizados decidieron unirse a otros grupos armados, a bandas criminales (Bacrim) o seguir con otras lógicas de delincuencia en el municipio.

#### **2005-2011: posdesmovilización de las AUC**

Después de la desmovilización del Bloque Calima, los actores armados aún presentes en la región intentaron copar los territorios antiguamente controlados por los paramilitares, reorganización que implicó estrategias de control territorial que respondían a los intereses económicos y políticos de cada grupo. Esto en un contexto donde continuaba la etapa de disminución de oportunidades de empleo iniciada en el año 2000 con la privatización del puerto, lo que siguió teniendo fuertes repercusiones para la población bonaverense, a pesar del peso que tenía la ciudad para el país. A través de las Sociedad Portuaria Regional se movilizaron en 2005, 17,4 millones de toneladas, de las cuales Buenaventura participó con el 44%, equivalentes a más de 7,5 millones de toneladas de carga (DANE, 2005).

Anteriormente, las dificultades del desarrollo del puerto para responder al alza de sus importaciones y exportaciones, estaban ligadas principalmente al deficiente estado de las carreteras, que impedía un transporte fluido de las mercancías. A estas dificultades llegaron a sumarse otras: i) el puerto empezó a tener problemas de capacidad por el incremento en la cantidad de barcos que llegaban y por la imposibilidad de recibir barcos de un mayor tamaño; ii) alcanzó el límite en su capacidad de almacenamiento; iii) había una restringida movilización de carga desde y hacia Buenaventura a causa de los constantes derrumbes en la carretera y porque la

alternativa férrea implicaba el doble de tiempo (Pérez, 2008); iv) la participación del PIB de Buenaventura en el Valle del Cauca y en Colombia disminuyó, pasando de 4.207 miles de millones en 2009 a 1.903 miles de millones en 2013, y de participar de 8,2% del PIB del Valle del Cauca en 2009 a 2,9% en 2013 (Cámara de Comercio, 2013, p.225)

Para 2005 el municipio de Buenaventura tenía 328.794 habitantes, de los cuales 89,1% vivían en la cabecera del municipio y 10,9% en el resto (DANE, 2005).

Cabe señalar que Buenaventura es el segundo municipio más poblado del Valle del Cauca, después de Cali, pese a éste ser el más grande en extensión (30% del departamento). Desde 1964 hasta la actualidad, la población total del municipio se ha multiplicado por cuatro, a diferencia de la población del país que se ha multiplicado por dos (DNP, 2015). Este fuerte crecimiento demográfico en Buenaventura se puede explicar por el desarrollo económico que tuvo la ciudad, en gran parte debido al puerto, que atrajo muchos migrantes y también por una tasa de natalidad significativa (15,11%) (DANE, 2005).

Al igual que en las décadas anteriores, el amplio crecimiento de la población sigue estando acompañado de un fenómeno de urbanización –que hace de Buenaventura la tercera ciudad con mayor densidad poblacional en el país<sup>26</sup>– en el que prevalece una lógica de inclusión y exclusión (Jiménez y Delgado, 2007). Por un lado, el municipio ha sido proveedor de recursos naturales y económicos (actividad portuaria, maderera y minera) y por otro lado la población ha estado excluida del imaginario dominante de Nación y del desarrollo socio-económico. En consecuencia, existen prejuicios y formas de discriminación hacia quienes habitan la costa del Pacífico. La exclusión de la población en el desarrollo económico nacional se ilustra, en parte, en los indicadores socio-demográficos y de acceso a los servicios públicos. A partir del censo 2005 del DANE, el DNP calcula que Buenaventura tiene una incidencia de pobreza multidimensional (IPM<sup>27</sup>) de 66,53%: 63,6% en zona urbana y de 91,6% en zona rural. Por otro lado, siguiendo los criterios del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI<sup>28</sup>) 35,47% de la población se encuentra en condición de pobreza.

En cuanto a las tasas de analfabetismo, en Buenaventura el 9,7% de la población de 5 años y más no sabe leer y escribir y el 9,2% de quienes tienen 15 años y más están en la misma situación (DANE, 2005). Respecto al acceso a los servicios públicos básicos, según los datos del censo de 2005, las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura han mejorado con los años. El 89,97% de las viviendas tiene energía eléctrica, 61,12% tiene alcantarillado y 77,03% tiene acueducto (DANE, 2005).

---

<sup>26</sup> Según los datos registrados en el Atlas de Expansión Urbana publicado por el DNP (2015), la densidad de la huella Urbana (personas/hectáreas) en Buenaventura es de 165 personas por hectárea.

<sup>27</sup> Cálculo DNP- SPSVC con datos del censo 2005. El índice de pobreza multidimensional (IPM) desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación para Colombia tiene en cuenta quince variables de cinco dimensiones: las condiciones educativas del hogar, las condiciones de la niñez y juventud, el trabajo, la salud y el acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Según el IPM Colombia, una persona es considerada en condición de pobreza multidimensional si tiene carencias en por lo menos 33,3% de las variables seleccionadas.

<sup>28</sup> El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) está compuesto por cinco dimensiones en relación con las condiciones de vida de los hogares: viviendas inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con hacinamiento, hogares con niños/as en edad escolar que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica. Un hogar es considerado como pobre si presenta privación de al menos una de estas dimensiones y si presenta privación de al menos dos dimensiones, es considerado como un hogar en miseria.

A fin de incrementar las inversiones en el municipio de Buenaventura, el Acto legislativo 02 de 2007 elevó el estatus jurídico del municipio de Buenaventura a Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Cabe recordar que ha habido en la historia un énfasis en el desarrollo del puerto y de su logística, que no se acompaña de un desarrollo general del territorio (la ciudad y el municipio) donde está situado el puerto. Además de la falta de infraestructura y el acceso limitado a servicios públicos, en Buenaventura hay una escasa gobernabilidad y constantes dinámicas de corrupción que han causado una gran inestabilidad política. Varios alcaldes han sido destituidos de sus cargos e incluso capturados por delitos contra el patrimonio público, y las cifras de fraudes, irregularidades y poca transparencia en Buenaventura son elevadas (Varela, Martínez, Delgado, 2009).

El escenario y las dinámicas de Buenaventura presentan retos considerables para los gobiernos locales en cuanto a la coordinación de políticas públicas. Según Varela, Martínez y Delgado (2009), los roles de estos gobernantes para una gobernanza equilibrada están relacionados con los siguientes temas: la relación entre poblaciones, territorios, economía, logística e infraestructura urbana; la responsabilidad política por parte de los gobiernos locales; la coordinación de políticas y la articulación de múltiples actores; y por último, la garantía de los derechos humanos y el acceso a oportunidades.

La idea de fortalecer el estatus jurídico de Buenaventura de Distrito Especial tiene algunas ventajas, en su mayoría de tipo fiscal, pues los distritos de Colombia tienen un tratamiento prioritario y complementario respecto a las transferencias de recursos asignadas por la nación a través del Sistema General de Participaciones. Además, tienen más oportunidades de desarrollo, de configuración de autoridades, de subdivisión de territorios para una mejor administración a fin de modernizar la gestión pública y democratizar el municipio (Varela, Martínez, Delgado, 2009). Finalmente, el mejoramiento de las capacidades fiscales del municipio pretende un mayor desarrollo social, económico y político. Sin embargo, esto es casi imposible si persisten las prácticas de evasión de impuestos, corrupción y clientelismo.

Es en este contexto general en que se desarrolló la reconfiguración del conflicto armado en Buenaventura, posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares. A continuación se describe este proceso.

#### *Grupos posdesmovilización*

En el departamento del Valle coexistían dos bandas narcoparamilitares mientras las AUC aún estaban activas: Los Rastrojos y Los Machos. Estas, en sus orígenes, incursionaban principalmente en litoral del Pacífico. La primera fue creada en 2002 por Wilber Varela, alias *Jabón*, para pelear contra el ejército privado de su rival Diego Montoya, *Don Diego* (Los Machos) por el control del Cartel del Norte del Valle. Los Rastrojos intentaron participar en las negociaciones de paz entre los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, cambiando su nombre a Rondas Campesinas Populares (RCP); lo mismo hicieron Los Machos, que pasaron a denominarse Autodefensas Campesinas del Norte del Valle. Sin embargo, el Gobierno firmó el acuerdo de paz en 2004 con los paramilitares sin permitir la participación de las RCP (Insight Crime, 2016).

En la ciudad de Buenaventura ya hacían presencia bandas delincuenciales locales desde 1984. Estas estructuras criminales aprovechaban los bloqueos en la movilidad social (hasta antes de la privatización del puerto) para ofrecer mecanismos ilegales que le permitieron a algunos bonaerenses un ascenso social acelerado. Gracias a eso, cumplieron con sus objetivos de financiación a través de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el microtráfico, extorsiones, peajes, control al comercio local, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, lavado de activos y establecimiento de negocios conexos al circuito económico portuario (CNMH, 2015).

En 2004, cuando las AUC entraron en el proceso de desmovilización, algunas bandas delincuenciales hicieron acuerdos con actores económicos legales e ilegales para responder a la demanda de establecer seguridad y para asegurar rutas de embarques hacia Buenaventura y en el Bajo San Juan. Asimismo, surgieron las bandas criminales posdesmovilización de los paramilitares que se expandían con el objetivo que recuperar el negocio de cultivos de uso ilícito dejado por los antiguos grupos armados y seguir con algunas de sus aspiraciones (CNMH, 2018b). Entre estas bandas, las más fuertes eran: Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca, El Clan Isaza, y el Clan del Golfo<sup>29</sup>, con un radio de acción repartido en varios departamentos del país (Pacifista, 25 de julio de 2017).

Las antiguas estructuras criminales provenientes del Cartel del Norte del Valle, en particular Los Rastrojos, modificaron su estructura con el fin de flexibilizar las jerarquías, establecer alianzas con otros grupos armados ilegales y administrar a través de la fuerza y de las armas varios territorios. La adaptación y transformación en el mando de Los Rastrojos y de Los Machos tras la desmovilización de las AUC, les permitieron replicar la ideología contrainsurgente de los paramilitares, entrar en los circuitos económicos (legales e ilegales) e influir en la política y en los recursos locales y regionales (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 28).

Como se mencionó anteriormente, el contexto en el que surgieron las Bacrim en el Pacífico centro se caracterizó por un alto índice de desempleo. Desde que las actividades portuarias dejaron de generar recursos y empleos suficientes para la población urbana, se intentaron impulsar actividades económicas agropecuarias, de servicios, comercio, industria y turismo. Sin embargo, éstas tampoco generaron suficientes empleos para la región, con una tasa de desempleo que alcanzó el 29% en 2003 (CONPES 3410, 2006:5), lo que sumado a la juventud de la población –el 47,82% de la población tenía menos de 19 años– explica el fácil reclutamiento de jóvenes y la imagen negativa de la gobernabilidad social y política del municipio (Varela, Martínez, Delgado, 2009).

Por otro lado, la desmovilización de las AUC se llevó a cabo en un contexto de expansión del narcotráfico en el que llegaron nuevos actores, además de los paramilitares, a sembrar coca en el territorio. El Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC-EP, por ejemplo, se estableció en la región por esa razón, atraído por las actividades relacionadas con el cultivo de coca y la manufactura de

---

<sup>29</sup> También llamados Los Urabeños o Clan Úsuga. El Clan del Golfo hace parte de las bandas criminales que más actuaron (y siguen actuando) en el Valle del Cauca y en la región del Pacífico centro. También se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y es considerada un grupo criminal mixto dotado de una estructura militar que ha ido creciendo desde 2008, llegando a contar con 1.900 integrantes y teniendo presencia en 107 municipios (FIP, 2017).

la cocaína (NIR, ANDI, FIP, 2011). Además de grupos armados ilegales, tras las fumigaciones y erradicaciones adelantadas en la Orinoquía y la Amazonía, llegaron actores del narcotráfico y campesinos buscando áreas ambientalmente óptimas para el cultivo. La expansión de estos cultivos se concentró en las llanuras de los ríos del Pacífico y en la región de piedemonte, en el eje de la antigua vía Dagua-Buenaventura. A partir de 2006 se hizo evidente el aumento de los sembrados de coca en el Pacífico centro, hasta llegar a sus niveles más altos entre 2007 y 2008. Finalmente, dada su mayor implicación en la producción de coca, la región no vio disminuir los enfrentamientos entre actores armados legales e ilegales por el control del territorio (Defensoría del Pueblo, 2011, p.24). En el año 2008 el puerto vivió un proceso de militarización denominado “Operación Orión”, que produjo un aumento en la victimización, especialmente en lo relacionado con amenazas y asesinatos a líderes de organizaciones sociales y de víctimas.

La disputa territorial en esta época, principalmente en la parte urbana de Buenaventura, generó grandes niveles de violencia. Las formas utilizadas por las Bacrim estaban inspiradas en los paramilitares desmovilizados, particularmente en las AUC, con prácticas de descuartizamiento que posteriormente, en 2014, serían denunciadas públicamente.

#### *Control territorial en alternancia en los barrios de Buenaventura*

En medio del conflicto armado, el control territorial de los barrios de Buenaventura presenta al menos dos aspectos importantes que se describen a continuación: el enfrentamiento entre grupos armados, especialmente entre 2005 y 2010, y la entrada oficial de La Empresa en 2009.

Con la llegada de los paramilitares a la región en 1999 y la ofensiva creciente de la Fuerza Pública contra las guerrillas –que generó cierta superioridad del Estado desde 2003–, éstas fueron obligadas a replegarse y a disminuir sus incursiones militares de alto esfuerzo. El repliegue táctico de las FARC-EP en el Pacífico centro implicó el traslado de las unidades armadas a las zonas rurales y la creación de milicias estables en la ciudad. Según Medina (2011) el Frente 30 incursionaba en el sur del Chocó con la intención de avanzar hacia el norte del litoral del Pacífico.

En el casco urbano de Buenaventura, cada barrio fue ocupado por un actor armado diferente, dejando a la población entre el respaldo de algún grupo y el miedo de ser atacada por otro. Se establecieron en la ciudad “fronteras invisibles” entre barrios y calles de un mismo barrio que limitaban la libertad de circulación de la población. Además, los atentados con explosivos tomaron fuerza en este periodo, aumentando los niveles de desplazamiento intraurbano.

Hasta los años 2006-2007, gracias a sus frentes urbanos y a la decisión de traer combatientes mejor formados y especializados, las FARC-EP obtuvieron control territorial de la parte continental de la ciudad de Buenaventura y de algunos barrios estratégicos de bajamar, principalmente en la zona insular. Para el 2005 tenían influencia en los siguientes barrios: Punta del Este, La Inmaculada (comuna 5<sup>30</sup>), Antonio Nariño (comuna 11), un sector del barrio Lleras (comuna 3), Nayita (comuna 1), El Cambio, Alfonso López (comuna 12) y Gamboa (comuna 9)<sup>31</sup>. El propósito de la presencia miliciana en estos barrios era consolidar bases de apoyo y fortalecer su aparato militar realizando un trabajo político con sus habitantes, reclutamiento

---

<sup>30</sup> La comuna 5 es estratégica porque tiene acceso al mar hacia el norte y hacia el sur. Ahí se está implementando el megaproyecto de ampliación del puerto (TCBUEN).

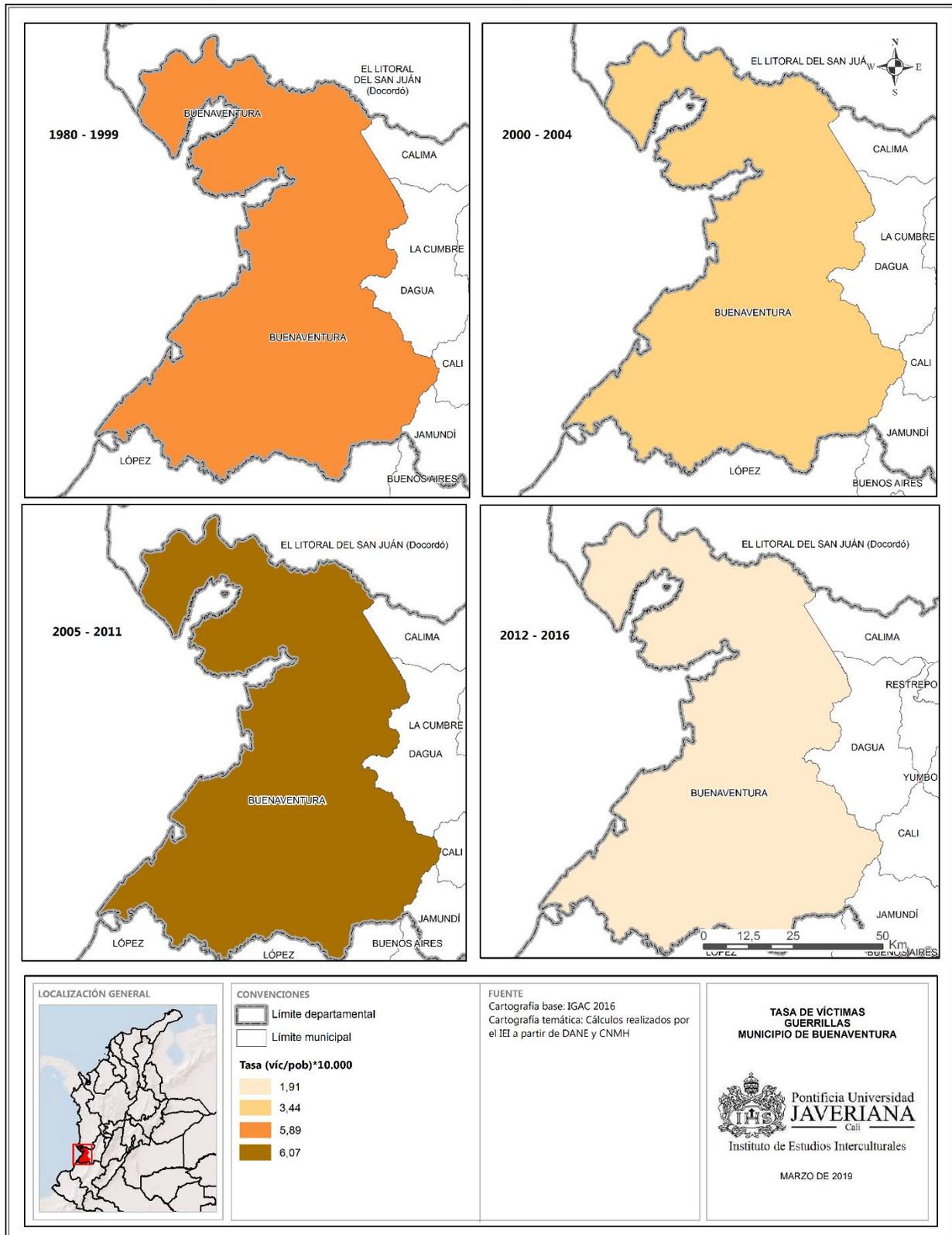
<sup>31</sup> Para saber más sobre la importancia estratégica de cada barrio revisar CODHES, 2013.

forzado y patrullajes nocturnos (Defensoría del pueblo, en CODHES, 2013, p.60). La intención de controlar los barrios de la parte continental –principalmente la comuna 12– era mantener una presencia en los barrios cercanos a la zona rural y controlar la vía Cabal Pombo.

A su vez, los grupos posdesmovilización mantenían el control en los siguientes barrios: El Cristal (comuna 8), Las Palmas (comuna 12), Cristóbal Colón (comuna 11), Juan XXIII, San Luis (comuna 7), Viento Libre sur (comuna 4) y R9 (comuna 9) (Defensoría del pueblo, en CODHES, 2013, p.60). Debido a la reorganización territorial durante el periodo de posdesmovilización, se presentaron múltiples enfrentamientos entre los actores armados presentes en la ciudad, los cuales empezaron en los barrios de bajamar y luego se trasladaron en los barrios del continente (FIP, 2014), generando altos índices de asesinatos selectivos.

Como se observa en el Mapa 4, durante este periodo, las FARC-EP alcanzaron la mayor tasa de víctimas (6,07 por 10.000 habitantes), principalmente debido a la disputa territorial de la que participaban.

**Mapa 4. Tasa de víctimas causadas por las FARC-EP 1980-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

En el marco de estos enfrentamientos, que causaron miles de víctimas, las bandas criminales consiguieron desbancar a las FARC-EP (FIP, 2014). Dado que uno de los intereses de los grupos posdesmovilización era recuperar el control de los negocios ilícitos dejados por el Bloque Calima, la mayoría de hostigamientos, desplazamientos forzados y amenazas ocurrían en las zonas de intereses económicos importantes, es decir en los barrios donde se concentraban las actividades portuarias.

Durante los años 2007 y 2008 las FARC-EP sufrieron un debilitamiento considerable, en primer lugar, por la cantidad de asesinatos de sus milicianos a manos de las Bacrim; y segundo, por la captura de los principales mandos del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas. En este contexto, era común que los combatientes se unieran a bandas criminales, se entregaran a las autoridades o se dedicaran a cometer actos delictivos (FIP, 2014).

Hacia 2009<sup>32</sup> incursionó en la ciudad la banda criminal “La Empresa”<sup>33</sup>, vinculada a Los Rastrojos, con el objetivo de evitar que las FARC-EP recuperaran espacios. De hecho, se presentaron ante la comunidad como una empresa que impediría a las FARC-EP extorsionar (FIP, 2014). Al mismo tiempo, las FARC-EP aprovecharon la disminución de los ataques por parte de las Fuerzas Militares para aumentar sus acciones en el país a través del llamado Plan Renacer. Sin embargo, pese a que las FARC-EP –y después el ELN– habían aumentado sus incursiones durante el primer gobierno de Santos, se pudieron ver las limitaciones militares que les había dejado la ofensiva militar del gobierno de Uribe. Las formas de violencia utilizadas (minas y francotiradores) desde 2010 mostraban cierta irregularidad en la organización y exhibían una actitud de repliegue y defensa en vez de una estructura fortalecida y reactivada (Echandía, 2015). Lo mismo aconteció con el ELN, pese a que a partir de 2010 se nota un repunte del número de integrantes y de acciones armadas, pues la capacidad ofensiva no consiguió representar un esfuerzo militar significativo (FIP, 2013).

Además de lo ya mencionado, el propósito principal de La Empresa, además de una supuesta lucha antissubversiva, era el narcotráfico: en poco tiempo lograron ejercer el control de todas las rutas de salida hacia Panamá y Centroamérica, se apropiaron de las rentas ilegales de Buenaventura y se familiarizaron con la criminalidad del puerto (extorsiones a mineros y comerciantes, secuestros y venta de drogas en los barrios). Consiguieron obtener un dominio territorial de todos los barrios de la ciudad, reprimiendo a cualquier persona que no se alineara con el grupo, y sembraron el terror a través de actos de violencia inspirados en los paramilitares (masacres, torturas, desapariciones y desmembramientos). Durante la primera fase de su dominio (2009) La Empresa trabajaba junto a Los Rastrojos. Gracias a este apoyo financiero y militar, tal año representó el de mayor poderío de La Empresa (FIP, 2014).

---

<sup>32</sup> El año preciso de entrada La Empresa aún no ha sido aclarado. Se notaron incursiones desde 2009, pero algunas fuentes indican que este proceso empezó en 2010, cuando se hizo un cobro generalizado de extorsiones a toda la población. El dinero que lograba recoger el grupo se sumaba a un fondo común y se repartía al final de la semana entre los miembros de la organización. El monto destinado a cada integrante dependía de su rango (FIP, 2014).

<sup>33</sup> “Diferentes fuentes señalan que La Empresa es una oficina de cobro que provee servicios a sectores sociales y a grupos criminales de mayor envergadura y fue creada en el puerto reclutando exparamilitares, exguerrilleros y miembros de bandas delincuenciales. Hasta 2012 se supo que esta organización alcanzó a tener 150 miembros. Su origen al parecer tuvo que ver con una alianza entre comerciantes y narcotraficantes” (CNMH, 2015, p. 203-204).

A finales de 2009, el Frente 30 de las FARC-EP intentó entrar en el casco urbano con una nueva estrategia, que consistía en ubicar a los líderes de los grupos posdesmovilización en cada zona para luego asesinarlos. Asimismo, intentaron montar milicias que fueran capaces de enfrentarse con la agrupación enemiga. Cuando las FARC-EP empezaron a identificar a las cabecillas de La Empresa, la banda criminal se les adelantó y asesinó a los combatientes de las FARC-EP (FIP, 2014). Las FARC-EP siguieron con los ataques durante el año 2010. Por ejemplo, el 24 de marzo 2010, el Frente Manuel Cepeda Vargas hizo explotar un carro bomba en el puerto de Buenaventura, dejando 9 personas muertas, cerca de 50 heridos y pérdidas materiales importantes (El Colombiano, 24 de marzo de 2010). Finalmente, tras varios ataques como estos, las redes de apoyo del Frente 30 fueron debilitadas. El comandante del Frente, *Mincho*, fue abatido en 2011 y alias *Fredy*<sup>34</sup>, quién lo sucedió, decidió replegarse hacia las zonas rurales del sur del municipio, cobrando impuestos de paso a las embarcaciones y extorsionando a los mineros (lo que representaba el 10% de sus ganancias) (FIP, 2014). En este contexto, en 2012 las acciones de alto esfuerzo militar de las FARC-EP llegaron a su nivel más bajo, prevaleciendo acciones como explosivos, quema de vehículos y sabotajes contra la infraestructura –lo que representó el 60% de su actividad armada en dicho año–, que se concentraron en zonas rurales alejadas (Echandía, 2015).

En los años 2010 y 2011, La Empresa continuó controlando los barrios populares de Buenaventura sin tener que enfrentarse con ningún otro grupo armado o banda criminal, lo que se extendió hasta finales de 2012, cuando empezó el ascenso del Clan del Golfo.

#### *Desarrollo de megaproyectos*

Durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe (2006-2010) se establece la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, con el objetivo de mantener la presencia del Estado en el territorio recuperado a través de megaproyectos. Cabe señalar que la lucha contrainsurgente en Buenaventura, un territorio sumamente importante para la inversión extranjera y el capital privado, también era estratégica para el Gobierno para lograr la confianza inversionista. Sin embargo, aquel plan del Estado no logró tener éxito en los departamentos del suroccidente, entre otras cosas porque las estructuras guerrilleras y criminales no estaban debilitadas por completo; de hecho, algunos actores armados habían logrado fortalecerse (Peña, 2011, p.225).

Consciente de su carácter atractivo para la inversión extranjera, el Gobierno presentó un marcado interés por modernizar el puerto de Buenaventura. Los hechos victimizantes de la ciudad también están relacionados con esa intención pública de desarrollar megaproyectos en diferentes barrios de Buenaventura –y particularmente en Isla Cascajal– ya que esto ha implicado el desalojo de una parte de la población. Los grandes proyectos promovidos en Buenaventura durante el gobierno de Uribe que necesitaban territorio para desarrollarse eran tres: i) el Complejo Industrial y Portuario, un terminal marítimo multipropósito y una planta de abastecimiento de combustibles líquidos; ii) un puerto industrial de aguadulce con una capacidad de ubicar 700.000 contenedores anuales; iii) el Malecón de la Bahía de la Cruz, integrado por un centro internacional de negocios, un centro de convenciones, atractivos turísticos, parques, plazas, hoteles y playas (Molano, 2017).

---

<sup>34</sup> Inmediatamente fue abatido Mincho, el mando del Frente 30 lo asumió Luis Alfredo Prada Gonzáles, alias *Fredy*, pero enfermó tiempo después y en 2013 Martín Leonel Pérez Castro, alias *Richard* tomó su lugar (El País, 22 de julio de 2014).

Las zonas de bajamar en Isla Cascajal son las más vulnerables frente al desarrollo de los megaproyectos y a la violencia que estos generan. Se le ha propuesto a la población de estos barrios trasladarlos a viviendas en otros lados de la ciudad, no obstante, las familias que viven ahí se niegan a irse por varias razones de subsistencia: una parte importante depende de la pesca o recolección de moluscos; los manglares cercanos les permiten mantener sus casas en pie, cambiando las varas apenas lo necesiten; existen varios puertos clandestinos en la zona de bajamar, donde salen cargamentos de cocaína hacia altamar (Molano, 2017).

La voluntad de desalojar a las comunidades que impidan el desarrollo de estos megaproyectos coincide –aunque sea indirectamente– con la estrategia paramilitar y neoparamilitar, que entre 2000 y 2009 consistió en la deslocalización, la victimización y la usurpación de los espacios. Según Espinoza (2011), la noción de deslocalización superaría la definición propia de desplazamiento al implicar la pérdida de la conexión de las víctimas con sus bases locales y por ende la relocalización de la población desplazada. Esto crea un ciclo interminable en el que la población rural de Buenaventura es expulsada y se relocaliza en el casco urbano del municipio, luego, muchas de las personas amenazadas vuelven a desplazarse hacia los diferentes barrios de la ciudad, para finalmente salir expulsados hacia otras ciudades del país.

Este periodo tuvo un promedio de 157,57 víctimas por año, atribuidas en su mayoría (43,53%) a desconocidos y en un 19,59% a guerrillas. Los hechos victimizantes predominantes fueron los asesinatos selectivos (43,73% de los hechos del periodo) y las acciones bélicas (32,44%). En comparación con los demás periodos, este es el que registra mayor cantidad de acciones bélicas (58,86% del total registrado) y de daño a bienes (44,87%). En comparación con los demás periodos, este es el que registra el mayor promedio de agentes del Estado y de civiles asesinados (CNMH, 2019), como lo consigna la Tabla 5.

**Tabla 5. Promedio de agentes del Estado y civiles asesinados en Buenaventura por año según periodo**

Periodo	Agentes del Estado	Civiles
1958-1979	0	0,05
1980-1999	1,30	0,85
2000-2004	2,20	2,60
2005-2011	6,29	6,00
2012-2016	0,80	Sin información

Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

### **2012-2016: diálogos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP**

Durante el periodo anterior (2005-2011) las FARC-EP habían decidido replegarse hacia las zonas rurales, intentando mantener el control de algunos barrios de la ciudad de Buenaventura. No obstante, el control que tenían en la ciudad era limitado en comparación con el que habían logrado las Bacrim. Así, al comienzo de este nuevo periodo, las FARC-EP concentraban su dominio territorial en la zona rural del sur del municipio de Buenaventura, controlando la producción y las rutas de tráfico de drogas. Las Bacrim, y principalmente La Empresa (hasta 2012), mantenían una fuerte presencia en la zona urbana del municipio de Buenaventura, sobre todo en Isla Cascajal, de donde obtenían sus ingresos más importantes, gracias al puerto.

Respecto al ELN, el Frente de Guerra Suroccidental sólo registraba una presencia activa en algunos municipios de Cauca y Nariño y el Frente Occidental en algunos departamentos del Chocó. Además de la falta de presencia del ELN en el Valle del Cauca, casi la totalidad de las estructuras urbanas habían desaparecido. Sin embargo, pese a ser una guerrilla menor, se mantuvo activa y sus incursiones en el suroccidente se relacionaron principalmente con actividades de narcotráfico y de minería (FIP, 2013).

A partir de 2012, cuando empezaron los diálogos entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC-EP, las estrategias y la presencia de los actores armados en los diferentes territorios de la región se fueron transformando. Uno de los cambios principales en el contexto de negociaciones –a nivel nacional– fue la desmovilización de una parte de los combatientes del ELN. La estructura del ELN ya vivía varias complicaciones, siendo la más grande la dificultad de garantizar una cohesión interna de la organización. Por lo tanto, durante el primer trimestre del 2013 la cifra de combatientes del ELN desmovilizados alcanzó su nivel más alto (143). El mismo año, el segundo al mando del Frente de Guerra Suroccidental y comandante de la columna Lucho Quintero Giraldo, Irley Esnedis Collazos, *Tigre*, decidió entregarse al Ejército (en el Cauca) junto con 30 combatientes (FIP, 2013).

Después, desde 2016, durante el proceso agrupamiento de las FARC-EP en las entonces Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), se reconfiguraron las dinámicas que definirían la continuación del conflicto armado en Colombia.

Primero, se hicieron más visibles los legados del conflicto armado, las FARC-EP no se desmontaron por completo dado que algunas de sus estructuras se declaran en disidencia. Uno de los grupos disidentes de las FARC-EP que entró a actuar en el Pacífico, principalmente en Nariño, Cauca y eventualmente en Buenaventura, es llamado La Gente del Orden. Los otros grupos disidentes de las FARC-EP que marcaron una presencia en la región, sobre todo en el corredor del Naya, son la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Unido del Pacífico (FUP) y disidentes del Frente 29, que han entrado a fortalecer el FUP (FIP, 2017).

Segundo, continuó la transferencia o recambio de capacidades, es decir, se transfirieron las capacidades territoriales, organizacionales y económicas a otros grupos armados. Por ejemplo, durante las negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno en La Habana, hubo un reposicionamiento del ELN y el EPL en los territorios donde se encontraban los frentes de las FARC-EP. Aunque el ELN tenía debilitada su estructura militar y su influencia en el país, en el contexto de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, el ELN vivió un repunte en sus acciones con el fin de lograr también un proceso de paz con el gobierno Santos (FIP, 2013). Este repunte militar estuvo acompañado de un aumento de enfrentamientos con la Fuerza Pública, lo que tuvo un gran impacto social para la población civil (Defensoría del Pueblo, 2017).

Tercero, persistieron las trayectorias de conflicto armado y de crimen organizado en Colombia. Es decir, desde el desmonte de las autoridades guerrilleras, emergieron dinámicas de grupos que recurren a la violencia, oportunidades para vengarse (violencia oportunista) o competencias entre varios agentes, redes o actores armados (FIP, 2017). Un ejemplo de esto es el fuerte índice de violencia vivido en la ciudad de Buenaventura, que, como se mencionó, se debió en parte a los conflictos entre las bandas criminales surgidas durante el periodo de posdesmovilización.

### *Enfrentamientos en el casco urbano*

Después de su periodo de control de extorsiones y microtráfico entre 2010 y 2012, La Empresa perdió fuerza y la Bacrim que tomó el dominio de los principales barrios de la ciudad pasó a ser el Clan del Golfo. A nivel nacional, implementaron estrategias políticas con el objetivo de mostrar fuerza o de ser considerados como un actor armado con el cual el Gobierno querría negociar. Estas estrategias estuvieron fuertemente influenciadas por las de antiguos grupos armados ilegales, como el EPL (años 80), los ejércitos privados (mediados de los 90), las AUC y otros grupos posdesmovilización. La combinación de estos aprendizajes ha hecho que este grupo se convierta en una nueva amenaza en todo el país. Según la FIP, el Clan del Golfo actúa de manera indirecta en el municipio de Buenaventura, es decir que no tienen una presencia como estructura militar pero subcontratan organizaciones de menor influencia o bandas delincuenciales para que cumplan tareas específicas como extorsiones, asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia. Este grupo es principalmente financiado por el narcotráfico, la minería, la extorsión y la tala ilegal (FIP, 2017).

El fortalecimiento del Clan del Golfo en Buenaventura en este periodo estuvo facilitada por varios factores. Los Rastrojos estaban viviendo un debilitamiento por la captura de alias *Diego Rastrojo* y porque los hermanos Calle Serna fueron entregados a las autoridades estadounidenses; de prisiones de Estados Unidos empezaron a salir narcotraficantes interesados en el puerto; puesto que Los Rastrojos estaban debilitados y que originariamente apoyaban a La Empresa a nivel financiero, esta última decayó (La Patria, 15 de enero de 2013); el Clan del Golfo hizo una alianza con Los Machos –el rival de los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, que también actuaba en Buenaventura– para acabar con Los Rastrojos (Millán, 2015, p.124).

El ascenso del Clan del Golfo en la ciudad y el debilitamiento de La Empresa, conllevó a la neutralización de la última. En el corregimiento de Potedó 10 personas fueron asesinadas, la mayoría pertenecientes a La Empresa. Finalmente, el 80% de los hombres de La Empresa decidieron unirse al Clan del Golfo, que ofrecían hasta el doble de sueldo a las cabecillas de barrio de La Empresa, y si no aceptaban, los mataban (FIP, 2014). Además, los actores criminales que decidieran cambiar de grupo estaban obligados a denunciar a sus cabecillas. En este contexto, el 6 de octubre de 2012 uno de los mandos de La Empresa, alias *Ramiro*, fue asesinado (La Patria, 15 de enero de 2013).

En este contexto los niveles de homicidios en la ciudad aumentaron con fuerza entre octubre de 2012 y enero de 2013 (FIP, 2014). En octubre de 2012, en Buenaventura los conflictos por el control de los diferentes barrios de la ciudad y de las economías ilegales entre el Clan del Golfo y La Empresa se agravaron al punto de llenar de muerte y terror las calles. Durante el primer mes se presentaron 40 asesinatos, 35 balaceras, 75 desapariciones forzadas y se denunciaron casos de tortura y desmembramientos. Tras la violencia de esta nueva guerra, hubo 1.500 personas desplazadas (Verdad Abierta, 8 de noviembre de 2013). Luego, el conflicto entre el Clan del Golfo y La Empresita (los que quedaron de La Empresa) perduró durante varios meses más, generando niveles considerables de desplazamiento (Verdad Abierta, 8 de noviembre de 2013).

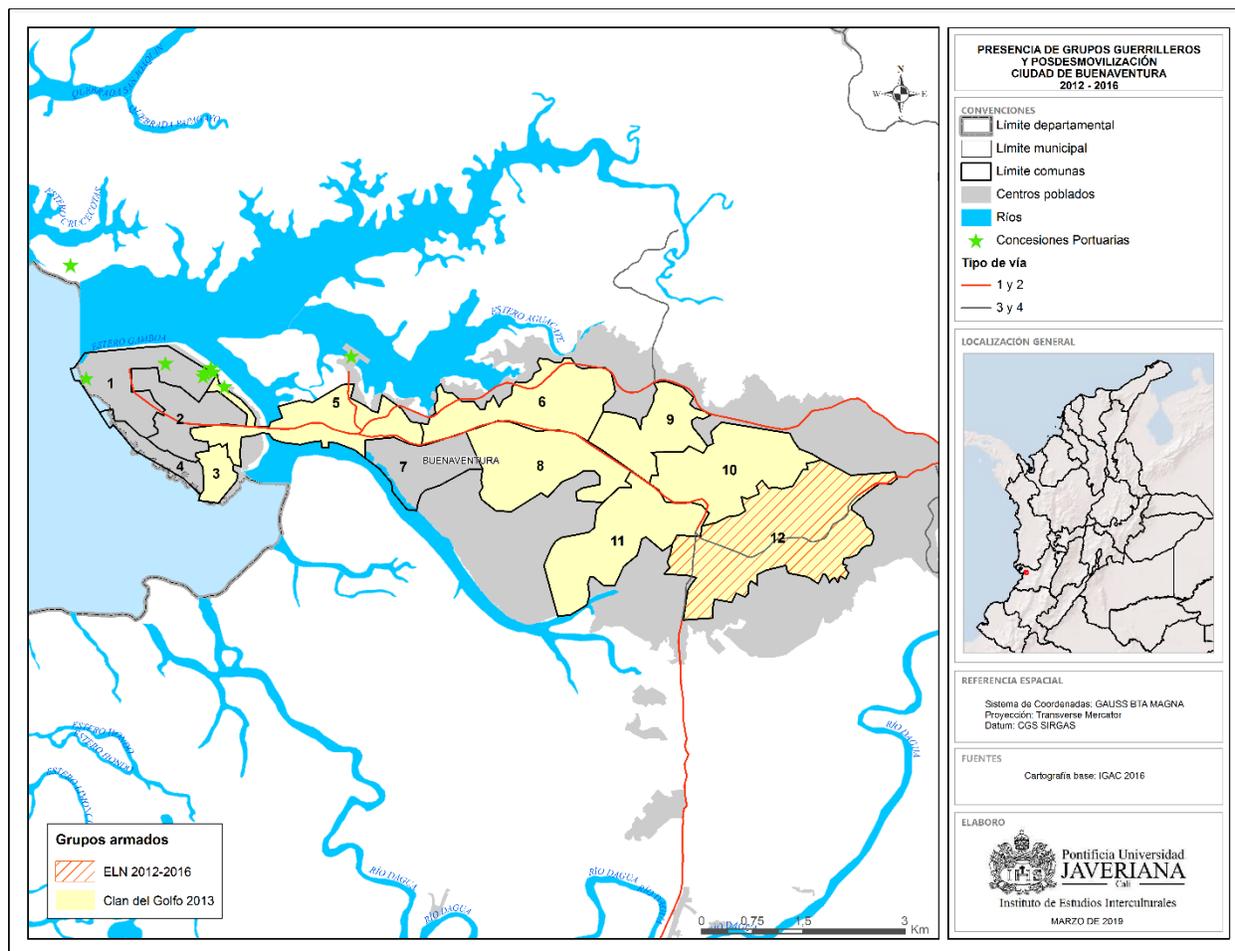
La salida de los narcotraficantes encarcelados en Estados Unidos no es de menor importancia, ya que marcó la fractura y el nacimiento de nuevas alianzas entre diferentes estructuras criminales de la región. Por ejemplo, Víctor Patiño Fómeque logró reactivarse y recuperar su dominio en el mundo criminal gracias al apoyo del Clan del Golfo. En paralelo, mantenía alianzas con

agrupaciones delictivas en Cali y Palmira. Cabe señalar que los mineros de Zaragoza (la mayoría antioqueños) también decidieron unirse al Clan del Golfo, cansados de las extorsiones de La Empresa, aceptando el trato de apoderarse de las vacunas y el tráfico de drogas en el puerto (FIP, 2014). Todo esto favoreció la incidencia del Clan del Golfo en Buenaventura.

Este reacomodamiento de las estructuras criminales en las comunas de Buenaventura generó altos índices de asesinatos selectivos, reclutamientos forzados y desplazamientos masivos. En las comunas 6, 10, 9 y 8 se generalizaron las masacres, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y homicidios. La persecución de las personas que no querían someterse al Clan del Golfo era tan contundente, que en pocos meses (hasta junio 2013) esta Bacrim consiguió dominar la mayoría del territorio urbano de Buenaventura, como lo muestra el Mapa 5. La única comuna donde no logró un control evidente es la comuna 12, donde hubo presencia del ELN y de La Empresa (FIP, 2014; Pacifista, 7 de noviembre de 2017).

A partir de noviembre de 2013, los homicidios fueron incrementando de nuevo. Hasta febrero de 2014, los exintegrantes de Los Rastrojos junto con sus aliados narcotraficantes, organizaron incursiones para intentar debilitar al Clan del Golfo. Enviando refuerzos a Buenaventura, Los Rastrojos reactivaron la llamada Empresita, que agrupaba a los antiguos integrantes de La Empresa que no se habían sometido al Clan del Golfo. En respuesta a esta nueva ofensiva, estos últimos también debieron pedir refuerzos y los enfrentamientos continuaron, principalmente en los barrios de bajamar (FIP, 2014).

### Mapa 5. Presencia de guerrillas y grupos posdesmovilización en la ciudad de Buenaventura 2012-2016



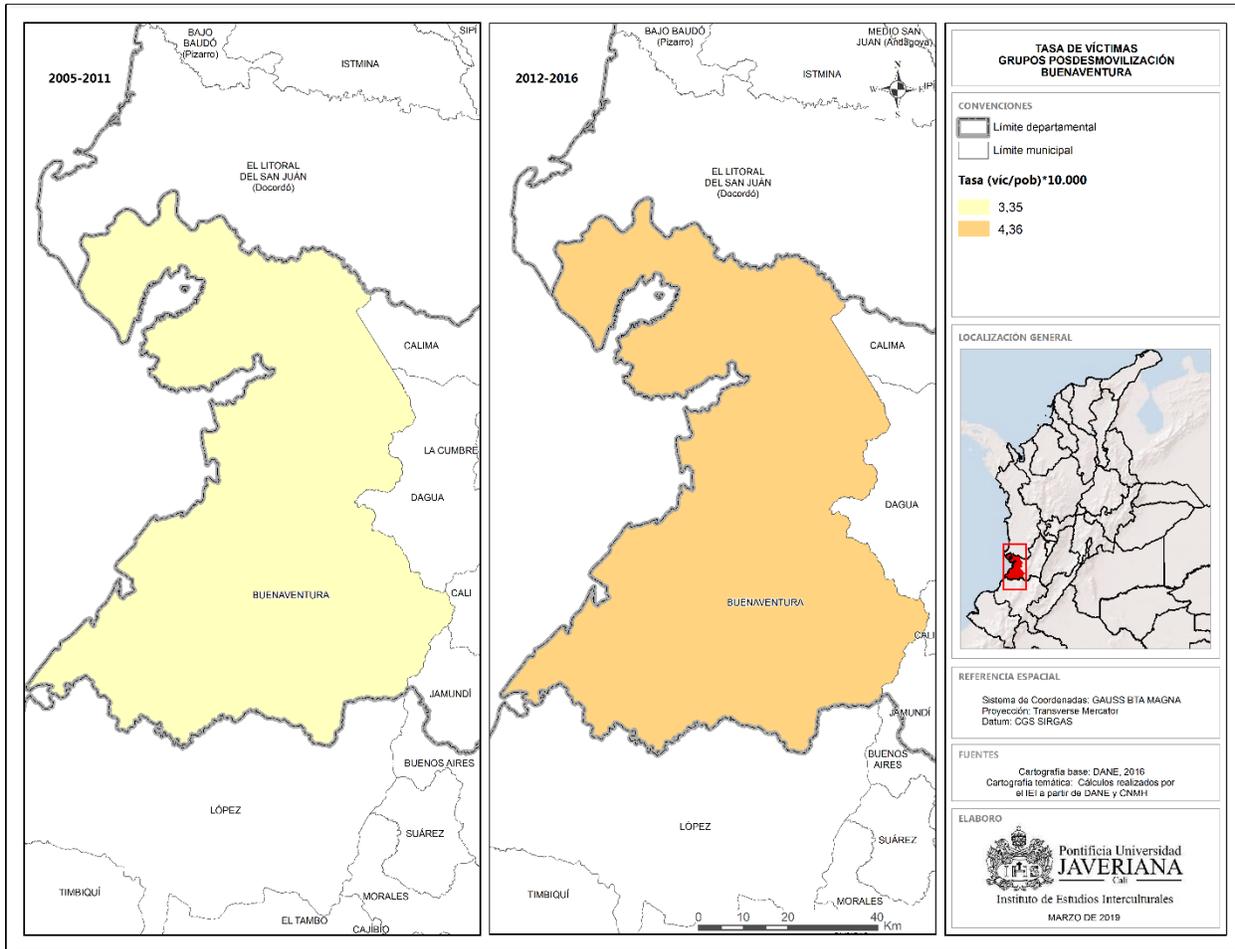
Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos de FIP (2014)<sup>35</sup> y Pacifista (7 de noviembre de 2017)<sup>36</sup>

Tras los numerosos enfrentamientos entre ellos y con otros grupos armados, los grupos posdesmovilización mantuvieron una tasa elevada de víctimas, como se observa en el Mapa 6. En el periodo posdesmovilización alcanzaron una tasa de víctimas de 3,35 y en el periodo posterior una tasa de 4,36 (por 10.000 habitantes).

<sup>35</sup> Según la FIP en el segundo semestre de 2013, había presencia de la Bacrim del Urabá en los barrios Nayita y Viento Libre (Centro), comunas 3 (barrios Alberto Lleras y López Pumarejo), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De otro lado, la presencia de La Empresa se limitaba a algunas zonas de la comuna 12, donde persistían altas cifras de homicidios.

<sup>36</sup> Según Pacifista (7 de noviembre de 2017) habría una presencia del ELN en la comuna 12.

## Mapa 6. Tasa de víctimas causadas por grupos posdesmovilización en Buenaventura 2005-2016



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

### *Movilización de los ciudadanos*

Según Molano (2017) la ciudad está enteramente militarizada excepto en los barrios controlados por los grupos neo-paramilitares o posdesmovilización. Estas bandas criminales tienen bajo su control los tres mercados públicos del puerto –llamada la zona “Galerías”– donde los pescadores y campesinos llegan a vender sus productos. Se apropiaron de los puestos de mercado y de los productos haciendo vacunas y extorsiones a los vendedores y logrando desplazarlos de los mercados. Luego, siendo los nuevos patrones, consiguen exigir precios elevados de los puestos de mercado y de los productos, siendo esta una de sus fuentes de ingresos.

La alta presencia de actores armados se ilustra también en la violencia en toda la ciudad. En 2014, la violencia presentó niveles extremos y los casos de desmembramientos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamientos forzados, y restricciones de circulación, y extorsiones fueron cada vez más visibles (HRW, 2015). El obispo Héctor Epalza –nombrado en 2004 durante el proceso de desmovilización del Bloque Calima– denunció este año, la existencia de “casas de pique”, lugares donde descuartizaban personas, conocidos en silencio por la población. Esto, sumado a denuncias sobre la corrupción de la institucionalidad local, atrajo la atención pública sobre la situación de violencia que vivía el municipio. La respuesta de las fuerzas armadas frente

a esta denuncia fue mandar tropas, militares y policías –de la misma forma como se hizo con la operación Orión en 2008–, para intentar mantener la seguridad y el control del municipio. Posteriormente, los registros de hechos victimizantes disminuyeron y los grupos criminales se hicieron más discretos, sin que eso significara su erradicación (Molano, 2017).

El 6 de marzo de 2014, después de las denuncias mencionadas, el Gobierno de Santos anunció una “intervención especial” en el municipio, que condujo a la detención en 2014 de más de 280 presuntos miembros del Clan del Golfo, de La Empresa y de las AGC. Sin embargo, entre marzo de 2014 y marzo de 2015 se encontraron restos de 16 personas, de las cuales 12 fueron encontradas después de la intervención del Estado. En total, entre enero de 2013 y marzo de 2015 se encontraron 32 cuerpos desmembrados. Desde el anuncio del presidente también se registraron 6.900 personas desplazadas de manera forzada (HRW, 2015).

En 2014 también surgieron dos grandes planes de inversión social: el Plan de Choque, que involucra la ejecución de 360.000 millones de pesos en 87 proyectos y el Plan Pacífico, respaldado por un crédito de 400 millones de dólares para 50 proyectos de impacto en Quibdó, Buenaventura, Guapi y Tumaco (Semana, 27 de mayo de 2017).

Pese al silencio predominante y al miedo de denunciar la violencia ejecutada por los grupos armados y criminales, los ciudadanos de Buenaventura empezaron movilizarse. En 2014, para marcar su descontento, treinta mil personas decidieron marchar en la ciudad. El objetivo principal de esta marcha era denunciar los actos de violencia, principalmente en las zonas portuarias: Pueblo Nuevo, Muro Yusti, Las Piedras Cantan, La Playita, Lleras, La Inmaculada y toda la comuna 11. Esta última se conoce por ser asentamiento de desplazados interurbanos o provenientes de las zonas rurales del departamento y del resto del país (Verdad Abierta, 19 de febrero de 2014).

El incumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el Gobierno en 2014, las condiciones sociales difíciles y la violencia que incrementa, conllevó en 2016 a un paro organizado por la sociedad civil para denunciar la mala gestión gubernamental, paro que duró más de once días y en el cual se presentaron múltiples situaciones de represión contra las y los manifestantes. La injusta desigualdad entre los recursos movilizados a través del puerto de Buenaventura y la exclusión y pobreza de la población es la causa del descontento de la población bonaerense (Semana, 27 de mayo de 2017).

#### *Después del Acuerdo de La Habana*

Tras varios años de diálogo entre el gobierno de Santos y las FARC-EP en La Habana, Cuba, llegaron a un acuerdo de desarme y reincorporación de la organización guerrillera en 2016, año en que se firmó el *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. En la región del Pacífico centro se desarmaron las unidades pertenecientes al Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano (BOCAC), bajo el mando de Jorge Torres Victoria, *Pablo Catatumbo*, y de José Vicente Lesmes, *Walter Mendoza*, como segundo al mando. Édgar López Gómez, *Pacho Chino*, servía a su vez como jefe del Comando Conjunto del Bloque Occidental (Verdad Abierta, s.f 2016). El desplazamiento del Frente 30 de las FARC-EP hacia la ZVTN terminó en 2017.

Desde el Acuerdo de Paz y el comienzo del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las FARC-EP, los territorios donde éstas hacían presencia quedaron con un vacío de autoridad que generó un alto nivel de incertidumbre en la población. En este contexto, grupos posdesmovilización –principalmente el Clan del Golfo– y unidades del ELN decidieron expandirse y recuperar los territorios dejados por las FARC-EP (Pacifista, 25 de julio de 2017). Se establecieron las siguientes dinámicas desde el retiro de las FARC-EP: primero, un aumento de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN; después, enfrentamientos más seguidos y violentos entre el Clan del Golfo y el ELN; finalmente, el ingreso de estos grupos armados ilegales a la economía del narcotráfico en estas regiones (Ministerio del Interior, 2017).

En la región, la presencia actual de los actores armados se divide entre la zona rural y urbana. El ELN controla la mayoría de las zonas estratégicas de la zona rural, principalmente en Litoral del San Juan, y las Bacrim controlan los diferentes barrios de la ciudad. En el marco de la lucha por el control de los territorios antes ocupados por las FARC-EP, se han producido varios enfrentamientos. El 7 de febrero 2017 se enfrentaron el ELN y la Fuerza Pública en el resguardo Chagpién Tordó de la comunidad wounaam, en Litoral del San Juan. El 19 de febrero del mismo año se presentó un combate entre las AGC y la Fuerza Pública en la comunidad afro de Carrá. Luego, el 25 de marzo en la misma comunidad, fueron asesinadas cinco personas por el ELN, una masacre que generó un gran desplazamiento hacia Docordó (El Espectador, 13 de agosto de 2017).

En medio de la reorganización territorial, los grupos armados se mueven y llegan a nuevos territorios. Por ejemplo, hay una presencia reciente del ELN y del Clan del Golfo en la región turística de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, acompañada de desplazamientos y asesinatos a líderes sociales (El País, 30 de julio de 2017).

El ELN aún está concentrado en las zonas rurales, manteniendo una presencia escasa en la ciudad. En 2016 se vieron dos banderas del ELN en la ciudad de Buenaventura, en el parque Néstor Burbano Tenorio y en el barrio Nueva Frontera. Sin embargo, esta organización guerrillera reveló su intención de entrar en el casco urbano. En consecuencia, El Clan del Golfo pretende someter a todas las pequeñas estructuras criminales que todavía no se habrían sometido a ellos con el fin de asegurar el control de la mayoría de los barrios de la ciudad. Esto ha causado nuevos enfrentamientos y desplazamientos.

La intención del Gobierno tras el Acuerdo de Paz era entrar a controlar los territorios antiguamente ocupados por las FARC-EP. No obstante, dada la presencia de los grupos armados en expansión, de las Bacrim y de los nuevos grupos disidentes, tal intención no ha logrado materializarse. Por lo tanto continúan las operaciones y planes para dismantelar las bandas criminales y grupos armados, y para esto uno de los planes del Gobierno, anunciado en 2016, es la creación de un cuerpo élite que opere en Tumaco y Buenaventura (El Espectador, 15 de noviembre de 2018; Verdad Abierta, 26 de enero de 2019).

Finalmente, cabe mencionar que siguen existiendo múltiples problemáticas en la región del Pacífico centro. Por un lado, se han identificado tres guerras en esa zona: la primera entre el Clan del Golfo y las otras estructuras criminales que no se han alineado a ellos. La segunda, entre el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial de Litoral del San Juan. La tercera, protagonizada por las disidencias de las FARC-EP en el corredor del Naya (El Espectador, 15 de

noviembre de 2018). Por otro lado, uno de los problemas más profundos tiene que ver con la recurrente victimización de las comunidades negras, indígenas y campesinas, de sus líderes y defensores de derechos humanos, quienes son blanco de asesinatos y amenazas.

El promedio de víctimas por año para el periodo 2012-2016 fue de 67,6. Los grupos posdesmovilización son los presuntos responsables en el 50,59% de los casos, seguidos de las guerrillas (22,19%). Los hechos victimizantes más relevantes para el periodo son la violencia sexual (52,37%), la desaparición forzada (16,57%) y los asesinatos selectivos (16,27%) (CNMH, 2019).

### 3.2. Hechos victimizantes más significativos

Según la base de datos del CNMH, durante el periodo 1958-2016, en Buenaventura se produjeron 3.130 casos de hechos victimizantes<sup>37</sup>, de los que 47,9% corresponden a asesinatos selectivos; 20,5% a desaparición forzada; 9,9% a acciones bélicas; y 8,7% a casos de violencia sexual. Estos casos dejaron un total de 3.333 víctimas directas, siendo los hechos con mayor cantidad de víctimas los asesinatos selectivos (49,5%), la desaparición forzada (22,7%), la violencia sexual (8,3%) y las acciones bélicas (5,5%). Aunque en cantidad de casos las masacres representan el 1,2%, en cantidad de víctimas ocupa el cuarto lugar, con 6,2%, como lo muestra la gráfica 2.

Teniendo en cuenta el total de casos en el periodo señalado, del 34,9% no se conoce el presunto responsable. El 19,3% de los casos tuvieron como responsable a un grupo paramilitar; 18% a una guerrilla; 9,8% a un grupo armado no identificado; 9,4% a un agente del Estado y; 8,3% a un grupo posdesmovilización.

**Gráfica 1. Hechos victimizantes según víctimas y casos en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

<sup>37</sup> Entre los datos aparecen 57 hechos que no tienen información de año, por lo que no han sido tenidos en cuenta.

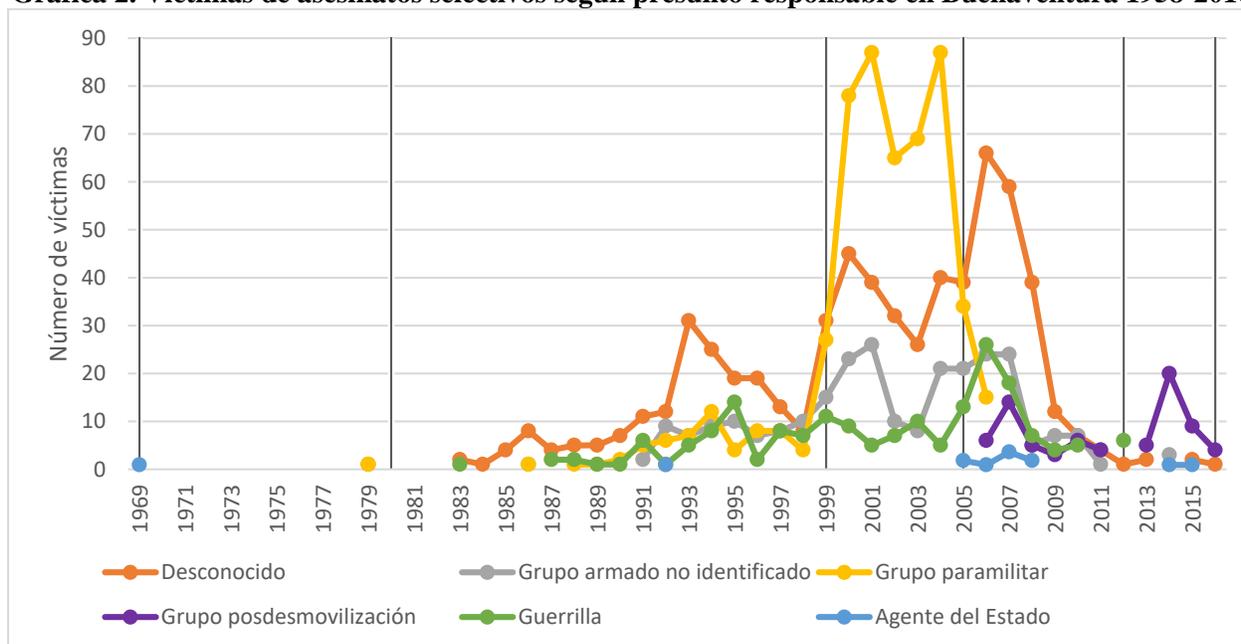
A continuación, se hará referencia a los hechos victimizantes predominantes según el número de víctimas. Se incluye también el desplazamiento forzado con la información del Registro Único de Víctimas.

Es importante resaltar que la sevicia suele estar presente en estas modalidades de violencia, especialmente en masacres y desapariciones forzadas, haciendo que sea poco frecuente encontrar casos “puros” de un cierto tipo de violencia (CNMH, 2015). En este mismo sentido, usualmente las masacres se acompañan de tortura, amenazas, violencia sexual, destrucción de bienes; los desplazamientos suelen ser “el resultado de la administración estratégica y dosificada de acciones tales como amenazas, asesinatos selectivos, violencia sexual y reclutamiento ilícito de personas menores de edad” (CNMH, 2015, p.218).

### Asesinatos selectivos

Además del desplazamiento, los asesinatos selectivos son la modalidad de violencia que más víctimas produce en el conflicto armado en el país y lo mismo ocurre con Buenaventura (CNMH, 2019). El primer registro de asesinatos selectivos en la base de datos del CNMH data de 1969. Entre ese año y 2016 fueron asesinadas 1.675 personas en Buenaventura; 37,01% a manos de un actor desconocido, 31,16% a manos de un grupo paramilitar y 15,4% a manos de un grupo armado no identificado<sup>38</sup>.

**Gráfica 2. Víctimas de asesinatos selectivos según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

<sup>38</sup> Vale la pena mencionar que las estadísticas disponibles sobre este hecho victimizante son disímiles, con cifras abismalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, el Registro Único de Víctimas totaliza 1.986 víctimas solo en el periodo 1990-2013 y la Policía Nacional 4.799 víctimas entre 1990 y 2012 (CNMH, 2015, p.222). A pesar de estas diferencias en los valores absolutos hay una relativa similitud en las tendencias.

El primer pico según el CNMH se da hacia 1993 por un actor desconocido. De acuerdo a las características del periodo podría pensarse que estos asesinatos estuvieron vinculados a los enfrentamientos en torno a las dinámicas de contrabando que habían tomado fuerza en la década del ochenta, a lo que llegaron a sumarse en los noventa los enfrentamientos en torno al narcotráfico. De acuerdo al total de asesinatos, el periodo 2000-2004 registra la mayor proporción, con 41,31% (CNMH, 2019).

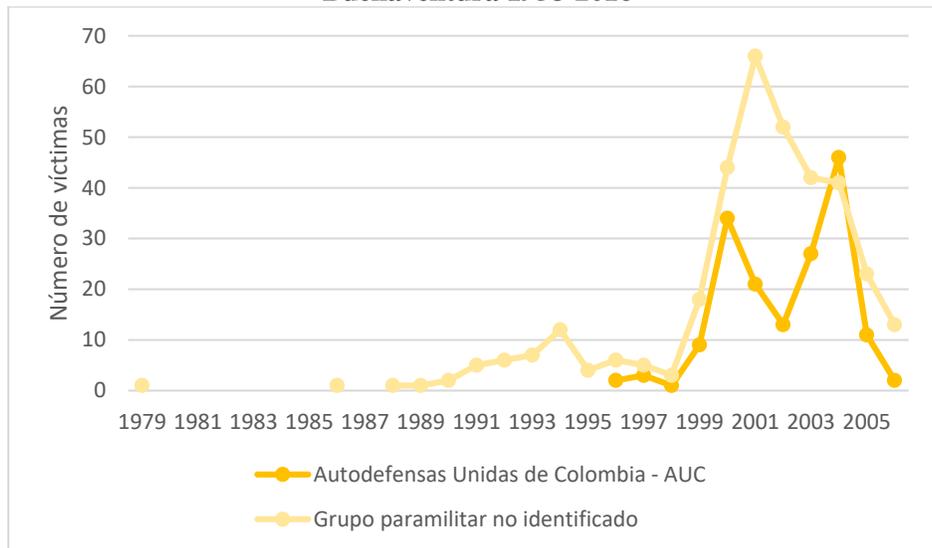
En 2005, la tasa de defunciones en Buenaventura por “homicidios y lesiones ocasionadas por otra persona” representó el 20,5% de las defunciones (en 1998, fue el 16%), una cifra mucho mayor que la tasa a nivel nacional (10%) (DANE, 2005). Según el CNMH, durante el periodo 2000-2007 se intensificaron los asesinatos selectivos, sumando en total 1.058 víctimas. Cabe resaltar que entre 2005 y 2008 se registra la actividad más intensa de asesinatos a manos de algún agente del Estado, lapso que se enmarca en el periodo posterior a la desmovilización de las AUC.

Respecto a las cifras de asesinatos que tienen como presunto responsable un grupo paramilitar, a partir de 1998 empieza un incremento constante, alcanzando el primer pico en 2001, disminuyendo en 2002 y aumentando de nuevo en 2004. El último registro para este presunto responsable aparece en 2006. El comportamiento de los datos coincide con el periodo del auge paramilitar, aunque existen registros previos. De estos asesinatos, 32,38% fueron atribuidos a las Autodefensas Unidas de Colombia y 67,43% a un grupo paramilitar no identificado. Como lo muestra la Gráfica 3, la presunta responsabilidad de las AUC se dio con fuerza entre 2000 y 2005, alcanzando su mayor pico en 2004, después del primer pico que había tenido en el año 2000.

La entrada del Bloque Calima a Buenaventura se hizo principalmente a través de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas. La utilización de cada tipo de violencia según los primeros años de dominio de las AUC muestra cómo la llegada del actor fue progresiva y calculada. Esta siguió tres modalidades: la primera era trabajo de inteligencia, el reclutamiento de colaboradores, milicianos y guerrilleros del Frente 30 de las FARC-EP, es decir, una entrada progresiva y oculta en el territorio. Se mencionó que en 1999 el Bloque Calima se había establecido en Tuluá, desde donde se movían por toda la región. Antes de entrar oficialmente en Buenaventura, enviaron hombres vestidos de civil a extorsionar, cometer asesinatos selectivos y hacer trabajos de inteligencia; esto puede explicar los asesinatos selectivos de las AUC ocurridos antes de que el grupo apareciera oficialmente en el territorio (2000). La segunda, el exterminio de todas las personas sospechosas de tener un vínculo con las FARC-EP, que lo hicieron a través de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. El Frente Pacífico del Bloque Calima, bajo el mando de *HH*, entró a Buenaventura con la idea de sembrar el terror e intentando hacer de 2000 “el año de los mil muertos”. En suma, en 2000 las AUC recurrieron con fuerza a los asesinatos selectivos, a las masacres y a las desapariciones forzadas.

La estrategia de usar la modalidad de asesinatos selectivos en estos momentos clave tenía como supuesto objetivo eliminar el mayor número de combatientes de las FARC-EP –y todo aquel que se considerara sospechoso de serlo, de colaborar o simpatizar, lo que implicó una afectación directa y aguda sobre la población civil–, principalmente en 2000. Luego, en 2004, necesitaban una modalidad menos visible que las otras mientras se concretaba el proceso de desmovilización. Hacia ese año hay un cambio de estrategia, en la que disminuyen las masacres, pero aumentan los asesinatos selectivos con el fin dar una impresión de cese del fuego.

**Gráfica 3. Víctimas de asesinatos selectivos según presunto responsable grupo paramilitar en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

Las guerrillas también usaron esta modalidad de violencia, especialmente en contextos de disputa territorial. De hecho, el pico más alto se alcanzó en 2006, en un contexto en que el objetivo era recuperar los territorios dejados por las AUC. La disputa territorial entre las Bacrim y las FARC-EP se hizo principalmente a través de asesinatos selectivos y desapariciones. En 2006 hubo 138 víctimas de asesinatos selectivos y en 2007 hubo 119, según el CNMH (2019). Sin embargo, esta leve disminución de asesinatos selectivos no quiere decir que haya disminuido la violencia, ya que en los mismos años aumentaron las desapariciones forzadas, pasando de 40 en 2006 a 78 víctimas en 2007. En 2007 también se presentaron altos niveles de violencia sexual, lo que podría suponer el uso de esta violencia para desestabilizar al grupo enemigo.

En cuanto a los asesinatos cometidos por grupos posdesmovilización, como se nota en la Gráfica 2, el primer registro data de 2006, se presenta un primer pico en 2007 y otro mayor en 2014, momento en que la guerra entre Bacrim se agudizó. Como se mencionó anteriormente, en los años 2010 y 2011, La Empresa continuó controlando los barrios populares de Buenaventura sin tener que enfrentarse con ningún otro grupo armado o banda criminal. En consecuencia, las cifras de homicidio en estos años fueron estables.

Aunque los datos no lo expresan con claridad (ver Gráfica 2), el fortalecimiento del Clan del Golfo en 2012 aumentó con fuerza los niveles de asesinatos en la ciudad. Según la FIP (2014), el HRW (2015) y otros artículos de prensa, durante la disputa entre La Empresa y el Clan del Golfo (2012-2014) se generalizaron casos de desmembramientos y torturas, delitos sexuales, reclutamiento, restricciones de circulación, extorsiones, desapariciones forzadas y asesinatos, especialmente en las comunas estratégicas de la ciudad. Sin embargo, en los datos registrados por el CNMH (2019) sólo se confirma un alza considerable de hechos relacionados con violencia

sexual y con asesinatos selectivos. Como se puede observar, los niveles de desplazamiento (Gráfica 9) y de violencia sexual (

Gráfica 7) alcanzaron sus niveles más altos en 2014 y se produjo un pico de asesinatos selectivos (Gráfica 2), aunque menor a los anteriores. A pesar de lo anterior, el mismo CNMH reconoce que

El enfrentamiento entre las bandas produjo uno de los picos de victimización más altos de los últimos tiempos, además que incrementó en la espiral de la guerra mayor sevicia en contra de los bonaerenses. Durante este periodo (octubre 2012) se registró una cuarta parte de los homicidios totales del año en la ciudad, se produjeron desplazamientos intraurbanos que alcanzaron la magnitud de 5495 personas huyendo de sus hogares y emergieron con mayor frecuencia los casos de víctimas desaparecidas que fueron encontradas posteriormente con mutilaciones y señales de tortura en los esteros (CNMH, 2015, p.209).

En respuesta a estas tasas de violencia difundida en la ciudad y a la manifestación de los ciudadanos, el Gobierno decidió establecer un plan de intervención especial para Buenaventura, lo que podría explicar el aparente descenso en el registro de hechos victimizantes desde 2014. Sin embargo, también podría ser debido a la victoria del Clan del Golfo en su guerra urbana contra La Empresa<sup>39</sup>.

### **Desaparición forzada**

Vale la pena señalar que la desaparición forzada, dadas sus características, es un hecho victimizante que permite fácilmente el subregistro en la medida en que evita el conteo de cadáveres y se puede manipular sin mayor dificultad la información en torno a las razones del hecho, resultando muy útil “para el propósito de invisibilizar la violencia puesto que promueve una guerra silenciosa, oculta y sin cuerpos” (CNMH, 2015, p.298).

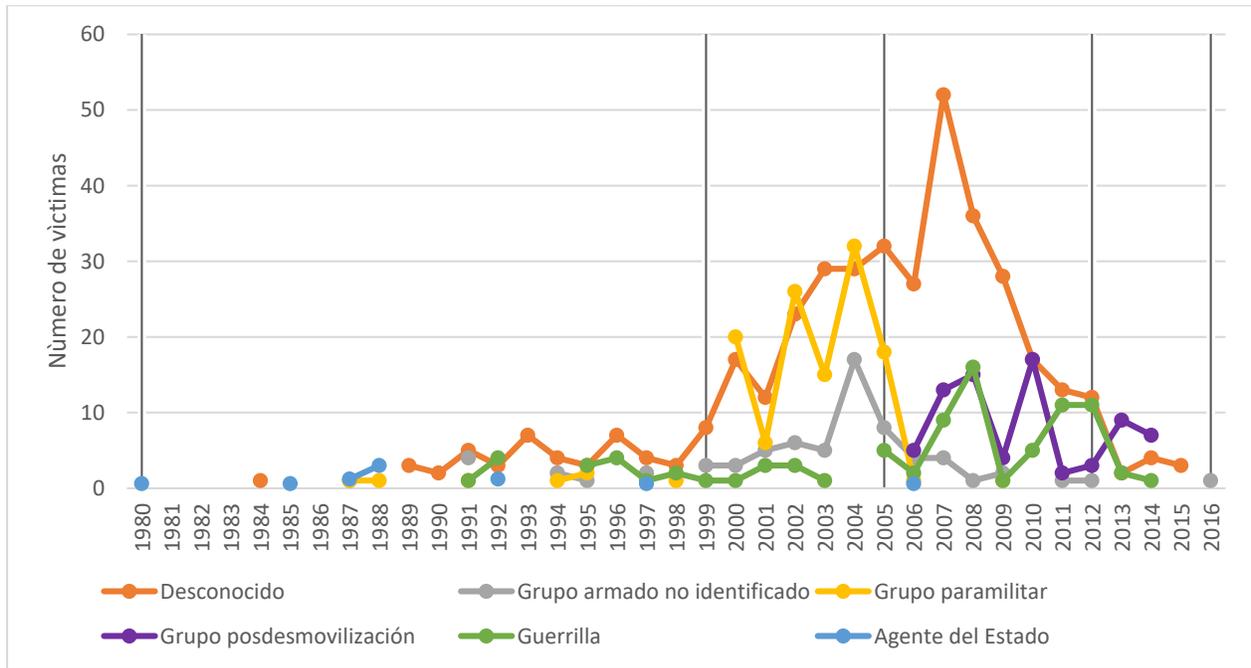
La base de datos del CNMH (2019) registra 758 víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016. En el 50,92% de los casos no se conoce el responsable, un grupo paramilitar fue el presunto responsable del 16,62% de los hechos y una guerrilla del 11,48%.

Cabe destacar que el periodo posdesmovilización (2005-2011) presenta el mayor número de desapariciones forzadas del total registrado –equivalente al 46,31%– y abre un momento de fuerte disputa entre los demás actores armados por el control de la región. Igualmente, en este periodo operaron activamente las “casas de pique”, lo que podría estar asociado al comportamiento de los datos. Según la base de datos del CNMH, en el último periodo (2012-2016) hay un descenso en el número de desapariciones forzadas, pero esto no coincide con los hechos descritos en fuentes secundarias ni con el alza considerable de desplazamientos registrados por el RUV (2019) para estos años.

---

<sup>39</sup> En otras fuentes el descenso no es tan drástico. Por ejemplo: “Los casos de homicidios pasaron a ser 96 entre abril y diciembre, lo que representa un descenso importante en comparación a los homicidios del mismo periodo en 2013 (150 homicidios). Sin embargo, la violencia no ha sido desmantelada. Entre marzo 2014 y marzo 2015 se han encontrado restos de 16 personas, de las cuales 12 fueron encontradas después de la intervención del Estado. En total, de enero 2013 a marzo 2015 se encontraron 32 cuerpos desmembrados. Desde el anuncio del presidente también se registran 6.900 desplazados de sus hogares” (HRW, 2015).

**Gráfica 4. Víctimas de desaparición forzada según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016**

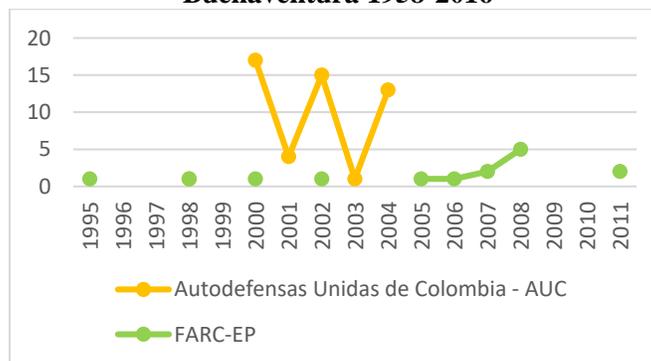


Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

De las desapariciones efectuadas por un grupo paramilitar, el 40,48% se atribuyen a las AUC y el resto (59,52%) a un grupo paramilitar no identificado. Para el caso de las guerrillas, el 17,24% se atribuyen a las FARC-EP y en el resto de los casos (82,76%) no se identifica. La siguiente gráfica muestra los periodos de acción de estos actores.

La desaparición forzada fue un hecho victimizante que se presentó acompañado de otros –por ejemplo las masacres– y en relación con el mismo los esteros fueron utilizados como cementerios clandestinos o “acuafosas”, lugares donde se ocultaban los cuerpos de las personas desaparecidas.

**Gráfica 5. Víctimas de desaparición forzada según presunto responsable AUC y FARC-EP en Buenaventura 1958-2016**



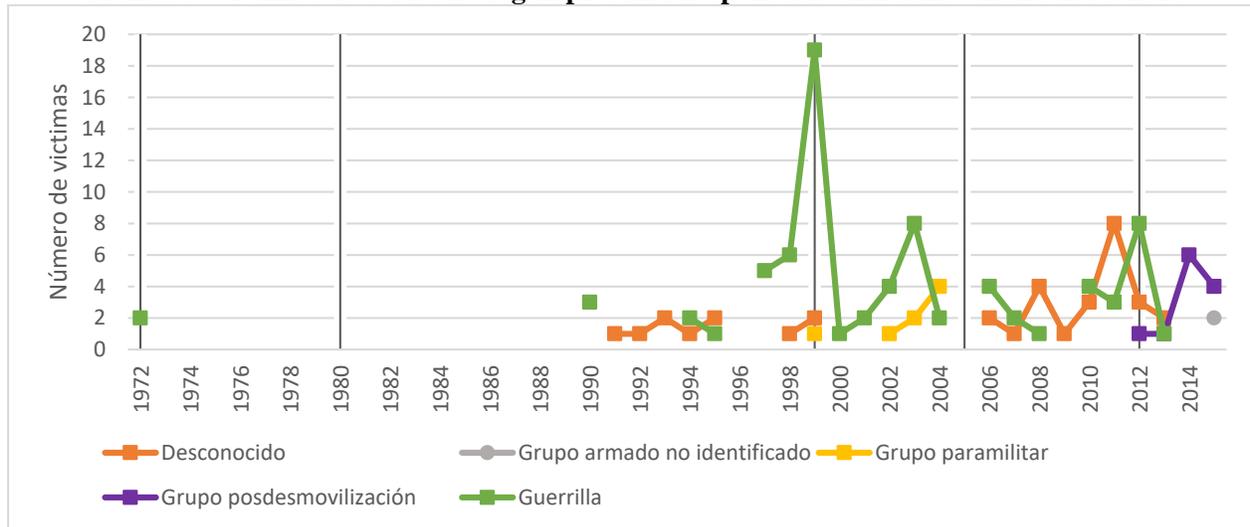
Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

Como lo muestra la Gráfica 5, las desapariciones forzadas atribuidas a las AUC inician y terminan con su periodo de acción más fuerte. El primer dato es al mismo tiempo el pico más alto, equivalente a 17 víctimas en el año 2000. A partir de ese momento hay un comportamiento extremadamente variable de los datos, bajando en 2001, subiendo de nuevo en 2002, alcanzando el valor más bajo en 2003 y elevándose otra vez en 2004. En el caso de las FARC-EP, los hechos aparecen de manera aislada, excepto entre los años 2005 y 2008, que se observa un ascenso continuo que alcanza su valor más alto en 2008.

## Secuestro

Entre 1972 y 2015 se presentaron 134 víctimas de secuestros, ejecutados en un 58,21% por una guerrilla, 25,37% por un actor desconocido, 8,96% por un grupo posdesmovilización, 5,97% por un grupo paramilitar y 1,49% por un grupo armado no identificado. El periodo que registra mayores proporciones de víctimas de secuestros es el correspondiente al fortalecimiento de las guerrillas entre 1980 y 1999, con el 35,07% del total registrado.

**Gráfica 6. Víctimas de secuestro según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

Los secuestros son un tipo de violencia principalmente cometido por las guerrillas, siendo 1999 al año con más víctimas en la historia del conflicto en Buenaventura. Aunque la gráfica no lo expresa con claridad, cabe recordar que en a finales de los 1990, las FARC-EP tenían un gran poderío militar, incursionando a través de secuestros, extorsiones e impuestos con el fin de financiar su estrategia de expansión político-militar. Se ha mencionado que los primeros años de la década del noventa se presentaron varios secuestros masivos en la vía Cali-Buenaventura, pero los registros del CNMH no dan cuenta de esto.

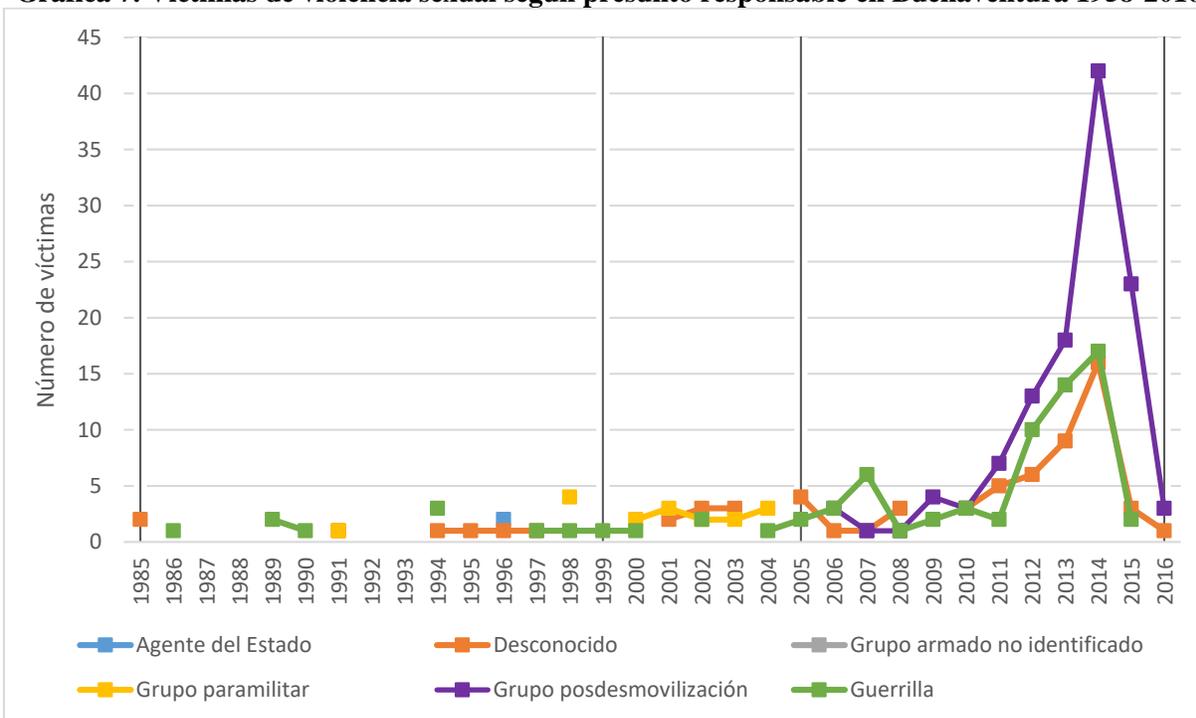
De las 78 víctimas de secuestro atribuidas a guerrillas, 83,33% tuvieron como presunto responsable a las FARC-EP, 2,56% al ELN y en el 14,10% de los casos no se identificó la guerrilla.

Los secuestros son el único hecho victimizante que dejó su mayor cantidad de víctimas antes del año 2000, decayendo significativamente en los periodos posteriores. A pesar de esto, “entre 1996 y 2012 Buenaventura concentró el 13 por ciento de los secuestros efectuados en el Valle del Cauca, siendo superado únicamente por Cali, en donde ocurrió el 52 por ciento de los casos” (CNMH, 2015, p. 239).

### Violencia sexual

Entre 1985 y 2016 se registraron en Buenaventura 281 víctimas de violencia sexual. El principal presunto responsable para este hecho victimizante son los grupos posdesmovilización (49,99%) – en ningún caso se logró identificar el grupo–, seguido de guerrilla en un 27,05% y un actor desconocido en un 23,84% de los casos. A grupos paramilitares se les atribuye el 6,05% de las víctimas. Cabe señalar que, por sus implicaciones sociales, la violencia sexual es quizá el hecho victimizante con mayores índices de subregistro.

**Gráfica 7. Víctimas de violencia sexual según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

Según la Defensoría del Pueblo (2011), existen al menos cuatro factores que estarían relacionados con el riesgo de que las mujeres sean víctimas de violencia sexual en Buenaventura: i) el riesgo derivado de su participación en organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o simplemente el rol de liderazgo y promoción de derechos humanos que podrían tener en sus comunidades; ii) su papel de cuidadoras frente a la amenaza de reclutamiento armado de sus hijos e hijas o de cualquier involucramiento con actores armados; iii) el riesgo de estar en una relación –real o presunta– con miembros de diferentes actores armados; iv) se deriva del incumplimiento de las normas de comportamiento establecidas por los actores armados. En el municipio de

Buenaventura estos riesgos se han vivido a través de varias modalidades de violencia, principalmente la violencia sexual, pero también asesinatos, desapariciones y desplazamientos.

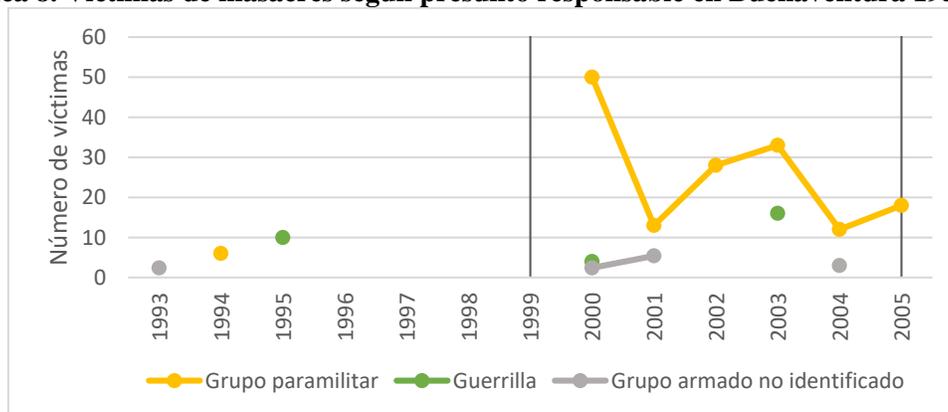
Hacia el año 2000, cuando el Bloque Calima incursionó en el territorio, su estrategia era apoderarse de región a través del terror. Para ello las masacres se acompañaron de diferentes tipos de vulneración a las mujeres, entre ellos la violencia sexual, como forma de invadir cada aspecto de la vida de la comunidad y mostrar una posición dominante. Posterior al periodo paramilitar, las bacrim reprodujeron las modalidades de violencia ejercidas por las AUC, incluso el uso de la violencia sexual. La entrada de La Empresa en 2009 generó un pico de violencia sexual. Luego, durante la disputa entre La Empresa, el Clan del Golfo y las FARC-EP (entre 2011 y 2014) se utilizó principalmente la violencia sexual como estrategia de control social de los barrios de Buenaventura; el año 2014 representa el pico de violencia sexual (26,69%), con participación de grupos posdesmovilización y guerrillas como presuntos responsables. Así pues, los años más intensos para este hecho victimizante corresponden al periodo de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP (2012-2016), con el 62,99% de las víctimas. También cabe la posibilidad de que el subregistro de los años anteriores haya sido mayor al de este periodo.

Por último, la violencia sexual no ha sido únicamente ejercida por los grupos armados ilegales. Aunque exista subregistro, la Fuerza Pública ha sido un actor importante en hechos de violencia sexual contra las mujeres en Buenaventura. Según Flórez y Ruiz (2018, p. 590) la violencia por parte de este actor institucional se ha presentado de dos maneras: físicamente, es decir, por los hechos de violencia sexual y psicológicamente, con intimidaciones pero también al no dar respuesta efectiva a las vulneraciones, lo que ha generado una desconfianza frente a las instituciones legales.

## Masacres

Para Buenaventura se registran 212 víctimas de masacres<sup>40</sup>, ejecutadas entre 1993 y 2005, en un 75,47% por grupos paramilitares, 14,15% por guerrillas y 10,38 por un grupo armado no identificado.

**Gráfica 8. Víctimas de masacres según presunto responsable en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019)

<sup>40</sup> Sin embargo, en diálogo con fuentes documentales puede notarse la existencia de otras cifras más elevadas.

De las 160 víctimas de grupos paramilitares, 76,25% se atribuyen a las AUC y en los casos restantes no se identifica el grupo paramilitar, sin embargo, por su hegemonía, se puede suponer que habría una participación directa o indirecta de las AUC en los hechos.

Como se observa, en Buenaventura se cometieron numerosas masacres en contra de la población civil, especialmente durante el periodo paramilitar, siendo el periodo que concentró el 82,08% de las masacres (CNMH, 2019), modalidad utilizada por los grupos paramilitares como “espectáculo para propagar el terror” (CNMH, 2015, p. 272). Teniendo en cuenta que para marcar su entrada en el territorio las AUC recurrieron a masacres y asesinatos selectivos, se explica que en el año 2000 se haya presentado un pico de víctimas de masacres a manos de paramilitares. En 2003 hubo un pico menor, con participación de guerrillas y paramilitares. En ese momento los actores armados buscaban establecer y mantener un control en los barrios de la ciudad de Buenaventura. Finalmente, la tasa de masacres disminuyó mientras las AUC negociaban con el Gobierno su eventual desmovilización, momento en que se recurrió a los asesinatos selectivos –de menos de cuatro personas, distanciados espacial y temporalmente– como principal modalidad de violencia, con el fin de crear una imagen de haber disminuido la frecuencia de las incursiones<sup>41</sup>. Estos homicidios parecían ser hechos aislados, presentados como asuntos personales, y por ende no atraían la atención de los medios de comunicación

La llegada de los paramilitares a Buenaventura generó numerosas persecuciones a las organizaciones étnicas de la región, más particularmente al Proceso de Comunidades Negras (PCN). Los miembros de comunidades –sobre todo las personas organizadas– eran referidos por los paramilitares como colaboradores de la guerrilla. En la masacre del Naya (2001) por ejemplo, fueron ejecutadas varias personas activas de los procesos de titulación de tierras.

### **Desplazamiento forzado**

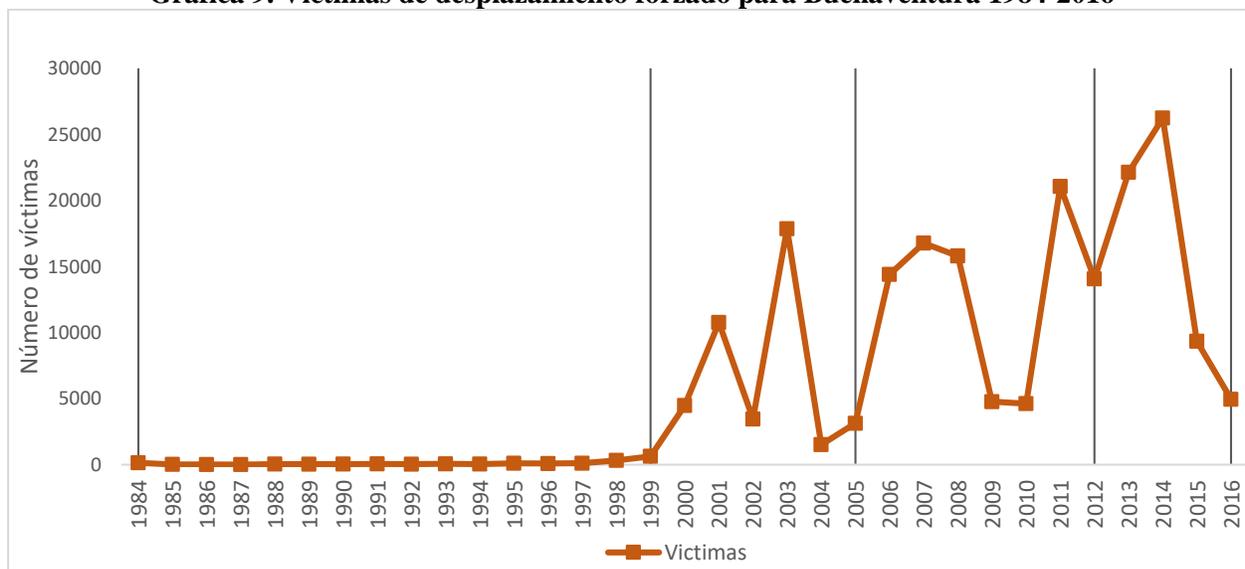
Según el Registro Único de Víctimas, entre 1984 y 2016 hubo 210.824 víctimas de desplazamiento forzado, con un primer pico en el año 2001, una disminución en 2002 y una nueva alza, superior a la primera, en 2003. En 2007 se presentó otro pico y en 2014 el pico más alto de todos los periodos, con 26.127 víctimas, año a partir del cual el número de víctimas empezó a disminuir de forma constante, hasta llegar a 4.922 en 2016. Según el CNMH

Entre 1990 y 2014 este municipio expulsó en promedio 17 víctimas por día y recibió 13 víctimas. El promedio diario aumentó durante el periodo 2000 a 2014 en ambos casos, pasó de 17 a 28 personas expulsadas y de 13 a 22 víctimas recibidas. Los picos del desplazamiento forzado se dieron en el año 2013 con 78 personas expulsadas por día, y 51 personas víctimas llegaron por día al municipio (CNMH, 2015, p.237).

---

<sup>41</sup> Si bien el comportamiento de los datos coincide en general con las dinámicas consignadas en las fuentes documentales, las cifras que registran éstas suelen ser mayores que las registradas en la base de datos (13 víctimas en total).

**Gráfica 9. Víctimas de desplazamiento forzado para Buenaventura 1984-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del RUV (2019)

Los picos de desplazamiento se relacionan principalmente con la entrada de actores armados en el territorio y las disputas por el control territorial. El alza de finales de los noventa está asociada a los enfrentamientos entre actores armados, que se dio con fuerza en territorios colectivos. En los periodos posteriores los desplazamientos también están asociados al desarrollo de megaproyectos, especialmente durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe. El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2007, p. 9) confirma que en 2006 muchos de los desplazamientos obedecieron a disputas territoriales entre milicias de las FARC-EP y bandas criminales, y consistían, en su mayoría, en desplazamientos al interior del casco urbano.

El último período marcado por altos niveles de desplazamiento es el comprendido entre los años 2012 y 2016, que es el período con mayores índices: en tres de los cuatro años se registraron más de 20.000 personas, destacando el año 2014 con alrededor de 26.000 registros. Este período también estuvo marcado por disputas territoriales, particularmente entre grupos posdesmovilización paramilitar (Defensoría del Pueblo 2016b, p. 35). Según información de prensa, en 2012 esta confrontación dejó un saldo de 55 víctimas mortales en 41 días, provocando el desplazamiento de 161 familias a otros barrios de la ciudad (El Tiempo, 15 de noviembre de 2012).

Como se mencionó, el pico de desplazamiento de 2014 estuvo acompañado de un alto nivel de violencia sexual. Las personas más victimizadas frente al desplazamiento son las mujeres, especialmente en 2014, año en el que 19.819 mujeres fueron desplazadas. De forma paralela, en el mismo se presentó un pico de personas desplazadas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

Del total de personas desplazadas, 53,53% se autoreconocieron como mujeres, 46,44% como hombres y 0,04% como población LGTBI. Respecto a la identificación étnica, 58,34% se autoreconocieron como negro/a o afrocolombiano/a, 1,16% como indígena y 40,24% no se identificaron con ninguna categoría étnica. En términos etarios, 33,14% de las víctimas se ubicaron entre 29 y 60 años y 26,25% entre 18 y 28 años.

Según el CNMH,

En el periodo paramilitar (2000 a 2004) hubo 29.863 víctimas del desplazamiento forzado, de las cuales el 48 por ciento se dio bajo la modalidad de desplazamiento masivo; durante el periodo posdesmovilización (2005 a 2011), en cambio, hubo 63.374 víctimas del desplazamiento forzado, pero tan solo el 15 por ciento de las personas fueron desplazadas masivamente. Por tanto, pese a que en el periodo posdesmovilización hubo más del doble de víctimas del desplazamiento forzado que en el periodo paramilitar, el desplazamiento masivo fue mucho menor en aquél periodo que en este, sin importar que se le mire en términos porcentuales (48 por ciento frente a 15 por ciento del total) o en magnitudes absolutas (14.541 frente a 9.589 víctimas). Por su naturaleza los desplazamientos masivos atraen mucha más atención de los medios de comunicación, las comunidades locales y las autoridades que los desplazamientos individuales (CNMH, 2015, p. 297).

Los altos niveles de desapariciones forzadas y homicidios son, entre otros, las razones por las cuales las personas deciden huir de su territorio: las cifras de desplazamientos reflejan los altos niveles de violencia durante estos años: el 24 % de la población de Buenaventura dice haber cambiado de residencia entre 2000 y 2005, y el 12% de ellos debido a amenazas por su vida<sup>42</sup> (DANE, 2005). En suma, en 2000 se registran 4.482 víctimas de desplazamiento en el municipio de Buenaventura, una cifra que incrementó hasta llegar a 10.775 víctimas en 2001 (RUV, 2019).

Este incremento de los niveles de desplazamiento forzado en Buenaventura también se debe a la estrategia paralela de los paramilitares de desalojar a las comunidades de sus tierras. Cabe recordar que gran parte de las víctimas del conflicto en el Pacífico centro son de comunidades negras, en plena lucha por sus derechos y demarcación territorial. Peralta González (2005), afirma que esta dinámica de desterritorialización a través de la violencia y del pretexto de la lucha antisubversiva se desarrolló en un contexto de liberalización de la economía con el Tratado de Libre Comercio firmado con los EEUU.

Desde el inicio del conflicto en Buenaventura, el hecho victimizante más recurrente es el desplazamiento forzado, con movimientos masivos hacia ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Al mismo tiempo Buenaventura ha sido receptora de las víctimas de desplazamiento que han llegado huyendo desde las zonas rurales del litoral Pacífico. Según el SJR Colombia (2016) Buenaventura es la segunda ciudad de Colombia, que no sea capital, con mayor recepción de población desplazada. Según el RUV (2019), el número de personas expulsadas en Buenaventura desde 1985 a 2016 asciende a 197.249 y el de personas recibidas 140.353.

Es fundamental tener en cuenta que una parte importante de los desplazamientos en Buenaventura son intraurbanos –lo que hace aún más difícil medirlos con precisión– y se gestan como “una modalidad de respuesta forzada de la población frente a la continua confrontación de los grupos armados ilegales, quienes han impuesto fronteras invisibles, realizan enfrentamientos en las calles, masacres, bombas y además confinan a sus habitantes en los barrios e incluso en sus propias viviendas” (CNMH, 2015, p. 198). Entre 2006 y 2007 se estima que se desplazaron de forma intraurbana 7.000 personas, y los barrios Alberto Lleras, Bellavista, San Francisco, Pascual de Andagoya, Bosque Municipal y Eucarístico se convierten en los principales expulsores de

---

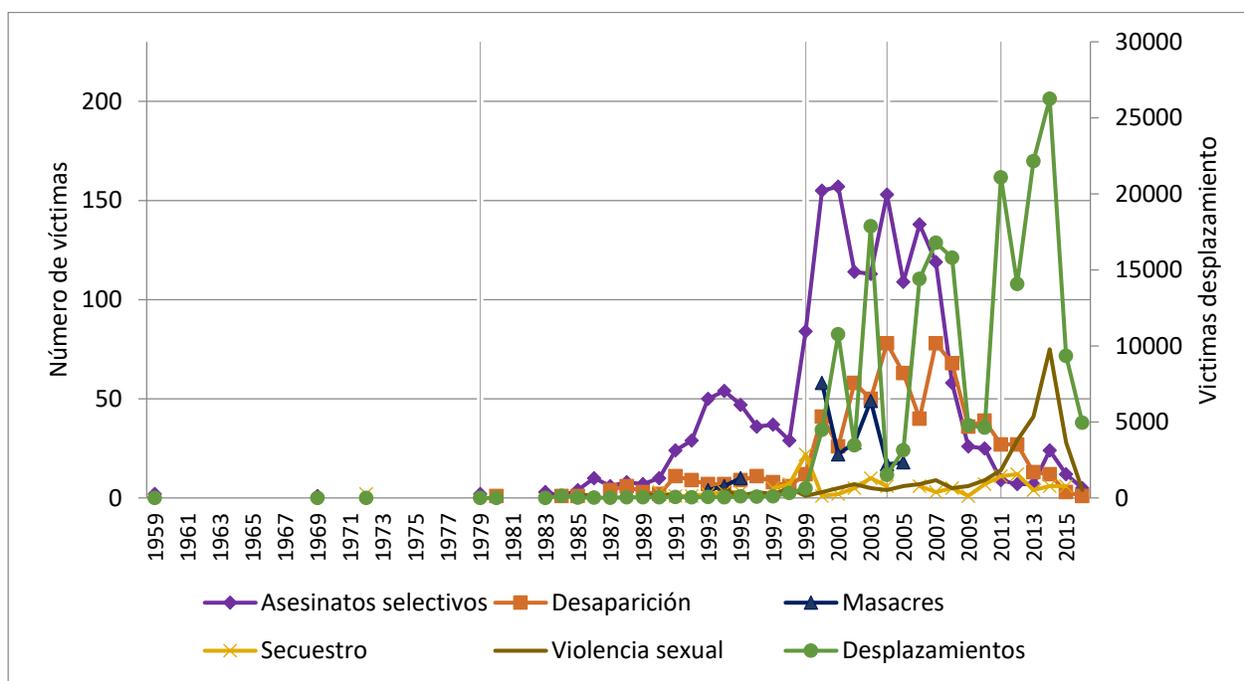
<sup>42</sup> 39% por razones familiares, 19,2% por dificultades para encontrar trabajo.

población desplazada intraurbana. Las personas desplazadas tienden a ubicarse en los barrios bajamar (CODHES, 2013, p.60).

### 3.3. Apuntes finales: hipótesis y proyecciones

La información revisada sobre las características del conflicto armado en Buenaventura y sobre los hechos victimizantes más significativos en su historia permiten evidenciar dinámicas particulares que escapan en alguna medida al comportamiento que han tenido para otras regiones del Pacífico, donde los hechos victimizantes se han movido de forma similar. La Gráfica 10 presenta el comportamiento del conjunto de hechos victimizantes analizados en el apartado anterior para el periodo 1958-2016.

**Gráfica 10. Principales hechos victimizantes según número de víctimas en Buenaventura 1958-2016**



Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos del CNMH (2019) y RUV (2019)

Más allá del subregistro y los valores absolutos de los datos consultados, esta gráfica deja ver con claridad una de las particularidades más relevantes de la violencia en Buenaventura, y es la forma descontrolada con que la misma se ha comportado, poco uniforme y predecible en cuanto a la frecuencia de los principales hechos victimizantes.

Durante el periodo insurgente, los índices de violencia fueron relativamente bajos en comparación con las estadísticas del departamento y del país, pero hacia finales de los años noventa la dinámica de la violencia cambió para ir profundizándose cada vez más, llegando a producir una victimización masiva sobre la población civil de Buenaventura, especialmente a través de los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado.

Aquel momento de cambio en las dinámicas de la violencia coincide con una etapa en la que el proceso de titulaciones colectivas adelantado por las comunidades afrodescendientes estaba emergiendo con fuerza –a partir de los logros alcanzados en el contexto de la Constitución de 1991–, lo que estaría dando cuenta de la importancia del movimiento afro como el actor étnico más relevante en las dinámicas de victimización, pero también de resistencia, en Buenaventura. Igualmente esto está indicando que desde su inicio la violencia en el municipio ha estado directamente relacionada con estrategias de despojo del territorio, dada su posición geoestratégica para desarrollar negocios legales e ilegales altamente lucrativos, llegando a consolidar en el territorio especie de enclave ilícito –especialmente a partir del año 2000–.

En el mismo sentido, la incursión paramilitar, que disparó los índices de violencia en el territorio, se produjo en un momento en que el proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes estaba fortalecido, llegando para fragmentar los lazos comunitarios y facilitar con ello el despojo y saqueo de los territorios, principalmente a través de masacres en lugares estratégicos –centradas en el área rural entre 2000 y 2001, y luego en zona urbana entre 2004 y 2005– que “no solo se caracterizaron por el alto grado de sevicia con que el cual fueron perpetradas, sino también por ‘combinarlas’ con otras modalidades de violencia tales como violencia sexual, amenaza, tortura, desplazamiento forzado y tierra arrasada, pues tenían la intención de provocar desplazamientos forzados” (CNMH, 2015, p.178).

A través de sus transformaciones históricas, actualmente la violencia en Buenaventura se caracteriza por estar ampliamente difundida y por estar focalizada en el área urbana. Aunque la llegada de los primeros actores armados se produjo en zona rural, desde finales de la década del noventa el conflicto se trasladó hacia el casco urbano, cubriendo paulatinamente una mayor cantidad de comunas hasta cobijar casi la totalidad de las mismas. Como parte de esta dinámica, los territorios titulados colectivamente en zonas rurales, y en el casco urbano las áreas de bajamar, los esteros y otras zonas de impacto de los negocios relacionados con el puerto<sup>43</sup> y el turismo urbano se han convertido en ríos de sangre, cementerios clandestinos y acuafosas donde reposan como un secreto público aquellos cuerpos que materializan la estrategia de desterritorialización, saqueo y despojo que se ha librado históricamente contra el municipio y sus habitantes.

Vale la pena resaltar este último punto en cuanto la desaparición de los cuerpos y con ella la ruptura de las prácticas fúnebres –fundamentales en la cultura afro– representa un impacto simbólico muy importante equivalente a un ejercicio de matar colectivamente. Lo señalado ha producido una transformación abrupta y traumática del territorio y del tejido social en la que se han fragmentado las relaciones culturales y ancestrales de las comunidades con el mismo y entre sí que permite hablar de un etnocidio cultural. Y todo esto en el marco de una profunda desterritorialización material y mental que combina acciones violentas y no violentas, así como actores legales e ilegales (CNMH, 2015, p. 303-304), como parte de una gran estrategia en la que participan activamente el gran capital, las élites nacionales, la institucionalidad en todos sus niveles y los medios masivos de comunicación.

---

<sup>43</sup> La finalidad es la adecuación de territorios para la apertura de negocios relacionados con el circuito portuario, como bodegas para almacenar contenedores y lavaderos y parqueaderos de tractomulas. Las comunas más afectadas han sido la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 (CNMH, 2015, p. 215; p. 318).

En medio de una marcada victimización hacia la población civil, en la que casi una de cada dos personas ha sido víctima directa de la violencia y una gran parte de la población ha sufrido más de un hecho victimizante, ningún grupo poblacional ha estado al margen de la violencia en Buenaventura, afectando (aunque con particularidades) a hombres y mujeres de todas las edades –especialmente menores de 18 años– y de todos los grupos étnicos –especialmente afrodescendientes– (CNMH, 2015, p. 243). La violencia se instaura entonces en la cotidianidad de las relaciones sociales, constituyendo un orden social desestructurado donde hacia adentro impera el terror y hacia afuera la invisibilización.

Si bien cada actor ha privilegiado en su accionar hechos victimizantes diferenciados<sup>44</sup>, existe una cantidad muy significativa de casos en los que no se ha logrado identificar con precisión la identidad del actor que desarrolla el hecho, lo que estaría dando cuenta de una *violencia sin rostro* (CNMH, 2015), que resulta altamente funcional a aquella combinación de terror, invisibilización e impunidad.

Finalmente es importante señalar que, aunque existen múltiples investigaciones sobre el conflicto armado en Buenaventura, la complejidad de su configuración social hace que existan aún temas pendientes en los que es necesario ahondar si se quiere lograr una radiografía completa de la historia y situación actual del municipio en clave de esclarecimiento. La parte rural, que es amplia y diversa, sigue siendo poco explorada en términos de las dinámicas de violencia que se han librado y su relación con la riqueza de los ecosistemas. Otro de los temas que constituye una gran deuda son las formas diferenciadas de violencia basada en género, que no solo comprenden la violencia sexual, sino por ejemplo la utilización, seducción, esclavitud sexual y trata, entre otros hechos victimizantes contra mujeres, niñas y población diversa sexualmente. Las afectaciones sobre las comunidades indígenas también ha sido un tema poco abordado.

Importante profundizar en lo relacionado con la responsabilidad de la Fuerza Pública en el conflicto en Buenaventura, así como las dinámicas del narcotráfico y su relación con la misma. Los antecedentes del paramilitarismo, antes de los años 2000, es un tema que aún no ha sido explorado con la suficiente atención que merece; y lo mismo sucede con la actuación del Frente Pacífico, que usualmente se confunde con el Bloque Pacífico o se aborda en términos generales como AUC, sin identificar sus particularidades.

Es largo el camino que aún queda por andar en clave de esclarecer lo ocurrido en Buenaventura y las responsabilidades que tiene tanto la institucionalidad como actores privados, como primer paso para avanzar en la justicia y la reparación a las víctimas. Y más largo aun lo que queda por hacer para transformar las condiciones estructurales que mantienen a Buenaventura atrapada en la

---

<sup>44</sup> “Durante el periodo paramilitar (2000 a 2004), la violencia se expresó principalmente por medio de masacres, homicidios, asesinatos selectivos, secuestros y desplazamientos forzados masivos e individuales; después, durante el periodo posnegociación (2005 a 2014), las modalidades de violencia que más se implementaron fueron la desaparición forzada, las oleadas de asesinatos y el desplazamiento forzado, sobre todo el de carácter individual. Además durante el último periodo la sevicia y la tortura se consolidaron como prácticas regulares del conflicto, dando lugar a la perpetración de desmembramientos humanos y al surgimiento de lugares de horror como los cementerios clandestinos y las casas de pique” (CNMH, 2015, p.214). “De acuerdo con la información recopilada por la RNI, la guerrilla es responsable de la mayor cantidad de secuestros, delitos contra la integridad y la libertad sexual, desplazamiento forzado, tortura y vinculación de personas menores de edad; los paramilitares y las bacrim cometieron la mayor cantidad de amenazas, y la fuerza pública tuvo una participación importante en la victimización por medio del desplazamiento forzado” (CNMH, 2015, p.215).

lógica capitalista de hacer más pobres a los pobres a costa de la riqueza de las clases más poderosas.

## BIBLIOGRAFÍA

ACIVA-RP. Historia. En: <https://acivarp.org/>

Alcaldía Municipal de Buenaventura (2018). En: <http://www.buenaventura.gov.co/>

Almario, O (2009). “De lo regional a lo local en el pacifico sur colombiano, 1780-1930”, *Revista Histórielo*. Vol. 1, Colombia: Universidad Nacional de Medellín, Medellín

Aprile-Gnisset, Jacques, (1993). *Poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico*, Universidad del Valle, Cali.

Banco Medios (2001). *Esquema de ordenamiento territorial: Municipio Litoral del san juan – Diagnóstico Final*, En: [http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot-litoral%20del%20bajo%20san%20juan-choc%C3%B3-2000-diagn%C3%B3stico%20municipal-parte%202-\(139%20p%C3%A1g%20-%20759%20kb\).pdf](http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot-litoral%20del%20bajo%20san%20juan-choc%C3%B3-2000-diagn%C3%B3stico%20municipal-parte%202-(139%20p%C3%A1g%20-%20759%20kb).pdf).

Beltrán Beltrán Santos A (2011). “Actor armado, territorio y población. Las lógicas de la guerra irregular”, *FARC-EP, flujos y reflujos: La guerra en las regiones*. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá.

Bluradio (30 de enero de 2018). “Nuevo operativo de la Fuerza Pública contra el ELN en el Chocó”. En: <https://www.bluradio.com/nacion/nuevo-operativo-de-la-fuerza-publica-contra-el-eln-en-choco-167598>.

Cámara de comercio Buenaventura (2013). “Anuario estadístico 2012-2013”. En: [https://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario\\_estadistico\\_2012\\_-\\_2013.pdf](https://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario_estadistico_2012_-_2013.pdf).

----- (2006) CONPES 3410: Política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura. En: <https://www.ccbun.org/articulos/documentos-conpes>.

Cifuentes Muñoz, E (2001). « Resolución defensorial No. 009 sobre la titulación de orden público en la región del río Naya ». Resolución 009. Bogotá, En: Defensoría del Pueblo. [www.defensoria.gov.co/attachment/226/defensorial9.pdf](http://www.defensoria.gov.co/attachment/226/defensorial9.pdf).

Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH (2005), *Buenaventura: Un puerto sin comunidad*, Bogotá- Colombia.

----- (2016) *Tomas y Ataques Guerrilleros (1965 – 2013)*, Bogotá – Colombia.

----- (2018). *Bloque Calima de las AUC: Depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano*. Informe No. 2. Serie: Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones. Bogotá – Colombia.

-----, Base de datos. Recuperado de: <http://centrodehistoriahistorica.gov.co/observatorio/bases-de-datos/> Febrero 2019

----- (2018b) *Tierras: Balance de la Contribución del CNMH al Esclarecimiento Histórico*. Bogotá- Colombia.

CERAC (2015). « Las columnas móviles de las FARC: la amenaza terrorista del conflicto interno». Seminario de análisis en seguridad. En: [http://productos.cerac.org.co/wp-content/uploads/2015/05/Semanario16\\_-LasColumnasM%C3%B3vilesDeLasFARC\\_LaAmenazaTerroristaDelConflicto.pdf](http://productos.cerac.org.co/wp-content/uploads/2015/05/Semanario16_-LasColumnasM%C3%B3vilesDeLasFARC_LaAmenazaTerroristaDelConflicto.pdf).

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES (2013). *Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha*. Bogotá – Colombia.

Consejería presidencial para los Derechos Humanos (2007). «Diagnóstico Departamental Valle del Cauca». Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Bogotá. En: <http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/valle.pdf>.

----- (2019). “Mapas de presencia del ELN (1998-2011)”, Sistema de Información Geográfico – SIG.

Consejo Internacional de Industria Sueca- NIR, Asociación Nacional de Empresarios en Colombia –ANDI y Fundación Ideas para la Paz – FIP (2011). *Entornos Complejos: Buenaventura*.

Defensoría del Pueblo (2011). *Violencia contra las mujeres en el distrito de Buenaventura: Informe temático*, Colombia.

----- (2016) «Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana: Subregión Cauca». Bogotá: Defensoría del Pueblo. [http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Problematica\\_humanitaria\\_en\\_la\\_Region\\_Pacifica\\_colombiana\\_-\\_subregion\\_Cauca.pdf](http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Problematica_humanitaria_en_la_Region_Pacifica_colombiana_-_subregion_Cauca.pdf).

----- (2017), “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos”, *Informe Especial de Riesgo*, Bogotá – Colombia.

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2015), *Atlas de Expansión Urbana*. Bogotá-Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (1964). *XIII censo de población y II de edificios y viviendas 1964: Valle del Cauca*.

----- (1964b). *XIII censo de población y II de edificios y viviendas 1964: Chocó*.

----- (1973). *XIV censo nacional de población y III de vivienda 1973: departamento de Valle del Cauca*.

----- (1973). *XIV censo nacional de población y III de vivienda 1973: departamento de Chocó*

----- (1985). *XV censo nacional de población y IV de vivienda 1985*.

----- (1993B). *XVI censo nacional de población y V de vivienda 1993: Valle del Cauca*.

----- (1993B). *XVI censo nacional de población y V de vivienda 1993: Chocó*.

----- (2005). *Censo general 2005*.

Díaz Vargas, A (2015). *Buenaventura: Ciudad- Puerto o Puerto sin ciudad*, Maestría en Ordenamiento Urbano Regional, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá – Colombia.

Echandía Castilla, C (2004). «La Guerra por el Control Estratégico en el Suroccidente». *Revista Sociedad y Economía*, 2004. <http://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/>. Bogotá – Colombia.

----- (2015), “Cincuenta años de cambios en el conflicto armado colombiano (1964-2014)”, *Revista Zero*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá- Colombia.

El Colombiano (24 de marzo de 2010) “Caos en Buenaventura por explosión de carro bomba”. En:

[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/caos\\_en\\_buenaventura\\_por\\_explasion\\_de\\_carro\\_bomba/caos\\_en\\_buenaventura\\_por\\_explasion\\_de\\_carro\\_bomba.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/caos_en_buenaventura_por_explasion_de_carro_bomba/caos_en_buenaventura_por_explasion_de_carro_bomba.asp).

El Espectador (13 de agosto de 2017) “Río San Juan: no cesa el fuego”. En: <https://colombia2020.elespectador.com/territorio/rio-san-juan-no-cesa-el-fuego>.

----- (15 de noviembre de 2018), “Buenaventura sin tregua: La guerra que nunca se fue”, Bogotá- Colombia En: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/buenaventura-sin-tregua-la-guerra-que-nunca-se-fue-articulo-823851>.

El País (2010). “El ocaso del Frente de las FARC que sembró el terror en Cali”. En: <http://historico.elpais.com.co/paionline/notas/Febrero212010/farc.html>

----- (22 de julio de 2014). “Así cayó alias Richard, el capo del Frente 30 de las Farc”. En: <https://www.elpais.com.co/judicial/asi-cayo-alias-richard-el-capo-del-frente-30-de-las-farc.html>

----- (28 de abril de 2016). “Paras mataron a siete personas para huir de la masacre del Naya”. En: <https://www.elpais.com.co/judicial/paras-mataron-a-siete-personas-para-intentar-huir-de-la-masacre-del-naya.html>.

----- (30 de julio de 2017). “Un viaje por la Colombia que aún no conoce la paz”. En: <https://www.elpais.com.co/colombia/un-viaje-por-la-que-aun-no-conoce-la-paz.html>.

----- (31 de julio de 2017). “La guerra los sacó del Litoral del san juan, en Chocó”. En: <https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-guerra-los-saco-del-litoral-del-san-juan-en-choco.html>.

----- (29 de julio de 2018). “Buenaventura, frente a un mar de oportunidades y desafíos”. En: <https://www.elpais.com.co/500-empresas/buenaventura-frente-a-un-mar-de-oportunidades-y-desafios.html>

El Tiempo (20 de noviembre de 1992) “Guerra entre FARC y Cartel de Cali”. En: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-244490>.

----- (15 de noviembre de 2012) “Éxodo por bandas no para en barrios de Buenaventura”. En: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12381627>.

Espinoza Bonilla Adriana (2011), “Activismo global: Nuevas rutas de acción colectiva del movimiento negro en Colombia”, *Repertorios de acción del PCN y conflicto armado en Buenaventura*, Universidad del Valle, Cali- Colombia.

Estrada Gallego F (2010). “Estrategia y geografía política del conflicto armado en el Valle del Cauca”. *Análisis político*, n°69, Bogotá – Colombia.

Flórez López J., Ruiz Galván A (2018) “Ciudad, violencia, memorias y políticas de seguridad: Buenaventura (1980-2013)”, En: Guzmán Barney Álvaro (Edit.) *Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI*, Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Colombia.

Fundación Ideas para la Paz – FIP (2013) “Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación”. En: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf>

----- (2014) “La crisis de Buenaventura la vive todo el Pacífico”. Bogotá- Colombia.

----- (2014b) “Dinámicas del Conflicto Armado en el Sur del Valle y Norte del Cauca y su Impacto Humanitario”. Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz Unidad de Análisis “Siguiendo el Conflicto”. Bogota. En: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf>.

----- (2017). “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, Serie informes No. 27. Bogotá- Colombia.

----- (SF) “ELN: el camino hacia la resistencia pasiva”. En: <http://www.ideaspaz.org/tools/download/54295>

Gärtner, Á (2005). “Un puerto contra la voluntad del destino”, SPRB (ed.) En: Buenaventura ciudad-puerto, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Cali.

Hoffmann, O (2007). *Comunidades negras en el pacífico colombiano. Dinámicas e innovaciones étnicas*, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.

Human Rights Watch, (2000), Los lazos que unen: Colombia y las relaciones militares-paramilitares. En: [http://www.acnur.org/fileadmin/news\\_imported\\_files/COI\\_134.pdf?view=1](http://www.acnur.org/fileadmin/news_imported_files/COI_134.pdf?view=1).

----- (2015). “Colombia: Nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura”. En: <https://www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-desapariciones-en-buenaventura>.

Insight Crime (2014). “El Cartel del Norte del Valle”. En: <https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/cartel-del-norte-del-valle/>.

----- (2016). “Los Rastrojos”. En: <https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/rastrojos-perfil/>.

Instituto de Estudios Interculturales IEI (2016). *Caracterización territorial suroccidente colombiano*. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Cali- Colombia.

Jiménez Pérez, Nayibe. Delgado Moreno, Wilson (2007). “La política pública de privatización del sector portuario y su impacto en la organización del trabajo en el puerto de Buenaventura”, *Pensamiento y gestión N° 25*, Universidad del Valle, Cali - Colombia

Kris Lane (2007). “El dorado Negro, o el verdadero peso del oro Neogradino en la Colonia”, *Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, Universidad Nacional de Colombia, Colección CES, Estudios Afrocolombianos, Bogotá – Colombia.

La Patria (15 de enero de 2013). “Urabeños toman el control del crimen en Buenaventura”. En: <http://www.lapatria.com/nacional/urabenostoman-el-control-del-crimen-en-buenaventura-23964>.

Ministerio del Interior (2017) *Planificación territorial del Litoral del san juan*. República de Colombia. Bogotá- Colombia.

Moreno Parra, Héctor Alonso. Rodríguez Sánchez, Adolfo León (2014). *Etnicidad, resistencias y políticas públicas*, Colección Ciencias Sociales, Universidad del Valle, Cali – Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006) «Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle». Bogotá: Presidencia. [http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu\\_Regionales/nortedelvalle.pdf](http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/nortedelvalle.pdf).

**ORIVAC. (2016). Historia de la ORIVAC. En: [https://issuu.com/ladyvz/docs/revista\\_orivac](https://issuu.com/ladyvz/docs/revista_orivac)**

Pacifista (25 de julio de 2017) “Las ocho Bacrim que hoy amenazan la seguridad de Colombia”. En: <https://pacifista.tv/notas/las-ochobacrim-que-hoy-amenazan-la-seguridad-de-colombia/>.

----- (7 de noviembre de 2017) “Hace mucho que no había tantas balaceras en Buenaventura” En: <http://pacifista.co/informe-buenaventura-defensoria-pueblo-padre-adriel-ruiz-violencia/>.

Pataquiva García Germán Nicolás (2009). “Las FARC, sur origen y evolución”, *UNISCI Discussion Papers*, N°19, España.

Peralta González Lily (2005). “Resistencia ciudadana y conflicto armado. Un estudio de caso: Desarticulación de redes sociales en el Pacífico colombiano”, *Políticas públicas del gobierno Uribe Vélez frente a las minorías étnicas en el conflicto armado*, Estudio socio-jurídico N°7, Bogotá- Colombia.

Pérez V (2007). “Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación de Buenaventura” *Documentos de trabajo sobre Economía Regional*, N. 91, Banco de la República-Centro de Estudios Económicos regionales (CEER), Cartagena – Colombia.

Peña Aragón Nicolás (2011). “Comando Conjunto de Occidente”, *FARC-EP, Flujos y reflujos: La guerra de las regiones*. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá.

Registro Único de Víctimas (2018) Base de datos. En: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>.

Restrepo, E y Rojas, A (ed.) (2004). *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

Rodríguez Triana Julián Camilo (2012). *Análisis de los alcances del control territorial por parte de las fuerzas militares en la implementación de la política de defensa y seguridad democrática, como fortalecimiento del Estado. Primer periodo del gobierno Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)*, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá – Colombia.

Rutas del Conflicto. “Masacre del Naya”. En: <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=22>.

Semana (30 de mayo de 2004), “Diciembre 2 de 1981: El comienzo del horror”. En: <https://www.semana.com/especiales/articulo/diciembre-1981-brel-comienzo-del-horror/65872-3>.

----- (9 de julio de 2008). “La masacre de Trujillo y los mecanismos de terror”. En: <https://www.semana.com/on-line/articulo/la-masacre-de-trujillo-los-mecanismos-del-terror/95142-3>.

----- (20 de octubre de 2011). “En combate murió alias *Mincho*, jefe del Frente 30 de las FARC”. En: <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-combate-murio-alias-mincho-jefe-del-frente-30-farc/248104-3>.

----- (1 de febrero de 2012). “La historia de Juan de Dios Úsuga, cabecilla de “Los Urabeños””. En: <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-juan-dios-usuga-cabecilla-los-urabenos/251454-3>.

----- (27 de mayo de 2017). “Causas y consecuencias del paro cívico de Buenaventura”, *Nación. Bogotá- Colombia* En: <https://www.semana.com/nacion/articulo/causas-y-consecuencias-del-paro-civico-de-buenaventura/526726>.

Sentencia 30.097 (2011). Corte Suprema de Justicia.

Valencia Llano, Alonso (2014). Los orígenes coloniales del Puerto de Buenaventura, *Historia y Memoria*, Universidad del Valle, Tunja- Colombia.

Varela Barrios E. Martínez Sander Á. Delgado Moreno W (2009). “Gobernanza y redes de políticas en el distrito portuario, industrial y biodiverso de Buenaventura, Colombia”, *Estudios Políticos N°43*, Universidad del Valle, Cali – Colombia.

Vargas Sarmiento Patricia (1993). “Los Embera, los Waunana y los Cuna”, *Colombia Pacífico tomo 1* (Biopacífico, FEN, 1993); 326-330.

Vélez, María Alejandra (2009). “Sistemas complejos de gobierno local”, *Revista de Estudios Sociales N°32*, Bogotá – Colombia.

Verdad Abierta (9 de mayo de 2009) “Bloque Pacífico- Frente Héroes del Chocó” En: <https://verdadabierta.com/bloque-pacifico-frente-heroes-del-choco/>.

----- (3 de noviembre de 2010). “Los Frentes del Bloque Calima”. En: <https://verdadabierta.com/los-frentes-del-bloque-calima/>

----- (8 de febrero de 2011), “Paramilitares contaron como llegaron las AUC al Valle y Cauca”. En: <https://verdadabierta.com/paramilitares-contaron-como-llegaron-las-auc-al-valle-y-cauca/>.

----- (30 de marzo de 2011). “La Fuerza Pública y la masacre del Naya”. En: <https://verdadabierta.com/la-fuerza-publica-y-la-masacre-del-naya/>.

----- (6 de noviembre de 2012) “Bandas Criminales recrudecen violencia en Buenaventura”. En: <https://verdadabierta.com/lanzan-un-sos-a-raiz-de-la-violencia-en-buenaventura/>.

----- (3 de mayo de 2012). “Los Hermanos Castaño y el Bloque Calima” En: <https://verdadabierta.com/la-cuna-del-bloque-calima/>.

----- (8 de noviembre de 2013) “La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura”. En: <https://verdadabierta.com/la-pugna-detras-de-los-desplazamientos-de-buenaventura/>.

----- (19 de febrero de 2014). “Multitudinaria marcha contra la violencia en Buenaventura”. En: <https://verdadabierta.com/multitudinaria-marcha-contra-la-violencia-en-buenaventura/>.

----- (4 de marzo de 2015) “En Buenaventura se sigue sembrando terror: Human Rights Watch”. En: <https://verdadabierta.com/en-buenaventura-se-sigue-sembrando-terror-human-righths-watch/>.

----- (2 de junio de 2015) “La oscura noche de Buenaventura”. En: <https://verdadabierta.com/la-oscura-noche-de-buenaventura/>.

----- (s.f, 2016) “Organigrama Estado Mayor Central y Secretariado de las FARC”. En: <https://verdadabierta.com/especiales-v/2016/organigrama/>.

----- (26 de enero de 2019) “Tres municipios del Valle del Cauca, en alto riesgo por incremento de la violencia”. En: <https://verdadabierta.com/tres-municipios-valle-del-cauca-alto-riesgo-incremento-la-violencia/>

## ANEXOS

### Anexo 1. Consejos comunitarios en el municipio de Buenaventura

Consejo Comunitario	Año título colectivo	Comunidades	Familias	Personas	Área (ha)
Taparal	1998	1	52	221	1.720,17
Bajo Potedó	1998	1	32	175	1.473,17
Guadualito	1998	1	60	345	1.159,70
Campo Hermoso	1998	1	73	355	1.138,30
Mayorquín y Papayal	1999	7	267	1.290	19.060
Río Cajambre	1999	12	1.497	5.281	75.710
Río Raposo	1999	14	583	2.418	20.536
Río Yurumanguí	2000	13	529	2.918	54.776
Llano Bajo	2002	4	68	305	5.014,22
La Brea	2002	1	57	271	1.489,32
Limonos	2002	1	28	98	1.308,06
Bracitos y Amazonas	2002	2	72	322	4.029,45
Agua Clara	2002	1	45	160	12.909,73
Sabaletas	2002	1	108	485	12.238,09
San Marcos	2002	1	56	241	3.607,33
Guaimía	2002	1	44	171	1.424,44
Mayor del Río Anchicayá	2002	7	211	930	16.773,22
Río Calima	2002	10	690	3.538	66.724,29
Alto Potedó	2003	1	40	153	1.959,96
Calle Larga Río Dagua	2003	1	23	111	1.599,72
Zacarías Río Dagua	2003	1	174	641	1.418,75
Citronela Río Dagua	2003	1	127	485	1.303,90
Bahía Málaga -La Plata	2003	4	153	579	38.037,83
Bazán - La Bocana	2005	6	445	1.373	9.697,59
Córdoba y San Cipriano	2005	3	278	1.235	7.322,90
Mayor de la Cuenca Media y Alta del Río Dagua	2005	6	383	1.740	9.423,60
Cabeceras Río San Juan	2006	1	17	110	78,51
Cuellar Río San Juan	2006	1	13	70	385,97

Malaguita Bajo San Juan	2006	1	17	110	19,56
La Esperanza	2008	1	28	67	1.730,24
Gamboa	2010	1	45	181	2.964,81
Caucana	2010	1	55	197	747,39
Alto Río Dagua - Pacífico Cimarrones de Cisneros	2011	12	457	1912	2.985,05
Bellavista – Anchicayá	2007	1	24	68	284,74
Puerto España y Miramar	2014	1	81	345	9.895,69
Chucheros	2015	1	50	185	5.296,87
La Barra	2015	1	120	458	3.098,06
Río Naya	2015	1	4.551	16.782	177.817,62

Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos de INCODER (2015)

### **Anexo 2. Resguardos indígenas en el municipio de Buenaventura**

<b>Resguardo indígena</b>	<b>Grupo étnico</b>	<b>Año Constitución</b>	<b>Personas</b>	<b>Familias</b>	<b>Área (ha)</b>
Chachajo (dos lotes)	Wounaan	1981	104	24	2.240
Burujón	Wounaan	1983	172	37	6.960
Río Dagua	Wounaan	1984	42	15	43,36
Guayacán Santa Rosa	Wounaan	1989	53	14	236
Río Naya comunidad Joaquincito	Eperara Siapidara	1989	65	11	781,18
Chonara Huena	Embera	2003	62	13	459,73
La Delfina	Embera Chamí	2007	351	77	781,12
Jooín Jeb	Wounaan Nonam	2015	13	67	1.012,30
Cocalito	Wounaan Nonam	2015	13	67	626,18
Cerrito Bongo	Wounaan Nonam	2015	10	53	4.096,74

Fuente: elaboración propia IEI (2019) con datos de INCODER (2016)